

Cobián, Eduardo

Discursos pronunciados en el Congreso de los Diputados por el Ministro de Hacienda ... en defensa de las leyes económicas votadas por el Parlamento en el año 1910 / Eduardo Cobián.

Madrid : González y Giménez, 1910.

Signatura: 19392

La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

<http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html>

Aviso legal

Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de lucro siempre y cuando se cite la fuente

MAN
RSOS

92

BANCODE ESPAÑA

BIBLIOTECA

Eurosistema

7



1 100007 908244

19392

19392
DISCURSOS PRONUNCIADOS

EN EL

Congreso de los Diputados

POR EL

MINISTRO DE HACIENDA

D. Eduardo Cobián

EN DEFENSA DE LAS LEYES ECONÓMICAS

VOTADAS POR EL PARLAMENTO EN EL AÑO 1910



—1910—
GONZÁLEZ Y GIMÉNEZ
—Huertas, 16 y 18.—
— MADRID —

DISCURSOS PRONUNCIADOS

EN EL

Congreso de los Diputados

POR EL

MINISTRO DE HACIENDA

D. Eduardo Cobián

EN DEFENSA DE LAS LEYES ECONÓMICAS

VOTADAS POR EL PARLAMENTO EN EL AÑO 1910



—1910—

GONZÁLEZ Y GIMÉNEZ

—Huertas, 16 y 18.—

—MADRID—

DISCURSO

del día 2 de Julio de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 2 de Julio de 1910.

— 26 —

*Con motivo de la presentación del proyecto de
Presupuestos generales del Estado.*

— (X) —

El Sr. Ministro de HACIENDA: En nombre del Gobierno tengo el honor de presentaros, señores Diputados, el proyecto de ley de presupuestos para 1911, juntamente con otros que le complementan, y de todos los que voy á hacer una sintética exposiciòn.

Si España ha de ser un pueblo moderno y ha de entrar en la corriente del crédito Europeo, es necesario que los esfuerzos de todos se encaminen á la consolidaciòn del crédito público; á mantener c nstantemente y sin soluciòn alguna de continuidad la nivelaciòn del presupuesto.

Desde 1850 hasta 1900 todos los presupuestos se liquidaron con déficit, excepciòn hecha de los de 1876-77 1896-97 y primer semestre de 1899-900, que se saldaron con superávit, en cifras redondas de 16, 20, 9 y 77 millones de pesetas respectivamente.

Todos los demás presupuestos, los 46 restantes se liquidaron con déficit, cuyo promedio en ese período de tiempo fué de 79 millones de pesetas.

En 1900 se abre una nueva era para la Hacienda española, la de su normalidad.

A raíz de nuestros desastres coloniales, en aquellos angustiosos días en que nuestra deuda exterior se cotizaba en la Bolsa de París á 30 por 100 y los cambios se elevaban á 115; en aquellos angustiosos días en que el pesimismo que se había apoderado de la casi totalidad de los españoles creía inminente la quiebra del Tesoro, y que no tardaría en presentarse con todos sus horrores la bancarrota, un hombre ilustre á quien la patria debe inmensa gratitud, el Sr. Fernández Villaverde, con tanta inteligencia como fuerza de voluntad, acometió la grande obra de reconstituir la Hacienda y de salvar el crédito, presentando aquel célebre presupuesto de liquidación, de cuya savia se ha venido viviendo hasta hoy.

Desde 1900 á 1909 los presupuestos se han liquidado en contraposición de lo que había ocurrido anteriormente, con sobrantes, algunos de mucha entidad, como por ejemplo, los de 1906 que pasó de 100 millones de pesetas.

El presupuesto de 1909 se liquidó con un déficit de 53.362.930 pesetas sin perjuicio de las rectificaciones que se deriven de la liquidación definitiva; déficit que es consecuencia obligada de los gastos de carácter extraordinario que fué preciso realizar con motivo de los sucesos de Melilla y que ascendieron á 53.800.296 pe-

setas. Claro es, que de no haber surgido los referidos sucesos y de no haber tenido, por lo tanto, que hacerse tales gastos, el presupuesto hubiérase liquidado como todos los anteriores con superávit, con un superávit mayor de 18.000.000 de pesetas.

Pero, en fin, sea por lo que quiera, lo cierto es que el Presupuesto de 1909 se liquidó con déficit y que lo que importa es que no vuelva á liquidarse con déficit ningún otro Presupuesto, porque de lo contrario, sufriría tremendo golpe nuestro crédito; se creería que retrocedíamos en el camino emprendido en 1900 y que se volvía á aquellos desdichados tiempos del déficit crónico en que España figuraba en el cuadro de las naciones de Hacienda averiada. (*Muy bien, muy bien*).

El art. de 85 la ley fundamental del Estado preceptúa que cuando el Presupuesto no pueda ser votado antes del día 1.º del año económico seguirá rigiendo el anterior.

Sólo cerrando los ojos á la evidencia y empeñándose en no querer ver la realidad se puede desconocer que el cumplimiento de dicho precepto constitucional no está jamás exento de dificultades nacidas de inconvenientes derivados de la inevitable y constante mudanza de las circunstancias; y que, esas dificultades crecen, y esos inconvenientes se agigantan cuando en el curso del mismo ejercicio para que se ha dictado la ley de Presupuestos surgen sucesos como los que obligaron al Gobierno de S. M. en 1909 á reprimir y castigar los desmanes cometidos por las tribus vecinas de Melilla y á ocupar una parte de territorio marroquí á fin de evitar la repetición

de los hechos, ó cuando el cumplimiento de leyes como la de 1908 sobre la ejecución de obras navales, civiles é hidráulicas, entraña aumento de créditos en proporciones considerables.

Hoy que las Cortes comienzan sus tareas, deber del Gobierno es proponerlas los medios de hacer frente á semejante situación, así como legalizar la que por efecto de los sucesos indicados resultó el año último, en el sentido de exceder notablemente los gastos á las previsiones legislativas.

Sí el presupuesto para 1909 no consignaba ni era posible que consignara créditos relacionados con los sucesos de Melilla, sobrevenidos seis meses después de estar en ejercicio el presupuesto; y como al avecinarse dichos sucesos y en el curso de su desarrollo las Cortes no estaban abiertas, el Gobierno tuvo que subvenir á las nuevas necesidades haciendo uso de la facultad establecida en el art. 7.º de la ley de 1901, otorgando por medida gubernativa á los Ministerios de Guerra, Marina y Estado, créditos extraordinarios importantes 71.241.828 pts. de las que sólo se invirtieron 53.016.012 por haberse anulado 6.044.026 el 31 de Diciembre de 1909 en concepto de no utilizados, y haber pasado pesetas 12.181.791 á «Resultas», para satisfacerse en 1910 como procedentes de obligaciones contraídas y no pagadas.

Para conocer bien el total de los gastos efectuados en 1910 con motivo de la campaña de Melilla, hay que añadir á los 53.016.012 pesetas, 784.285 de otros créditos aplicados á los presupuestos ordinarios de los Mi-

nisterios de Estado, de Gobernación y de Fomento, resultando, por lo tanto, un total de pesetas 53.800.298.

Mi ilustre y querido amigo Sr. González Besada, tan pronto como se reunieron las Cortes en Octubre de 1909 se apresuró à presentar un proyecto de ley para dotar esas atenciones extraordinarias con recursos extraordinarios también, màs no habiéndose aprobado dicho proyecto ni podido cubrirse con los recursos propios del año más que 17.653.081 del total de los 53.016.012, el desnivel entre los gastos y los ingresos, salvo las rectificaciones que se deriven del examen de las cuentas definitivas ascendió á 35.362.930 pesetas, absorbiéndose por esa cantidad sobrantes de años anteriores

Tan anòmala situación es evidente que se reproduce en el corriente ejercicio si no se buscan los medios adecuados para evitarlo, ya que durante él han de satisfacerse los 12.181.791 de pesetas no pagados aunque si comprometidos en 1909 y proveerse, en espera de un arreglo con el Majzen que suministre las garantías adecuadas, á la seguridad de las comarcas ocupadas y de nuestras propias posesiones, lo cual ha impuesto una nueva organización del ejército y de la policía indígena en aquellos territorios; así como hacer frente á los gastos que ocasione la adquisición de material de campaña, la reconstrucción de lo antiguo, obras de fortificación, etcetera etc., etc.

El coste de todo esto nadie puede desconocer que no cabe dentro de los créditos que figuran en el actual presupuesto del Ministerio de la Guerra, ni en el de 3.000.000 concedido por Real decreto de 6 de Junio úl-

timo, y si el presupuesto de la Guerra ha podido sufragar algunas de tales atenciones ha sido refundiéndolas en las obligaciones normales, aun cuando guardando el método de no rebasar, como en el año próximo pasado ocurrió hasta que los créditos extraordinarios le fueron otorgados, la cifra que para servicios similares tiene concedida, y huyendo de que se impongan después reintegros á diversos capítulos y artículos con involuación de la contabilidad.

Pero en definitiva será menester, además del citado crédito extraordinario de 3.000.000 de pesetas, otro de 47.339.070 para restablecer los créditos agotados del presupuesto de la Guerra y para hacer frente á los calculados hasta 31 de Diciembre del año corriente.

Por otra parte, el crédito de 17.972.060 pesetas, incluído en el presupuesto de 1909 para cumplimiento de la ley de 1908, relativa á construcciones navales, aunque resultó bastante, porque el contrato con la Sociedad correspondiente no se celebró hasta el 16 de Junio, ni impuso por lo tanto, obligaciones màs que durante el segundo semestre del ejercicio no alcanza hoy para la observancia de las cláusulas que especifican la forma y plazo de los pagos á razón de un tanto por ciento determinado del total de la obra, según la importancia de la realizada, estableciendo intereses de demora por el aplazamiento en abonar los gastos. La subsanación de semejante deficiencia representa la suma de 17.978.382 pts.

Ahora bien Sres. Diputados, teniendo en cuenta el carácter extraordinario de dichos gastos militares y de construcciones navales à abonar dentro del ejercicio

corriente; y que así como no sigue un método financiero de sinceridad quien al calcular los recursos para gastos normales, computa ingresos extraordinarios ó se ilusiona con cálculos de ingresos que no responden á la realidad, no es adecuado que gastos de la índole de los de que se trata pesen sobre el presupuesto ordinario, destruyendo su equilibrio ú obligando á la generación presente á sacrificios; cuyo provecho han de recoger en tanta parte las venideras. (*Muy bien*).

Resuelto el Gobierno á mantener la política de nivelación, pero decidido del propio modo á dar satisfacción á los anhelos de mejoramiento en el orden material de los servicios públicos, presentará á las Cortes un proyecto estableciendo los medios convenientes para dotar al país en plazo breve de todos los elementos necesarios para el rápido desarrollo de su poder, cultura y riqueza. (*Muy bien*).

Los gastos militares y los de construcciones navales de que dejo hecho mérito que hay que abonar dentro del ejercicio corriente, tendrán en ese plan su rúbrica correspondiente, y definitiva; más como las circunstancias apremian y se hace menester arbitrar de modo inmediato recursos para subvenir á las atenciones en cuestión, el Gobierno estima que el procedimiento es emitir hasta una suma total de 81 millones de pesetas, Deuda del Tesoro en obligaciones negociables á la par, renovables cada seis meses, exentas de todo impuesto y contribución y que devengarán el interés de 3 por 100 anual, satisfecho por trimestres vencidos; y que el producto de esta negociación figure como ingresos

en el estado, letra *B* sección 5.^a de los Presupuestos del Estado, bajo el epígrafe de «Producto de negociación de obligaciones del Tesoro». Así se propone en uno de los proyectos de ley que tengo el honor de presentar.

En el presupuesto para el 1911 los gastos ascienden á 1.045.865.026 pesetas con 65 céntimos y los ingresos á 1.131.456.211 pesetas con 32 céntimos, resultando por tanto un superávit inicial de pesetas 85.591.184,67.

En los gastos de dicho presupuesto hay con relación al que rige los siguientes aumentos:

En obligaciones generales del Estado después de pesetas 1.233.579,99 por obligaciones de los servicios de Clases pasivas y Deuda.

En la Presidencia del consejo de Ministros, pesetas 25.105,56. La mayor parte de este aumento se contrae al Consejo de Estado.

En el Ministerio de Estado 871.775,50 pesetas para los servicios encaminados á afirmar y desarrollar nuestra influencia en Marruecos; á dotar bien otros que notoriamente no lo están, como lo revela el hecho de venir pidiéndose constantemente suplementos de crédito, y á la creación de una Legación en Rumanía y de varios Consulados en puntos importantes.

En Gracia y Justicia, el aumento es de 2.924.130,20, pesetas de las cuales 2.850.000 pesetas representan el importe de crédito para los haberes del personal de prisiones destinado á preventivas y correccionales que se satisfacen hoy por las Diputaciones y Ayuntamientos y que ha de pagarse en lo sucesivo por el Estado. Los demás aumentos son para mejoramiento de algunos servicios.

En el Ministerio de la Guerra hay un aumento de 30.711.123 pesetas por la elevación del contingente de 85.000 á 115.000 hombres á fin de que existan las debidas unidades orgánicas y estén suficientemente nutridas, y por la nueva organización que se ha dado al ejército de Melilla y á la policía indígena para asegurar, no sólo los terrenos ocupados, sino nuestras propias posesiones, hasta tanto que un acuerdo con el Majzen suministre los medios adecuados para conseguirlo.

En el Ministerio de Marina el aumento es de pesetas 2.199.998 para tener en tercera situación durante el año 1911 nuestros buques grandes, á fin de que pueda navegar el personal de la armada y adquiera la necesaria práctica del mar; para tener en tercera situación los nuevos cañoneros *Recalde* y *Laya*, para el servicio de Mar Chica, y para el aumento de créditos con destino á municiones, vestuario de la marinería y carenas y reparaciones.

En Gobernación el aumento es de 5.961.616 pesetas por causa de la mejora de 0,25 en el haber de la Guardia civil, á fin de remediar la situación económica de este benemérito Cuerpo, que tantos y tan importantes servicios viene prestando á la causa del orden social; por la creación de un tercio de dicho Cuerpo para Barcelona y de un escuadrón para la Coruña; por aumento de policía en Madrid, Barcelona y otras importantes poblaciones, y con destino á créditos para los servicios de Sanidad, instituto de Reformas Sociales é Instituto de Previsión; por el mejoramiento, en Correos y Telégrafos, de las conducciones terrestres y marítimas y de la

Oficina internacional de Berna y por la reforma de otros servicios.

En Instrucción pública el aumento es de 4.035 036 pesetas por la creación de escuelas de instrucción primaria; por convertir las hoy vacantes en graduadas; por el aumento de haberes de los maestros; por el mejoramiento del servicio de inspección de la primera enseñanza; por ampliación de estudios; por material pedagógico, científico y de Bellas Artes; por el crédito para alumnos y profesores pensionados en el extranjero, y por el mejoramiento, en fin, de otros servicios, como Colegio de Sordomudos, Astronómico, Catastro y Metrología.

En el Ministerio de Fomento el aumento es de pesetas 6.676.688 por los créditos que hay que llevar al presupuesto á los efectos de la ley de Comunicaciones y Pesca marítimas, por el mejoramiento de varios servicios y la creación de otros como la Dirección de Comercio y Trabajo, Inspección de Bancos y Sociedades anónimas, Bolsas de trabajo, oficinas de colocación, y cajas populares de seguros.

En el Ministerio de Hacienda, gastos de las contribuciones y rentas públicas, el exceso es de pesetas 5.862.942 por el aumento de 0,25 en el haber de los carabineros y mejoramiento de otros servicios de este Cuerpo, que tantos y tan buenos viene prestando en la represión del contrabando; por el aumento de crédito para dar mayor impulso al Avance catastral y Registros fiscales, verificándose simultáneamente los trabajos rústicos y urbanos à fin de que uno y otro se

terminen cuanto antes por requerirlo así el interés del Tesoro y el de los contribuyentes, si bien el mejor y más eficaz procedimiento para el descubrimiento de la riqueza oculta sería el catastro pero hasta tanto que se pueda acometer ese importante problema hay que activar el avance catastral y Registros fiscales; por el aumento de crédito para los gastos necesarios á la formación de los padrones de cédulas en las capitales; para la inspección técnica de los impuestos mineros y creación de laboratorios para el ensayo de minerales con objeto de comprobar la ley de los mismos y proceder á su valoración; por el aumento del crédito relativo á gastos de explotación de la mina *Arrayanes*, aumento que se estima necesario ya que han sido declaradas desiertas las subastas de la referida mina; por el aumento de 20 profesores mercantiles á los efectos de la contribución de utilidades; por el aumento del crédito para el servicio de visitas de inspección y por el aumento derivado del servicio de renovación de los títulos de la Deuda al 4 por 100 interior y de la confección de hojas de cupones para aplicar á los títulos de la deuda amortizable al 5 por 100; para el mejoramiento de varios servicios de los distintos Centros del Ministerio, y, en fin, por la creación de la Dirección de Propiedades é Impuestos y de las Administraciones provinciales con la misma denominación para desarrollar y dar gran impulso á los impuestos indirectos que deben ser la base de nuestra Hacienda como lo són de las de los pueblos modernos.

Tengamos en cuenta que nuestro actual sistema

tributario en la época en que se estableció fué digno de todo encomio y aplauso, pero no se puede desconocer que llevaba en sus entrañas un germen malo para la Hacienda: la preponderancia de las contribuciones directas sobre las indirectas; que nosotros no hemos dado un solo paso en la reforma de dicho sistema tributario, limitándonos á aumentar las cuotas. Todos los países han reformado sus regímenes impositivos, desarrollando, dando grande impulso á los impuestos indirectos que hoy constituyen, como ya he dicho, la base de la Hacienda de todos los pueblos cultos. Pues bien para conseguir esto, creo la Dirección y Administraciones de impuestos indirectos.

Como aparte de estos aumentos se suprime el cupo de consumo de sal, supresión que representa una pérdida de 8 millones de pesetas para el Estado, y éste además se desprende de otros ingresos para poder empezar á reconstituir las haciendas municipales sobre bases más sólidas y justas que las actuales, se comprenderá fácilmente la necesidad de reforzar los ingresos, para lo cual presento varios proyectos de ley reformando las contribuciones territorial y de utilidades; y los impuestos mineros, de transportes, derechos reales en las sucesiones hereditarias, cédulas y azúcares, de todos los cuales voy, en muy pocas palabras, á exponer las líneas generales:

Contribución territorial.—Los puntos más importantes de esta reforma son los siguientes:

1.º Que todos los pueblos que en 31 de Agosto de de cada año tuvieren aprobado el Avance catastral de

la riqueza rústica ó el registro fiscal de edificios y solares sean eliminados del repartimiento general inmediato siguiente para la distribución del cupo de la contribución territorial, liquidándose y exigiéndose ésta en dichos pueblos con el carácter de cuota á razón de 14 por 100 para la rústica, y de 17,50 para la urbana sobre la riqueza líquida imponible inscrita en aquéllos documentos; continuando todos los demás pueblos de España, con excepción de las provincias Vascongadas y Navarra, tributando por el sistema de cupo, distribuyéndose éste con arreglo á los tipos de imposición fijados en el art. 11 de la ley de 7 de Julio de 1888, excepto el de la segunda sección de urbana, que quedará reducido al 21,50 en vez del 23 que le fué señalado por aquélla ley.

2.º Que por el Ministerio de Hacienda se procederá al estudio y planteamiento de un nuevo sistema de evaluación del producto líquido imponible de las fincas rústicas para los efectos del Avance catastral, fundado en la determinación de su capacidad productiva expresada en dinero para todas las tierras sometidas al mismo sistema de explotación agrícola dentro de cada zona ó región de condiciones análogas; y que las tarifas que de este modo se redacten y aprobadas que sean por el Gobierno regirán durante diez años, en los cuales no sufrirán alteración las cuotas tributarias cualesquiera que sean las mejoras ó modificaciones que experimenten las fincas á que se refieran dichas cuotas.

Es decir, que se establece un nuevo sistema ó procedimiento de estimación del líquido imponible con

Sociedades anónimas y las comanditarias por acciones, se extienda á los beneficios que obtengan las demás Sociedades comanditarias, las regulares colectivas y, en general, cualesquiera otras que tengan por objeto algún fin lucrativo, y á las cuentas en participación.

2.º Para evitar el abuso que se viene cometiendo por más de 170 Sociedades, número que seguramente irá en aumento, que dejaron de pagar por falta de utilidades en el año 1908, se propone en la reforma que se declaren compatibles las cuotas de contribución industrial correspondientes á las industrias que ejerzan las Sociedades con las que deban satisfacer en concepto de utilidades, pero computándoles en cada año lo pagado por industrial como parte de lo que según sus respectivos balances les corresponda satisfacer en concepto de utilidades, bien entendido que la falta de éstas ó la inferioridad de la cuota que por ellas haya de satisfacerse con relación á la pagada por industrial hará firme y subsistente el pago de ésta; y

3.º Con el mismo propósito de establecer la equidad tributaria se sujetan en el proyecto al pago de la contribución de utilidades los intereses de las cuentas corrientes en metálico. (*Rumores.*) Las cuentas corrientes con interés he dicho, Sres. Diputados. ¿Cómo me había de referir á las sin interés? Si no hay interés no hay utilidad, y ésta es la que se grava. El capital entregado bajo la condición de recibir intereses, no es depósito, sino préstamo, según el derecho mercantil, y no hay razón alguna para que dichos intereses continúen exentos del tributo. (*Aprobación.*)

Otras disposiciones contiene, además, el proyecto encaminadas à facilitar la investigación y la estadística del tributo.

Impuestos mineros.—En la reforma que se propone se mantiene la actual cuantía del canon de superficie en las concesiones para la explotación de sustancias minerales, pero se modifica la forma de su pago.

Hoy el canon es anual y se paga por trimestres; y como quiera que no puede declararse la caducidad de la concesión mientras no se haya dejado de pagar los cuatro trimestres, es evidente que con pagar uno se burla la ley y se hace imposible la declaración de caducidad. Para evitar esto se propone que el canon se pague de una sola vez por el concesionario dentro del año, y si no lo hace efectivo quedará caducada *ipso facto* y por ministerio de la ley la concesión, sin necesidad de expediente ni de declaración alguna, con lo cual se cumplirá el decreto-ley de bases de 1868 que establece esa forma de perderse la propiedad minera.

No se altera tampoco el tipo actual del impuesto que grava el producto bruto de la riqueza minera, comprendiendo en ella todas las sustancias enumeradas en el art. 2.º de la ley de 28 de Marzo de 1900, y continuará entendiéndose por producto bruto de una mina el valor íntegro del mineral tal como se halle en los depósitos ó almacenes del establecimiento en estado de venta para su beneficio.

La determinación de este valor para los efectos fiscales se obtendrá por la Hacienda independientemente de lo que el concesionario declare y del destino

que se dé al mineral, deduciéndolo de la ley y cantidad de éste, asignándole el precio medio de venta corriente, según las cotizaciones del trimestre natural anterior en los mercados reguladores, y del valor así obtenido se rebajarán todos los gastos indispensables para la situación del mineral desde los depósitos de la mina al mercado regulador.

También se propone en esta reforma la creación de un servicio técnico à cargo de ingenieros de minas afectos exclusivamente al Ministerio de Hacienda y dependientes de la Dirección general de Contribuciones para la inspección de los impuestos mineros.

Estos ingenieros tendrán las mismas funciones fiscales que tienen hoy los ingenieros jefes de las provincias que dependen del Ministerio de Fomento, y las administrativas; es decir, que recibirán, aprobarán ó modificarán la declaración ó relación del concesionario; examinarán la ley del mineral, para lo cual se establecerán laboratorios y practicarán la liquidación determinando la cuota que cada concesionario debe satisfacer.

En realidad no se hace con esto otra cosa que extender à la riqueza minera el criterio que la administración viene aplicando para todas las contribuciones de productos. En efecto, hoy la fijación de la riqueza imponible esta à cargo, en rústica, de ingenieros agrónomos; en urbana, de arquitectos; en utilidades, de profesores mercantiles, y en industrial de ingenieros industriales, todos ellos afectos al Ministerio de Hacienda y dependientes de la Dirección general del ramo.

Y, en fin, en la reforma se propone la supresión de

la exención de los carbones, puesto que éstos gozan ya de la prima de distribución establecida en la ley de Comunicaciones y pesca marítimas, prima de distribución que es de 30 céntimos por tonelada.

Con estas reformas estimo se mejorará la recaudación de estos impuestos.

Derechos reales en las sucesiones hereditarias.—

Según esta reforma serán en lo sucesivo dos los impuestos por causa de sucesión hereditaria y recaerán respectivamente sobre la totalidad del caudal que haya de ser distribuido, adjudicado ó aplicado y sobre el importe de los bienes que correspondan à cada heredero, legatario ó partícipe. El primero de estos impuestos, que será progresivo, se denominará de *conjunto*, y el segundo, de naturaleza proporcional, se nombrará de *cuota*.

Este se realizará con estricta sujeción á la ley de 2 de Abril de 1900, sin más diferencia que un ligero aumento en los distintos epígrafes de la escala, excepción hecha de las sucesiones directas legítimas y de la de los cónyuges.

El impuesto de conjunto gravará todas las herencias cuyo importe líquido exceda de 5.000 pesetas, y se hará efectivo con arreglo á una tarifa muy prudente y moderada que empieza en 0,50 para las herencias hasta 25.000 pesetas y termina en el 3 por 100 para las de 2 millones de pesetas en adelante.

El impuesto de conjunto tiene su precedente en la legislación inglesa, en la ley de 1894. Es de advertir que en esta fecha Inglaterra era modelo de individua-

lismo económico; así como también es de notar que, á pesar de las actuales corrientes económicas en dicho país, continúa siendo proporcional el impuesto de cuota.

El de conjunto es, como dicen los ingleses, para compensar la desigualdad que causan los demás tributos; es un impuesto diferido hasta después de la muerte y representa los gravámenes que el causante debió pagar en vida y no satisfizo; es un impuesto que no mira al heredero y sí sólo al causante y á la total fortuna que deja, prescindiendo de cuantos y quienes sean sus herederos.

Es innegable que nuestro sistema fiscal no puede procurar la igualdad del impuesto, la igualdad del sacrificio; ¿quien duda Sres. diputados, que el que tiene 20.000 pesetas y da el 3 ó 4 por 100 hace un mayor sacrificio, un mas considerable esfuerzo que el que tiene 2 millones de pesetas y da ese mismo 3 ó 4 por 100? (*Aplausos.*)

Nuestro sistema tributario grava más á las fortunas modestas y á los pequeños propietarios que á las fortunas cuantiosas y á los grandes propietarios. (*Muy bien, muy bien.*)

De la investigación ya hecha durante año y medio por la Comisión consultiva para la transformación del impuesto de consumos, aparecen datos curiosísimos recogidos de presupuestos familiares de distintas clases sociales; resulta que las rentas inferiores á 1.250 pesetas están gravadas por consumos sólo por cuota del Tesoro y aparte los recargos municipales con más de

un 5 por 100, mientras que las rentas de 30.000 pesetas no pagan sino el 0,35 por 100. (*Aprobación.*)

En cuanto á la riqueza territorial, es notorio que las mayores ocultaciones son, no sólo absoluta, sino relativamente las de los grandes propietarios.

Los valores mobiliarios no están en España democratizados como lo están en otros países, puesto que en general los poseen las clases acomodadas y en su casi totalidad sustraen al impuesto que grava las sucesiones. La progresión en el nuevo tributo de conjunto que se propone en el proyecto compensará, en parte, la desigualdad que hoy existe entre la herencia inmobiliaria de los menos acomodados, que no puede escapar al tributo, y la herencia mobiliaria de los más ricos, que se sustraen poco menos que totalmente.

En general descansa nuestro sistema tributario en las contribuciones directas, y el carácter de ellas es el de imposición sobre los productos, á saber: productos de la agricultura, de la ganadería, de la propiedad urbana, de los capitales mobiliarios y de las industrias y profesiones. Esta tributación, que mira al producto y no al poseedor, es, por su naturaleza, proporcional y no progresiva; de donde resulta que la desigualdad de sacrificio en la cual estriba la del tributo, causada por las contribuciones indirectas, perdura en España en las directas, las cuales, de idéntico modo que aquéllas, son carga más dura para el contribuyente más pobre.

Nosotros, en puridad, tenemos mayores motivos que Inglaterra para establecer el impuesto progresivo

sobre el conjunto de los bienes relictos. (*Muy bien, muy bien.*)

Sí; nuestro sistema de contribuciones indirectas comprende casi todos los artículos de primera necesidad y, por tanto, pesa más sobre el proletariado que el conjunto de análogos tributos ingleses de accisas, licencias y aduanas que dejan libres tales artículos.

El sistema Español de contribuciones directas sobre el producto no tiene ningún «mínimo exento» ni ninguna rebaja para las clases inferiores; el *incometax* inglés, sí.

Los gravámenes que pesan sobre las rentas del trabajo personal (sueldos) llegan en España á cuotas de verdadera expoliación, lo cual no ocurre en Inglaterra.

Nuestro sistema de Catastros, Registros y Matriculas está basado en promedios de producción más duros y desiguales que los que sirven de base á las «cédulas» del impuesto inglés. (*Muy bien.*)

Y, en fin, Sres. Diputados, es de irrefragable evidencia que no podemos volver la espalda á la realidad; que no podemos desconocer cuales son las tendencias de la moderna economía sociológica, y que las corrientes hoy en todos los pueblos van á la construcción en forma progresiva del impuesto sobre las herencias en general, por demandarlo así de consuno las exigencias de la justicia y las de la flexibilidad del impuesto. (*Aprobación.*)

En el proyecto de que se trata se establece también un impuesto equivalente al de conjunto, al que quedarán sometidas aquellas entidades jurídicas que por no hallarse bajo el imperio de las leyes naturales bioló-

gicas no producen jamás la trasmisión hereditaria de los bienes que poseen. El precioso privilegio de la inmortalidad no parece que deba eximir las perpetuamente de algún tributo que equivalga al que por causa de muerte percibe el Estado; y la necesidad de cubrir los compromisos de éste, bien legítima el gravamen propuesto, cuyo tipo de imposición, que es el de 0,25 al año, fué formulado ya en otro proyecto recientemente presentado por mi querido amigo el Señor González Besada.

Este impuesto de 0,25 lo pagarán las Asociaciones, Corporaciones y demás entidades de carácter permanente que vengan poseyendo ó que posean en lo sucesivo bienes no sujetos á trasmisión hereditaria por ser propios ó dotales de la entidad á quien pertenezcan, regulado por el líquido imponible señalado á los inmuebles y por el promedio del que durante el año hayan alcanzado en la Bolsa los efectos públicos, cuando se trate de títulos de la Deuda ó de inscripciones representativas de los mismos.

Para los valores mobiliarios que se coticen en Bolsa se aplicará el mismo criterio. Los que hayan dejado de cotizarse se valorarán por el tipo medio del año en que hayan tenido cotización, y los que nunca se hayan cotizado, por el tipo de su emisión.

De este impuesto quedarán excluidos, los hospitales, hospicios, casas de caridad, y, en general, las fundaciones dedicadas exclusivamente á la beneficencia, y aquellos bienes que estén exentos absoluta y permanentemente de la contribución territorial.

A parte de estas reformas en el proyecto de que se trata se anuncian otras dignas de atención.

Es una de ellas la supresión de la exención fiscal otorgada por la ley de 1900 á las herencias inferiores á 1.000 pesetas, inmunidad que ha privado al Fisco de ingresos no despreciables, producido combinaciones y ficciones dirigidas á disminuir el importe efectivo del caudal hasta encerrarlo en los límites de tal excepción y relajado, en fin, el precepto constitucional que obliga á todos á contribuir en proporción á sus haberes.

También se someten á los impuestos hereditarios los bienes muebles que los extranjeros posean en España, rompiendo así el Fisco con la teoría del estatuto personal que funestamente ha venido inspirando todo nuestro derecho, y que no ha impedido á otras Naciones á exigir á los Españoles los tributos legalmente establecidos sobre cuantos bienes poseyesen en ellas,

Y, por último, se propone que en las sucesiones abintestato los colaterales de grados posteriores al cuarto sean considerados como extraños para los efectos del impuesto, ya que esos herederos llamados por alguien «rientes» deben su fortuna, más que á la voluntad consciente del causante, á los halagos de la suerte.

Modificación del impuesto de transportes.—No deben prodigarse, Sres. diputados, las exenciones tributarias, porque dañan á la recaudación, desnaturalizan á los impuestos y, lo que es peor, los desacreditan, toda vez que difícilmente podrá nadie estimar que son

justos aquellos de cuyo pago se exime á una parte de los ciudadanos.

En el impuesto de transportes se han ido declarando tantas exenciones, que ya se observan los daños indicados, y que para remediarlos importa suprimirlas.

No hay que olvidar que cuando se han establecido dichas exenciones, las circunstancias en que se encontraba la Hacienda eran muy distintas á las actuales; y, principalmente, que las exenciones del impuesto sobre las mercancías transportadas por vía marítima y por los caminos de hierro y ordinarios que enlazan con con los extranjeros, se acordaron por el Gobierno, con carácter transitorio, empleando en algunas de las disposiciones en que se establecía la exención, la locución de *suspensión del impuesto*, con el pensamiento, sin duda, de estudiar más ámpliamente los medios de favorecer las exportaciones y de fomentar los transportes directos; y como quiera que estos propósitos se hallan ya compensados en la ley de Comunicaciones marítimas de 14 de Junio de 1909, que concede mayores primas á la construcción de buques; primas y subvenciones á la navegación; exención de impuesto de transporte en el desembarque de algunas mercancías en tráfico directo; reducciones en los derechos sanitarios y obvenciones de los cónsules y otras ventajas que, al favorecer á la navegación y al comercio, implican aumento de gastos y disminución de ingresos en los Presupuestos generales del Estado; es claro que, dados los sacrificios que para el Tesoro supone el cumplimiento de lo preceptuado en dicha ley de Co-

municaciones marítimas, es necesario derogar las demás disposiciones que modificaron las cuotas de la tarifa de transportes, pues la equitativa distribución de los tributos exige la supresión del doble régimen de favor de que actualmente disfruta la navegación.

A esto se encamina el proyecto que tengo el honor de presentar, restableciendo la ley de 20 de Marzo de 1900, que taxativamente señaló las excepciones procedentes, derogando los preceptos posteriores que las ampliaron y limitando la excepción establecida en el art. 4.º de dicha ley á los billetes de tercera clase en los transportes por ferrocarriles, lo cual en puridad no es una verdadera excepción, toda vez que lo que en realidad se hace es acomodar el tipo de gravamen á la capacidad económica media de los contribuyentes.

El proyecto á que me estoy refiriendo alcanza otros dos extremos: la reducción al 1 por 100 del premio que en concepto de recaudación del impuesto de transporte perciben las Compañías ferroviarias, y el pago del mismo por las Empresas que para el transporte de sus minerales utilicen ferrocarriles propios, ya que para fijar el valor del mineral á los efectos fiscales se les descuenta el coste del transporte.

Impuesto de cédulas personales.—Aconsejan la reforma de este impuesto dos órdenes de consideraciones: uno, que afecta á la esencia misma de la tributación personal, y otro, que hace relación á la técnica del tributo.

La ley de 1881 estableció el impuesto de capitación gradual; pero no lo construyó bien técnicamente al

acumular las cuotas por territorial é industrial sumando así dos valores heterogéneos, al no acumular sueldos al no comprender las rentas de los valores mobiliarios y de la riqueza minera y al establecer, en fin, tres tarifas: una, para territorial é industrial; otra, para sueldos, y otra, para inquilinatos; ésta como corrector general; tarifas que no guardan relación entre sí.

Aunque no fuera más que por esto que afecta á la técnica del tributo estaría justificada la reforma. Pero hay otras razones que la aconsejan y que, como he dicho antes, afectan á la esencia misma de la contribución personal.

En la reforma que tengo el honor de proponeros, Señores Diputados, se establecen tres clases de cédulas: comunes, graduadas y especiales.

Las primeras son de 0,50 y vendrán obligadas á pagarlas todas las personas naturales mayores de catorce años residentes en España. Esta clase de cédula constituye un verdadero impuesto de capitación simple y con carácter transitorio hasta tanto que pueda suprimirse.

Al pago de las cédulas graduadas vendrá obligado todo titular de una renta cualquiera que sea su origen y los factores que la integren; y ya sea ese titular persona natural mayor ó menor de catorce años ó persona jurídica, y con arreglo y sujeción á una tarifa que comprende 29 clases de cédulas, cuyas cuotas son de 1,30 para las rentas que no excedan de 750 pesetas y de 2.500 para las de 250.000 en adelante, si bien cuando el exceso de la renta sobre esta cantidad sea producido

por los intereses de ciertos y determinados valores mobiliarios que con mayor facilidad se sustraen al impuesto, entonces se pagará un 1 por 100 más del exceso. Esto constituye la cédula especial.

Las cédulas graduadas entrañan un verdadero impuesto sobre la renta dentro de los límites de la referida tarifa.

Esta tiene grandes diferencias con relación á la actual.

La tarifa de la reforma es progresiva; acaba en pesetas 250.000 y en ella no se establece más que una línea de gravamen, toda vez que éste es sobre la renta y la renta es una entidad indivisible, cualquiera que sea su origen.

Y la tarifa vigente es arbitraria y con tendencias á gravar considerablemente á los humildes, á las pequeñas rentas del campo que resultan gravadas en más del 23 por 1.000, gravamen que se reduce grandemente en la reforma, así como se exime del impuesto á los jornales que no excedan de 1.000 y 1.500 pesetas al año en las poblaciones menores ó mayores de 50.000 almas respectivamente. Termina en 30.000 pesetas, para sueldos, en unas 57.000 pesetas para territorial, y en 120.000 para industrial, y establece diversas líneas de gravamen: una para territorial, otra para industrial, otra para sueldos y otra para inquilinatos, y multitud de ellas para las innumerables combinaciones de territorial é industrial; territorial y sueldos; industrial y sueldos; territorial, industrial y sueldos, aparte de las muchísimas líneas de gravamen que resultan de la acu-

mulación de intereses de valores mobiliarios reflejados en el inquilinato.

Insisto, Sres. Diputados, en que las cédulas graduadas constituyen un impuesto sobre la renta dentro de los límites de la tarifa que termina en pesetas 250.000; no llevando más allá dicho impuesto por temor á comprometer el éxito de una reforma en que fundo grandes esperanzas.

A nadie se le oculta la resistencia que los contribuyentes oponen á la implantación de todo impuesto personal; nadie puede desconocer que para implantar el impuesto personal sobre la renta en toda su pureza es necesaria la cooperación de las Corporaciones locales, y éstas desgraciadamente no están en condiciones de prestarla.

La reforma que propongo es un paso en el establecimiento de la justicia de la tributación; es la iniciación de la transformación profunda y radical que se impone en las bases de nuestro actual régimen tributario.

Impuesto de azúcares.—La ley de 1907 tiene dos partes: la que prohíbe la construcción de fábricas durante el período de tres años, que expira en el mes de Agosto próximo, y la que limita esa prohibición de construir fábricas durante otros tres años consecutivos á menor distancia de 80 kilómetros de otra ya establecida.

En la reforma que propongo se respeta esa ley pero se precisa lo que ha de entenderse por fábrica establecida á los efectos del art. 2.º de la misma, proponiéndose que se declare que toda fábrica que durante dos

campanías consecutivas no haya trabajado, por lo menos en cada una de ellas treinta días no tendrá el carácter de fábrica establecida.

Además de esto, se procura en la reforma atender los intereses de los cuatro factores que integran el problema de la fabricación del azúcar.

El interés del Estado, elevando el impuesto de 35 á 50 pesetas; el del consumidor, procurando que el precio del azúcar sea menor que el actual y para lo que no ha de intervenir directamente el Estado, ni por medio de tasas, ni valiéndose de los despachos reguladores que tan escasos resultados dieron, se valdrá del Arancel reduciendo el derecho del azúcar de 85 á 75 pesetas; el del productor de la remolacha, procurando que ésta tenga un precio mínimo regulador y para conseguirlo se propone en la reforma que, cuando en el contrato de compra de remolacha ó de caña aparezca un precio medio general inferior á 35 pesetas la tonelada de remolacha con un rendimiento de 11 por 100 ó de caña con un rendimiento de 8,50 el Gobierno podrá rebajar el Arancel en la debida proporción para que nunca rebase el margen protector. Estos precios se revisarán cada tres años.

Este impuesto es odioso por la forma vejatoria y costosa de su exacción y por su desigualdad. Es unánime esta opinión y la de que debe suprimirse ó transformarse; pero ya no lo es tanto en cuanto al procedimiento para lograrlo.

Se han dibujado hasta ahora dos criterios: el de las desgravaciones parciales, inspiradas en cada caso en

particulares conveniencias del consumo y de la producción; y el, que se basa fundamentalmente en la supresión del tributo sustituyéndolo por nuevos gravámenes.

Lo primero, la desgravación por especies no evita ciertamente los males que se trata de remediar. Basta que haya una especie sin desgravar, para que la forma de la exacción siga siendo vejatoria y costosa. Recordemos à este propósito lo ocurrido cuando las desgravaciones de los trigos, harinas y vinos.

En cuanto à la supresión del tributo sustituyéndolo por nuevos gravámenes, sólo diré que es totalmente imposible en estos momentos. Dadas las actuales circunstancias, es imposible lanzar sobre las demás contribuciones del Estado una carga adicional de 133 millones de pesetas líquidas, que es á lo que asciende el importe del impuesto de consumos por la cuota para el Tesoro y los recargos municipales; pues suman éstos 80 millones, y aquél 53.

Aun en el supuesto, aun aceptando como verdad demostrada la hipótesis de que el Estado se encontrase, que no se encuentra, en condiciones de poder prescindir de los 53 millones de sus derechos por el impuesto de que se trata, ningún beneficio obtendría el consumidor, quien continuaría pagando esa suma, juntamente con los recargos municipales, sin más diferencia que el hacerlo al Ayuntamiento en vez de al Estado. Y si alguna duda cupiera, la desvanecería en absoluto y por completo el recuerdo de lo que ocurre en Burgos, Coruña, La Unión y Vigo, que á pesar de no pagar cupo para el Teroro, continúan no obstante, administran-

do el impuesto por medio de fielatos en provecho exclusivo de sus Municipios.

Nada he de decir de la imposibilidad en que se encuentran los Ayuntamientos de prescindir de los 80 millones que vienen percibiendo por los recargos de consumos, toda vez que constituyen el nervio de sus haciendas, pues éstas se nutren principalmente con los productos de ese impuesto.

Lo más lógico y eficaz para conseguir el fin que se persigue es constituir sólidamente las haciendas municipales; porque sólo así llegará el día en que los Ayuntamientos puedan prescindir de los ingresos que hoy tienen por los recargos de consumos, que será precisamente el momento en que el Estado renuncie también á sus ingresos por el propio concepto, y, por consiguiente, en que quede suprimido en su totalidad el impuesto de consumos.

En el proyecto de que se trata se procede á la reconstitución de las haciendas municipales.

Se propone la supresión del cupo especial de sal, que es uno de los que más duramente pesan sobre los humildes y los pueblos; entre otras causas por la fijación puramente mecánica de ese cupo que atiende sólo al número de los habitantes del Municipio y no á su consumo efectivo, y por la enorme defraudación en dicha especie, que hace que en la mayoría de los casos no cubra la recaudación más que parte del cupo, á lo sumo el 60 por 100; y como quiera que el Municipio tiene que pagar la diferencia, es claro que esto se convierte en una

disminución del Tesoro municipal à que no corresponde ingreso alguno equivalente.

Por lo tanto, claro es, Sres. Diputados, que esta supresión representa para los Ayuntamientos una gran economía, que se puede calcular aproximadamente en unos cuatro millones de pesetas.

Por otra parte, se les releva, lo mismo que à las Diputaciones provinciales, de la obligación de reintegrar al Estado los haberes del personal de prisiones que presten sus servicios en las preventivas y correccionales, lo cual significa también una economía para los Ayuntamientos y Diputaciones de cerca de tres millones de pesetas.

Se ceden además à los Ayuntamientos los impuestos de carruajes de lujo y círculos de recreo, con la amplitud necesaria para que puedan determinar las bases y tarifas de dicha imposición; se suprime en el plan general de los recursos del Estado el 20 por 100 de la renta de propios; el 10 por 100 de aprovechamientos forestales en los montes à cargo del Ministerio de Hacienda, y el 10 por 100 sobre el arbitrio de pesas y medidas; se autoriza à los Ayuntamientos de las poblaciones donde tuvo aplicación la ley sobre desgravación de vinos, para establecer patentes sobre la venta de dicho artículo; se extiende à todos los Ayuntamientos, excepto à los de las provincias Vascongadas y Navarra, la facultad concedida à los de las capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes de recargar hasta un 40 por 100 las cuotas de la contribución industrial y de comercio, pero limitándola para todas ellas à

un tercio de las cuotas futuras, en las cuales se hallan consolidadas las dos décimas adicionales; y se autoriza, en fin, á todos los Ayuntamientos para imponer arbitrios sobre los solares en relación con el aumento de valor obtenido entre dos enajenaciones consecutivas de los mismos, y sobre el precio de los inquilinatos. (*Ru-mores.*)

Pero, Sres. Diputados, ¿es que no se van á formar las haciendas municipales? Al lado de todo lo que acabo de decir, que constituye un eslabón de la cadena, está la preparación del organismo que ha de desarrollar las contribuciones indirectas para el Estado. Hoy los Ayuntamientos perecen porque tienen exceso de contribuciones indirectas y escasez de directas, lo contrario de lo que le pasa al Estado. Tened, pues, calma; ya vendrá el debate y todo se discutirá.

Además se solicitan dos autorizaciones: una para elevar al 2 por 1.000 el impuesto del 1 por 1.000 en concepto de timbre por negociación ó transmisión. La razón de este aumento es obvia. El 2 por 1.000 es lo que por razón de timbre tiene que pagar la transmisión de la cosa mueble.

Y la otra autorización se refiere al aumento hasta el 15 por 100, en una ó varias veces, según el Gobierno lo estime necesario, del precio de las labores de la renta de tabacos.

También presento otro proyecto sobre el monopolio, por vía de ensayo, por parte del Estado para la fabricación directa y venta de las cerillas. En ese proyecto se propone la creación de una Junta, que estará formada

por dos Sres. Diputados y dos Sres. Senadores que, juntamente con el director del ramo, constituirán un Consejo de administración de ese monopolio. Tal vez este proyecto sirva de base à ulteriores propósitos, inspirados en la defensa de los intereses del país.

Todos estos proyectos, juntamente con los que se están ultimando y muy en breve se presentarán, contienen el pensamiento económico y financiero del Gobierno.

Los proyectos en preparación son: regulando las relaciones del Tesoro y el Banco de España; ley de empleados; de administración y contabilidad del Estado; prescripción de créditos y normalización de los servicios de la Deuda; reorganización de los servicios de la Caja de Depósitos; extinción de la Deuda perpetua exterior al 4 por 100 estampillada y supresión del *afidavit*, destinando anualmente para dicha extinción 7 millones de pesetas oro, y, por último, el proyecto de ley relativo á la emisión de un empréstito en la forma y condiciones que se fijarán, y en el cual, además se darán al país todas las garantías necesarias de que ni una sola peseta de dicho empréstito se gaste en sueldos, gratificaciones, indemnizaciones, dietas, etc., etc., del personal administrativo, y que no se invertirá ninguna cantidad más que en aquello que taxativamente se determine, previa autorización del Parlamento, para lo que el Ministro de Hacienda presentará con el presupuesto un plan de obras para dos años, juntamente con un estado justificativo de las realizadas en el ejercicio anterior, llevándose á artículos adicionales de cada

una de las respectivas secciones del presupuesto los créditos necesarios.

El Gobierno entiende que hay que satisfacer los anhelos de reconstitución de la Patria, dotando al país de todos los elementos necesarios para el rápido desarrollo de su poder, cultura y riqueza.

El Gobierno estima que si España ha de ser un pueblo moderno y ha de ocupar en Europa el puesto á que tiene derecho, es preciso que con la mayor urgencia se proceda á resolver los tres grandes problemas planteados: organización de la defensa nacional, de la enseñanza, y fomento y desarrollo de la riqueza. (*Muy bien.*)

Si no queremos, Sres. Diputados, estar sujetos al capricho ajeno, si deseamos estar preparados para las contingencias del porvenir, si hemos de defender nuestra integridad territorial y nuestra independencia, precisa que seamos fuertes en la tierra y en el mar; necesitamos ejército, marina, fortificaciones.

Sí; un ejército bien organizado, teniendo en cuenta que los dos grandes principios que informan toda buena organización militar son: que no haya más unidades orgánicas que las absolutamente precisas y con el contingente necesario, y que exista la debida proporción entre las distintas armas de combate; un ejército bien instruído, debiendo para ello efectuarse frecuentes prácticas de tiro al blanco, maniobras militares, ensayos de movilización, no sólo de las primeras reservas, sino también, de vez en cuando, de las segundas; y el establecimiento de la instrucción militar obligatoria

que servirá de preparación para más tarde implantar el servicio militar obligatorio; un ejército con todo el equipo, vestuario y armamento preciso para las fuerzas en activo y las de las reservas, á fin de que puedan prestar con toda prontitud el servicio en los puestos que se le asignen, sin dilaciones siempre perjudiciales, un ejército con todos los servicios bien organizados y en especial los administrativos y de Sanidad, que tienen grande importancia en los ejércitos modernos; con todos los medios de transporte, tren de sitio, cuerpo de tren, parques completos, medios para el municionamiento en el campo de batalla de la infantería y artillería, cuarteles, hospitales, campos de instrucción y de maniobras; un ejército con toda la necesaria y moderna artillería de campaña, costa y plaza; y, en fin, un ejército con sus industrias militares en perfecto desarrollo para no continuar siendo tributarios del extranjero: puesto que es principio aceptado por todas las naciones, que la que tiene atrasadas sus industrias militares no puede ser independiente.

En una palabra, Sres. Diputados, necesitamos tener un ejército organizado adecuadamente y con todos los servicios, elementos y medios necesarios para poder pasar fácil y rápidamente del pie de paz al pie de guerra.

Por otra parte si hemos de tener personalidad en el mar, si no ha de seguir nuestra presente vulnerabilidad en el orden internacional, si hemos de garantizar la vida externa de una Nación que recibe del mar, y por el mar envía más del 35 por 100 de sus importaciones y exportaciones, si hemos de defender nuestras dilatadas costas

y los archipiélagos Canario y Balear, necesitamos marina militar; y, en fin, si hemos de estar á cubierto de ajenas codicias y procurar no ser presa del primer ocupante, necesitamos fortificar nuestras costas, puertos y fronteras.

El Gobierno estima asimismo, que el estado actual de la instrucción pública no puede ser más deplorable y que hay por lo tanto que ir á su completa reorganización.

No tenemos más que unas 25.000 escuelas, sin condiciones higiénicas, sin luz, sin ventilación, sin menaje escolar, sin material pedagógico. Así se explica que en España haya tantos analfabetos. Tenemos 59 institutos, la mayor parte instalados en edificios viejos, sin bibliotecas, sin gimnasios, laboratorios, museos, colecciones, gabinetes de física y jardines botánicos. Nuestras Universidades carecen de material científico.

Y todo esto es consecuencia lógica de que mientras los demás países dedican á la Instrucción pública grandes cantidades. (Los Estados Unidos más de 1.000.000.000, de francos gastan en primera enseñanza; Francia dedica á la instrucción pública el 8 por 100 de su total presupuesto que asciende á unos 4.000 millones de francos; Alemania el 6 por 100 del suyo que se eleva á muy cerca de 5.000 millones de marcos), nosotros no dedicamos á tan importante servicio más que un puñado de pesetas.

Esto, estima el Gobierno que no puede continuar. Si queremos regenerarnos, si queremos que nuestra cultura nacional se eleve á la de los demás pueblos, hay

que dedicar mucho dinero á la enseñanza. Sí; hay que gastar para que tengamos Escuelas, Institutos y Universidades con todos los medios, elementos y recursos necesarios, con personal idóneo y bien retribuido para que la enseñanza sea provechosa y eficaz, á fin de elevar el nivel moral é intelectual del pueblo, para que tenga conciencia de sus derechos y deberes y sepa respetar y cumplir las leyes.

Es necesaria la política hidráulica, es necesaria también la política pedagógica.

Para el desarrollo de nuestra riqueza hay que fomentar sus tres grandes fuentes: la agricultura, la industria y el comercio.

La agricultura, que es la base de nuestra riqueza pública, hállese en un estado de gran abatimiento por los tres males que la afligen y que hay que corregir, la ignorancia, la usura y la sequía.

Para combatir la ignorancia precisa dar al agricultor, como sucede en todos los países, una educación y enseñanzas prácticas, y para esto es preciso instalar granjas-modelo regionales, estaciones agronómicas, observatorios meteorológicos y escuelas; todo organizado desde un punto de vista eminentemente práctico.

La agricultura carece de capitales fáciles y baratos. En los campos no se conoce el dinero ni mucho menos el crédito; solamente existe la usura, que esperando al desgraciado labrador en el desfiladero de la recolección, le aniquila y le mata.

Para evitar los grandes males de la usura hay que industrializar la agricultura, teniendo en cuenta que las

artes son su alma, y levantar sobre anchas y sólidas bases el crédito territorial y agrícola.

La sequía es otro de los grandes males que afligen á la agricultura: por ella se pierden algunos años el todo ó parte de las cosechas. Para combatir este mal hay que fomentar los riegos haciendo obras de mejoramiento en el régimen de los ríos; hay que construir pantanos reguladores y canales de riego que son los grandes bienhechores de la agricultura, toda vez que llevan á las tierras las riquezas que los ríos arrastran al mar.

Todo esto es de absoluta é imprescindible necesidad, si España ha de ser un pueblo moderno y ha de ocupar en Europa el puesto á que tiene derecho; pero á nadie se le oculta que todo esto lleva aparejado un gran gasto y que no es posible atender á él con los recursos ordinarios del presupuesto; sostener otra cosa es pretender lo imposible, creer lo absurdo, soñar despierto. (*Muy bien.*)

El Gobierno entiende que para hacer frente á todos esos gastos es indispensable apelar al crédito, emitir un empréstito, y que sólo así, teniendo España bien organizada su defensa, su enseñanza y desarrollada su riqueza, se ensanchará la base de la tributación, abriéndose nuevas fuentes de ingresos para el presupuesto, y se mejorará y aun quedará resuelto el gran problema del trabajo. Esos millones, bien administrados, servirán, no sólo para el engrandecimiento de la Patria, sino para que vivan esas legiones de obreros cuya miseria pone espanto en el ánimo, esas clases obreras acreedoras al amparo y protección del poder público, á quien úni-

camente piden trabajo que les proporcione pan para sus hijos; á lo cual creen tener indiscutible derecho; que hay que dárselo; y el único eficaz procedimiento para ello està en promover el desarrollo de las obras públicas en que tendrán colocaciòn tantos millares de seres que, para vergüenza nuestra, empujados por la miseria y acosados por el hambre, se ven obligados á ir á lejanas tierras en demanda de trabajo, en busca de sustento. (*Aplausos en la mayoría.*)

Y, en fin, para terminar, porque voy fatigando con exceso vuestra benévola atención (*En varios lados de la Cámara: No, no*), estima el Gobierno que con esos millones, bien administrados é invertidos, habrá bienestar, orden, paz, disciplina social, elementos precisos, factores indispensables para la prosperidad y el engrandecimiento de la Nación. (*Muy bien, muy bien.—Aplausos en la mayoría.*)

DISCURSO

del día 15 de Octubre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 15 de Octubre de 1910.



*Con motivo de la discusión del dictamen sobre
totalidad del proyecto de ley de Presupuestos.*



El Sr. Ministro de HACIENDA: (Cobián.) Ante todo me importa en alto grado, Sres. Diputados, hacer constar las circunstancias en que se hallaba nuestra Hacienda, cuando hemos tenido el honor de ser llamados al Poder. Me limitaré á ser un mero relator, no haré otra cosa que consignar los hechos, que no son producto de la fantasía, ni obra de la imaginación, ni engendro del deseo ó de la necesidad del debate, sino hechos ciertos, los verdad que tienen una fácil y perfecta demostración. No haré comentarios ni dirigirá cargos á nadie.

Primer hecho: desde 1907 á 1909 se aumentaron los gastos de los distintos Departamentos ministeriales en 121.744.194 pesetas; y se disminuyeron los ingresos en 20.611.908 pesetas, cantidad que, unida á la de 12.454.194 en que fueron también reducidos los ingre-

sos en 1904 y 1905, da un total de disminución de ingresos en dichas dos épocas, de 33.066.102 pesetas.

Segundo: el cumplimiento de las tres leyes votadas de 1908 sobre reforma de los servicios de Correos y Telégrafos, comunicaciones marítimas y Construcciones navales, civiles é hidráulicas, lleva aparejado un gasto de gran importancia, á partir del 1910, en que asciende á 25.478.382 pesetas, y que importará mucho más por lo que se refiere á Correos y Telégrafos y Construcciones navales, en los siguientes presupuestos, en el caso de que el proyecto de ley de empréstito de 1.500 millones no fuese aprobado.

Tercero: el procedimiento adoptado en virtud de la ley de 30 de Julio de 1904, para el pago de los intereses atrasados correspondientes al capital destinado á indemnizar á las Corporaciones civiles y religiosas y fundaciones de Beneficencia y de Instrucción pública elemental, por sus bienes desamortizados y vendidos, ha producido un aumento en el capital de la Deuda perpetua interior de 49.360.000 pesetas, y, por tanto, el presupuesto de gastos del Estado resulta con un aumento permanente de pesetas 1.974.400 por el servicio de intereses de dicho capital.

Cuarto: se habían agotado los 610.000.000 importe de los sobrantes de los presupuestos, desde el de 1899 al de 1908 inclusive.

Quinto: regía por autorizaciòn, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45 de la ley fundamental del Estado, el Presupuesto de 1909, que se había liquidado con un déficit de 35.362.930 pesetas.

Y, por último, con cargo al presupuesto vigente habían de satisfacerse 25.478.382 pesetas, para el cumplimiento de las tres citadas leyes votadas en 1908; los 12.181.791 pesetas, no pagados, aunque sí comprometidos en 1909; los gastos ocasionados con motivo del aumento del contingente de 85.000 á 115.000 hombres, y de la nueva organización que fué preciso dar á nuestro ejército en Melilla y á la policía indígena, á fin de asegurar, no sólo los territorios ocupados, sino también nuestras propias posesiones, hasta que un arreglo con el Majzen suministre las garantías adecuadas; y los originados por la adquisición de material de campaña, reconstrucción del antiguo, obras de fortificación, etc. etc.

Claro está que así como no es procedimiento financiero de sinceridad el que, al calcular los recursos para hacer frente á atenciones normales, computa ingresos de carácter extraordinario, ò se ilusiona con cálculos de ingresos que no responden á la realidad, no era del propio modo adecuado, arrojar el peso de los indicados gastos militares y de construcciones navales que ascendían á unos 81 millones de pesetas, sobre el presupuesto ordinario de 1910, con cuyo peso se rompería el equilibrio entre los ingresos y los gastos, y sobrevendría un enorme déficit que después del de 1909, produciría lógicamente alarma, perturbación, y en su consecuencia la lesión grave del crédito público, pues se creería que retrocedíamos en el camino iniciado en 1900, y que volvían aquellos desdichados tiempos del déficit crónico, aquel periodo del año 50 al 900, en que solamente se liquidaron con superávit cua-

tro presupuestos, y todos los demás con déficit, cuyo promedio, durante dicho período de tiempo, fué de 79 millones de pesetas; y en fin, que volvíamos à los tiempos en que España figuraba en el cuadro de las naciones con Hacienda averiada.

El Gobierno, para evitar esto, puesto que tiene la resolución firmísima de mantener á toda costa la nivelación del presupuesto, propuso como medio más adecuado, y el Parlamento así lo acordò, la emisión hasta 81 millones de pesetas en Obligaciones del Tesoro. Emisión que se realizò; si bien no se han negociado de los 81 millones más que 45; debiendo consignarse que fué la suscripción hecha con mayor rapidez desde 1902 acá. Sólo el primer día se suscribieron 33 millones, es decir, casi el 90 por 100 de la cantidad que se negociaba.

Y he de hacer constar antes de seguir mi labor expositiva que alimento la esperanza, y creo no he de sufrir la dolorosa decepción de verla frustrada, de que no ha de ser necesario negociar la totalidad ni mucho menos de las Obligaciones emitidas, para liquidar el presupuesto actual sin déficit, en vista del aumento importante que hay en la recaudación de este año comparada con la del anterior, y que en estos momentos asciende á unos 27 millones de pesetas.

Siguiendo con la emisión y negociación de los 81 millones de pesetas en obligaciones del Tesoro estimo de mi deber dar cuenta al Parlamento de su resultado, que no pudo ser más satisfactorio, puesto que, no obstante haberse hecho la negociación de 45 millones en la

época desfavorable en que se realizò, ò sea en la segunda quincena de Agosto, es lo cierto que se cubriò dicha suma rápidamente. En el primer día se cubrieron, como he dicho, 33 millones, casi el 90 por 100.

Y he de advertir que la negociaciòn se hizo en la indicada fecha deliberadamente, toda vez que yo necesitaba conocer la realidad, no basarme en ficciones ni en nada que no estuviera de acuerdo absoluto con la verdad; porque yo quería pulsar el crédito público; porque yo necesitaba que el resultado de dicha negociaciòn me orientase para la del empréstito de los 1.500 millones.

Repito que la negociaciòn de los 45 millones de obligaciones no pudo ser màs satisfactoria. Desde 1902 acá, es la que se llevò á cabo con mayor rapidez. En efecto; la realizada en 1902, empezò en 7 de Enero y termino en Abril; la de 1905 comenzò en 1.º de Mayo y durò hasta Octubre; la de 1906 tardó veinticinco días, no debiendo olvidar que acababa de hacerse la emisiòn de amortizable para consolidar las obligaciones emitidas en 1905, y en que se presentaron suscripciones á metálico por pesetas 293.404,500, y únicamente se entregaron valores por pesetas 2.208.702; quedando por lo tanto un márgen de gran importancia para nuevas emisiones. La de 1908 empezò en 1.º de Mayo y terminó en 13 de Julio; y eso que ya se sabía que iban á ser consolidadas, toda vez que estaba anunciado el empréstito de los 105.000.000 en amortizable al 4 por 100. La de 1910 se cubrio en ocho días.

Ya sabéis, por tanto, Sres. Diputados, cual era la

verdadera situación de nuestra Hacienda cuando el Señor Canalejas fué llamado á los consejos de la Corona, y hubo de hacer el presupuesto que estamos discutiendo. En él no podía el Gobierno mantener el *statu quo*; no érale lícito concretarse á salir del paso, al mero cumplimiento del requisito constitucional. ¡Ah! Sres. Diputados: si tal se hubiera hecho, ¿que no se diría contra nosotros por los mismos que ahora combaten nuestra obra, por entender que no es el momento oportuno de plantearla?

El Gobierno se propuso desde el primer momento hacer un presupuesto verdad, absolutamente sincero, en que todos los servicios estuviesen bien dotados, no sólo por y para la eficacia de los mismos, sino también para poner término á la inveterada costumbre de venir con tanta frecuencia al Parlamento en demanda de suplementos de crédito; un presupuesto de reconstitución, en que se mantuviera no sólo la nivelación sino también el superávit, circunstancias precisas para consolidar nuestro prestigio, y para que España sea un pueblo moderno que entre de lleno en la corriente del crédito europeo. Para la realización de estos propósitos, comprenderéis Sres. Diputados, la absoluta necesidad de reforzar los ingresos por medio de los proyectos de ley, que juntamente con el de Presupuestos he tenido el honor de presentar al Parlamento.

Y aprovecho esta ocasión para negar en absoluto lo que por alguien se ha dicho, de que en esos proyectos se propone el establecimiento de la imposición, aplicada al conjunto del sistema fiscal; el principio de la progre-

sión como fundamento absoluto de toda la base del régimen tributario; el principio de la progresión, en fin, como sistema de imposición general. No, no hay semejante cosa. ¡Ni que yo fuera un vesánico!

¿Quién ignora que la imposición progresiva general es una utopía de que ño hubo ejemplo en la legislación financiera de ningún país; que es absurdo en la teoría y, en la práctica imposible, económica, jurídica y financieramente? Baste decir que no està aceptado en ningún Estado moderno y es combatido por todos los escritores, llegando algunos como Mill á calificarlo de robo graduado, y Proudhon de vano pasatiempo que sólo sirve para alimentar la charlatanería de los filántropos y hacer que aulle la demagogia. ¿Quien no recuerda, Sres. Diputados, la célebre *décima scalato*, arma terrible esgrimida por los Médicis en Florencia, para aniquilar á sus adversarios conduciendo á la ruina y sumiendo en la miseria á familias poderosas?

En mis proyectos relativos á los impuestos de producto, se mantiene el principio de la proporcionalidad, es decir, se respeta el sistema vigente desde hace dos generaciones, y solo en los que hacen referencia á los impuestos de derechos reales sobre las sucesiones y al de cédulas, se propone la sustitución del principio de la proporcionalidad por el de la progresión.

Ya sé yo que el principio de la progresión es susceptible de aplicaciones muy varias y de significación política y social muy diversa. Ciertó que en determinadas condiciones, con una acción paralela del resto de la política económica y con escalas suficientemente rá-

pidas, la aplicación del principio de la progresión puede tener por término el socialismo colectivista y la negación consiguiente de nuestro régimen actual basado en la propiedad y en el cambio; pero también del propio modo es cierto, que el Gobierno no se propone, ni nunca se propondrá, seguir ese camino.

Hay más, ni siquiera intenta valerse directamente del impuesto como medio de regular la distribución de la renta nacional, ni aun dentro de aquéllos moderados límites que son compatibles con nuestro vigente régimen de la propiedad privada. La política social del Gobierno se realizará directamente con las reformas sociales que constituyen su programa, y no mediante la acción del sistema fiscal. La modificación de éste, puede tener y tendrá seguramente consecuencias sociales, pero éstas serán derivaciones que no tocan ni poco, ni mucho, ni nada, al régimen fundamental de la distribución de la riqueza. Con esto queda afirmado que la reforma fiscal que pretende el Gobierno, no es más que eso, reforma de la Hacienda, y no de la constitución social interna de nuestra economía nacional. *(Muy bien; muy bien, en la mayoría.)*

Y nada más digo ahora respecto á este punto, reservándome hacerlo con toda extensión en momento oportuno, que será cuando se discutan los dos indicados proyectos.

Todos los Sres. Diputados que han intervenido en este debate, los Sres. Salillas, Zulueta, Garriga, y Espada, han hecho la afirmación de que en este presupuesto hay aumento de gastos con relación al vi-

gente. Es verdad, ¿cómo negarlo?—equivaldría à negar la evidencia—es cierto que hay aumento en los gastos; pero yo afirmo que en su casi totalidad son esos aumentos necesarios, y los restantes, útiles, convenientes y reproductivos. Y como à mí, Sres. Diputados, no me gusta hacer afirmaciones caprichosas y gratuitas, voy en muy pocas palabras à demostrar la verdad de mi aserto.

¿Còmo se puede desconocer la necesidad del aumento de 1.333.579 pesetas que aparece en Obligaciones generales, cuando es así que dicho aumento està determinado por la mayor emisiòn de Deuda interior al 4 por 100, en inscripciones intransferibles, por el reconocimiento de capitales atrasados, y en títulos para pago de créditos de Ultramar, y por mayor reconocimiento de pensiones en los Montepíos civil y militar, y en retirados de Guerra y Marina? ¿Es que hay alguien que se atreva à afirmar que este aumento de 1.333.579 pesetas no es necesario? (*El Sr. Bergamín*: Nadie ha dicho nada; lo que vamos à impedir es que vengan otros aumentos.) Está bien Sr. Bergamín; y el Ministro de Hacienda será el primero en evitarlo cumpliendo con su deber; y, desde luego, en lo referente à Clases pasivas, se empleará el medio más rápido y adecuado para evitar en el porvenir la progresiòn creciente y verdaderamente aterradora de esas obligaciones.

Sòlo cerrando los ojos à la evidencia se puede desconocer la necesidad del aumento que aparece en el Ministerio de Estado, de 871.575 pesetas, para los servicios encaminados à afirmar y desarrollar nuestra influen-

cia en Marruecos; para restablecer la sinceridad financiera, dotando bien servicios que notoriamente no lo están, como lo revela por modo eficaz y elocuente el hecho de venir pidiéndose sistemáticamente suplementos de crédito; y para el desarrollo de un servicio tan importante como lo es el consular, fomentador de nuestra producción, industria y comercio, y amparo y defensa de nuestros nacionales. Dígalo si no Alemania, que, ciertamente, no avanza por el mundo con sus escuadras y con sus ejércitos, y sí con sus agentes consulares. (*Muy bien, muy bien en la mayoría.*)

En Gracia y Justicia el aumento es de 2.924.130 pesetas, de las cuales 2.850.000 es á lo que asciende el crédito para satisfacer los haberes del personal de prisiones, destinado á preventivas y correccionales, que hoy se satisfacen por las Diputaciones y Ayuntamientos y que en lo sucesivo han de pagarse por el Estado. ¿Puede nadie negar que este aumento es necesario no sólo porque se trata del cumplimiento del art. 11 de la ley de Presupuestos de 1909, sino también porque no es posible tolerar que por más tiempo suceda lo que en la actualidad ocurre, esto es que á muchos de dichos funcionarios se les adeuda por Ayuntamientos y Diputaciones hasta un año de haberes, viéndose obligado alguno de ellos á solicitar del juez de primera instancia del distrito en que presta servicio, autorización para trasladarse á la capital de la provincia á fin de empeñar lo poco que le quedaba para comer, para no morir de hambre? El resto del aumento hasta los 2.924.130 pesetas es para el mejoramiento de algunos servicios y para

el aumento de créditos notoriamente insuficientes, como el destinado à indemnizaciones à testigos, peritos y jurados, y à gastos de viaje del personal de la Magistratura. (*El señor Marqués de Figueroa*: Artículo 11 de la ley de 1909.)

¡Ya lo he dicho, Sr. Marqués de Figueroa! (*El señor Marqués de Figueroa*: Pero S. S. lo defiende como si nosotros lo hubiéramos discutido.) No, señor Marqués de Figueroa; lo que hago es demostrar que la casi totalidad del aumento que figura en Gracia y Justicia es necesario, y que lo que excede del crédito para el pago del personal de Prisiones es una pequeña cantidad. (*Aprobación en la mayoría.—El Sr. Salillas*: En el voto particular no se habla de eso como aumento) ¡Sr. Salillas, si no estoy contestando solo al voto particular de S. S. y sí á todos los señores que han intervenido en el debate! Ya sé que en ese voto particular de S. S. no se hace objeción alguna al crédito de los 2.850.000 pesetas para el pago de las obligaciones del personal de Prisiones; pero como los demás Sres. Diputados han hablado en bloque de los aumentos, es necesario que sepa el país cuáles y para qué son esos aumentos. Al Gobierno se le acusa de despilfarrar, y el Gobierno tiene que defenderse, demostrando, como lo estoy haciendo, que no tiene ese cargo fundamento alguno.

Y paso ahora à examinar los aumentos en el Ministerio de la Guerra. (*El Sr. Azcárate pronuncia palabras que no se perciben.*) ¿Cómo? (*El Sr. Salvatella*: Decía el Sr. Azcárate que ahí viene lo gordo). ¿Cómo

se puede suscitar controversia de linaje alguno, acerca de la necesidad del aumento en el presupuesto de Guerra, de los 20.711.123 pesetas, cuando este aumento està determinado: primero, por la elevaciòn del contingente de 85.000 á 115.000 hombres, á fin de que existan las debidas unidades administrativas, tàcticas, logísticas y extratégicas, y estén todas ellas suficientemente nutridas para que resulte provechosa y eficaz la instrucción militar; y segundo, por la nueva organizaciòn que fué preciso dar al ejército de Melilla y á la policía indígena, para asegurar no sòlo los terrenos ocupados, sino nuestras propias posesiones hasta tanto que el Majzen proporcione las garantías adecuadas.

En cuanto al aumento en el Ministerio de Marina de 2.199.998 pesetas, baste decir, en justificaciòn de su necesidad, que ese aumento es para dotar servicios que notoriamente estàn indotados, como son los de municiones, carenas y reparaciones, y vestuario de la marinería; para tener en tercera situaciòn durante el año pròximo los buques grandes, á fin de que pueda navegar el personal de la armada y adquiera la suficiente pràctica del mar, necesaria para el manejo de los nuevos acorazados que se están construyendo; para tener en tercera situaciòn los nuevos cañoneros *Recalde* y *Laya*, y para el destacamento de Mar Chica.

El aumento en el presupuesto de Gobernaciòn de 5.961.616 pesetas, està motivado por la mejora de 0,25 en el haber de la Guardia civil, para aliviar su situaciòn econòmica; por el aumento de créditos para la

mayor eficacia y ampliación de los servicios de Sanidad, Institutos de Reformas sociales y de previsión; de conducciones terrestres y marítimas; de la oficina internacional de Berna; por la creación de un tercio de la Guardia civil para Barcelona, y de un escuadrón del mismo Instituto para la Coruña; y aumento de policía en Madrid, Barcelona y otras importantes poblaciones, á fin de mantener el orden público, que ahora con tanta frecuencia se intenta perturbar gravemente.

¿Hay nadie que, no estando influido por la pasión, ponga ni siquiera en tela de juicio la necesidad del indicado aumento de gastos en el presupuesto de Gobernación?

Cuatro millones treinta y cinco mil treinta y seis pesetas es el aumento en Instrucción pública; y se comprende desde luego su necesidad con solo fijarse en que está determinado por la creación de escuelas de instrucción primaria; por convertir las hoy vacantes en graduadas; por aumento de haberes de los maestros; por el mejoramiento del servicio de inspección en la primera enseñanza; por el crédito para alumnos y profesores pensionados en el extranjero; por material pedagógico, científico y de Bellas artes; por ampliación de estudios, y por la mejora, en fin, de otros importantes servicios, como Colegio de Sordo-mudos, Astronómico, Catastro y Metrología. ¡Que es necesario el indicado aumento en el Presupuesto de Instrucción pública! ¿Quién lo puede negar? ¿Hay alguien que entienda que no deben aumentarse y mejorarse las escue-

las, cuando es así que tenemos poco más de 25.000, y en su mayor parte sin luz, sin ventilación, sin material pedagógico ni menaje escolar? ¿Puede ponerse en tela de juicio que los haberes que disfrutaban los maestros de primera enseñanza, no obstante haberse aumentado en 1903, siendo Ministro el Sr. Bugallal, más que á retribución, tienen sabor á limosna? Puede nadie negar la necesidad de material científico para los Institutos y Universidades que carecen de él? ¿Hay quien niegue la importancia del servicio de la Inspección de la primera enseñanza, así como la de todos los demás de que se deja hecho mérito?

El aumento en el Ministerio de Fomento es de 6.676.688 pesetas; y se comprenderá fácilmente la necesidad de él, con sólo decir que 4.360.000 pesetas, es el importe del crédito que hay que llevar al presupuesto á los efectos de ley de Comunicaciones marítimas; y que el resto hasta los 6.676.688 pesetas es para la creación de varios servicios y el mejoramiento de otros, todo lo cual es útil, conveniente y reproductivo.

Se crea la Dirección de Comercio, Industria y Trabajo; la Inspección de Bancos y Sociedades anónimas; Bolsas del Trabajo; Oficinas de colocación para los obreros; Cajas de Seguro popular; desarrollo de las de pensiones para obreros; institución del seguro contra el paro involuntario; se aumenta el personal de ingenieros agrónomos y de ayudantes para dotar los servicios de las Granjas regionales; de las Estaciones de ensayo de semillas; de las Etnológicas; de la Sericícola de Mur-

cia; de las de estudio de aplicación del riego; servicio agronómico de Marruecos, y Granja-escuela experimental de Nador, y se aumentan también las subvenciones y premios para Exposiciones, Concursos y Certámenes agrícolas y de ganadería, minería y montes, y policía minera en el servicio de inspección de los distritos.

¿Cabe después de esto decir que en el presupuesto de Fomento se aumentan de un modo considerable gastos innecesarios? Yo estoy seguro que trás el análisis que acabo de hacer, que será mucho más detenido cuando se discutan cada uno de los Departamentos ministeriales, habrá adquirido el Congreso el convencimiento de que en el presupuesto de Fomento no hay esos aumentos tan considerables y tan inútiles de que aquí se ha hablado en las tardes anteriores.

En el Ministerio de Hacienda y gastos de las Contribuciones y rentas públicas, el exceso con relación al presupuesto vigente es de 5.862.942 pesetas, determinado por el aumento de 0,25 en el haber de los carabineros y por el mejoramiento de otros servicios de este Cuerpo que tantos y tan buenos viene prestando en la represión del contrabando; por el aumento del crédito para dar un mayor impulso y desarrollo á los trabajos del avance catastral y registro fiscal, verificándose simultáneamente los trabajos rústicos y urbanos, para que unos y otros terminen cuanto antes, pues así interesa al Tesoro y á los contribuyentes, toda vez que se ensanchará la base de la tributación y se bajará el tipo de gravamen, que será en la propiedad

rústica del 14 por 100 en vez del 15,50 y 19 y pico, que se viene hoy pagando; y en la urbana del 17,50 en vez del 21.50; por el aumento de crédito para los gastos necesarios para la formación de los padrones de cédulas en las capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 almas, puesto que con arreglo á uno de los proyectos que hay presentados, ese servicio que hoy tienen los Ayuntamientos de dichas capitales y poblaciones vuelve á pasar al Estado; para la inspección técnica de los impuestos mineros y creación de laboratorios en que se haga el examen de minerales con objeto de comprobar la ley de los mismos y proceder á su valoración; por mejora del crédito destinado á la explotación de la mina de Arrayanes, si es que el Estado ha de obtener de ella algún resultado; por el aumento de 20 profesores mercantiles, á los efectos de la contribución de utilidades, á fin de que no continúe sucediendo lo que actualmente ocurre, esto es, que en muchas provincias, por falta de personal idóneo, ni siquiera se leen los balances de las Sociedades, dando por resultado que haya más de 170 sustraídas á dicho impuesto por no resultar utilidades de sus balances; por el aumento de crédito para el servicio de visitas de inspección, ya que no debe olvidarse que los servicios de inspección é investigación bien organizados son la base de una buena y honrada administración; por el gasto derivado del servicio de renovación de los títulos de la deuda al 4 por 100 interior, y de la confección de hojas de cupones para aplicar á los títulos de la deuda amortizable al 5 por 100;

por el mejoramiento de varios servicios de los distintos Centros del Ministerio, y, en fin, por la creación de la Dirección de Propiedades é Impuestos y de las Administraciones provinciales del mismo nombre.

La creación de dicha Dirección no obedece al propósito de poder disponer de un destino más para los amigos. ¡No! Responde: 1.º, à que sobre la actual Dirección de Contribuciones pesa un trabajo excesivo, toda vez que à su cargo tiene propiedades, contribución territorial, industrial, de utilidades, impuestos de cédulas personales, mineros y de transportes terrestres, avance catastral, registro fiscal y estadística del tributo. Desde 1903 à 1909, ¿sabéis, Sres. Diputados, cuántos expedientes tramitó y despachó la Dirección de Contribuciones? ¡Más de 100 000! Solamente en 1909 despachó 15.000, resultando de ello un promedio de 48 à 49 diarios; y ese estado de cosas no puede continuar sin evidente detrimento del buen servicio; y 2.º, à que es necesario desarrollar los impuestos indirectos en atención à que éstos son y se consideran más importantes que los directos, al punto de que su productividad, superior à la de los directos, constituye la nota saliente de los modernos sistemas tributarios, y por eso todas las naciones modernas desarrollan los impuestos indirectos, constituyendo éstos el principal apoyo de las grandes Haciendas.

España es, entre las naciones europeas que nos son comparables, la que tiene una mayor proporción de contribuciones directas en el conjunto del sistema impositivo del Estado.

Ahora bien, Sres. Diputados; después de todo cuanto acabo de exponer, ¿no es verdad que se desprende como consecuencia lógica lo infundado de la afirmación que aquí se ha hecho en las tardes anteriores de que hay aumentos innecesarios en el presupuesto de que se trata?

Esto no obsta para que, si cuando llegue el momento oportuno, que lo será al discutir las obligaciones de los distintos Departamentos ministeriales, se demostrase lo superfluo ó innecesario de algún gasto, el Gobierno y la Comisión se apresuren à suprimirlo ó á reducirlo.

Y voy ahora, toda vez que forma parte integrante de la obra económica y financiera del Gobierno el proyecto de empréstito, à ocuparme de él, procurando satisfacer los deseos expresados ayer tarde por el señor Zulueta, y, al propio tiempo, pagar la deuda que tengo contraída con el Sr. Salvatella.

Forma parte del programa del Gobierno la reconstitución de la Nación para que tenga el rango que le corresponde, y ocupe en Europa el lugar à que tiene derecho. A realizarlo se encamina el proyecto de empréstito.

Los Sres. Zulueta y Salvatella, en uso de su perfectísimo derecho, desean saber en qué, cómo, cuándo y con qué garantías se ha de invertir esa suma de millones.

¡Pero, Sres. Zulueta y Salvatella, si eso está consignado de un modo expreso y categórico en el proyecto mismo!

En él se dice que los 1.500 millones no podrán

invertirse màs que en retirar las obligaciones recientemente emitidas; en el desarrollo de nuestro poder, cultura y riqueza; en el mejoramiento de los servicios de comunicaciones postales, telegràficas y telefónicas, y en la reforma y construccìon de establecimientos penales.

Se asigna à cada Departamento ministerial la suma que le corresponde en la siguiente forma: 340 millones para el Ministerio de la Guerra; 179 millones para el de Marina; 100 millones para el de Instruccìon pública; 740 millones para el de Fomento; 40 millones para el de la Gobernación, y 22 millones para el de Gracia y Justicia, é inmediatamente se determinan los conceptos detallados en que esas cantidades se han de invertir.

Por lo visto, lo que deseaban SS. SS. es que à ese proyecto de empréstito se acompañara ya y se discutiera, el plan total de las obras à realizar y de los servicios à ejecutar durante los diez años à que el proyecto se refiere. Esto no es factible. No es posible que se discuta en el proyecto de empréstito lo que necesariamente ha de ser materia de otros varios. ¡Qué màs quisieran los enemigos del empréstito! Con ese procedimiento no se llegaría en muchos años à la aprobaciòn del proyecto.

Si SS. SS. hubiesen fijado su atenciòn en el artículo 3.º del mismo, estoy bien seguro que las dudas, celos, desconfianzas é incertidumbres que al parecer asaltan sus espíritus, se habrían desvanecido en absoluto y por completo, toda vez que en dicho artículo se dice, de modo que no deja lugar à duda,

que el Ministro de Hacienda presentará á las Cortes anualmente, al mismo tiempo que el proyecto de ley de Presupuestos generales del Estado, otro especial, determinando la cantidad anual que se asigna á cada Departamento ministerial dentro de la cifra respectiva del número 2.º del art. 2.º de esta ley; que dichas cantidades aparecerán distribuidas por obras y servicios, y que se acompañara al proyecto el plan de obras aprobado por el Consejo de Ministros á que dichos créditos responden, con especificación del presupuesto particular de cada obra y de cada servicio comprendidos en el mismo plan, que será examinado, aprobado ò modificado por el Parlamento.

Y cuando ese proyecto especial, y el plan de obras se presenten, será la ocasión adecuada de pedir todas las especificaciones, todos los detalles, todas las concreciones que se juzguen necesarias ó se estimen convenientes.

En cuanto á garantías, el Gobierno, en su deliberado propósito de que el país tenga todas las que precise para adquirir la seguridad de que el sacrificio que va á hacer no resultará estéril, cree preciso establecer en los artículos 4.º, 5.º, 6.º y 10.º: 1.º, que no se imputarán á los 1.500 millones, haberes, gratificaciones, remuneraciones, dietas, comisiones ni ninguna otra recompensa al personal de planta de los Departamentos ministeriales; 2.º que no se podrá negociar más deuda que la indispensable para obtener anualmente 150 millones de pesetas efectivas; 3.º, que no podrá no ya invertirse, sino ni hacerse ninguna negociación de deuda,

sin que previamente el Poder legislativo apruebe las obligaciones á que dicho producto se ha de dedicar; y 4.º, que el Gobierno dará anualmente cuenta á las Cortes del resultado de la negociación, y que presentará una Memoria explicativa por Departamentos ministeriales de las obras y servicios en su punto de vista administrativo y técnico, consignando las obras realizadas y servicios ejecutados y pagados, con expresión de las sumas invertidas; de las obras y servicios realizados y no satisfechos, y de los que estén en curso de ejecución.

¿Pero es que todas esas garantías no parecen bastantes? Pues conste, y así lo ha declarado ya el señor Presidente del Consejo de Ministros, que el Gobierno está resuelto y decidido á aceptar todas cuantas se juzguen necesarias ó se crean convenientes, siempre y cuando que dichas garantías sean factibles y prácticas y no vengán á imposibilitar la realización del empréstito, porque en ese caso no serían garantías, sino obstáculos.

El Sr. Espada ha pedido que se reincorporen al presupuesto ordinario los créditos que de él se desglosaron para llevarlos al extraordinario. Declaro sinceramente, Sres. Diputados, que no me explico este nuevo criterio del partido conservador. Y digo nuevo, porque lo que ahora se ha hecho en el presupuesto que se discute, es exactamente lo mismo que realizó el partido conservador en el presentado por él para 1910, y que no se discutió. En dicho presupuesto se desglosaron los créditos para la construcción de la escuadra, y todos los gastos

de primer establecimiento, y todo lo relativo á obras nuevas, para llevarlo al presupuesto extraordinario. ¿Y qué se hace en el actual? Pues exactamente lo mismo. ¿Cabe mayor disparidad de criterio entre lo que entonces hizo el partido conservador y lo que ahora sostiene?

Los gastos de construcciones navales, Sr. Espada, fueron siempre de carácter extraordinario; dígalos si no lo ocurrido en los años 88 y 96, en que, votados presupuestos extraordinarios para construcciones navales y reforma de arsenales, se dotaron con recursos también de carácter extraordinario: en 1888 con el anticipo que la Compañía Arrendataria de Tabacos tenía que hacer al Estado; así como en 1896 igualmente se asignaron recursos extraordinarios. En cuanto á los créditos desglosados de Fomento, se refieren á gastos de primer establecimiento y que, por lo tanto, deben también pasar al presupuesto extraordinario.

Como el Gobierno estima que el proyecto de empréstito está íntimamente unido al presupuesto ordinario; como el Gobierno entiende que el presupuesto ordinario sin el extraordinario no tendría eficacia en el sentido que S. S. ha indicado esta tarde, el Gobierno sostiene que el proyecto de empréstito ha de salir juntamente con el presupuesto ordinario.

Pero, en fin, seamos previsores, porque muchas veces hay circunstancias que superan á la voluntad de los hombres. Supongamos que el presupuesto extraordinario no pudiera aprobarse antes del 31 de Diciembre; ¡ah!, en ese caso es evidente, Sr. Espada, que habría que reincorporar á cada uno de los Departamentos mi-

nisteriales los créditos que de ellos se hayan desglosado y que ascienden, no à 54 millones como ha dicho S. S., sino á cerca de 70.

No se diga, pues, que he calculado un superávit enorme, y que para llegar à él se exigen sin necesidad sacrificios grandes al contribuyente. No; ya lo acabáis de ver. Si hay que reincorporar al presupuesto que se discute los 70 millones, el superávit queda reducido à unos 15. Esto no lo olvide S. S., ni los demás Sres. Diputados, para cuando llegue el momento oportuno de discutir los proyectos complementarios; porque si entonces se hacen concesiones de alguna importancia, es de irrefragable evidencia que en vez de superávit tendremos déficit, é importante, dejando á la consideración de la Càmara las consecuencias funestas y fatales que esto puede determinar para el crédito del país. (*Muy bien, muy bien, en la mayoría.*)

Y voy á terminar. Decía el Sr. Espada que contra toda la obra económica del Gobierno hay protestas y reclamaciones de los productores, de los propietarios, de la banca, del comercio, etc., etc. ¡Ya lo sé! Es cosa fácil formular protestas y deducir reclamaciones, pero no lo es tanto demostrar la justicia y la razón que presida á las unas y sirva de fundamento á las otras. Claro es que si cuando llegue el momento oportuno, si cuando se discutan los proyectos especiales se patentiza que esas reclamaciones y protestas tienen razón de ser, me apresuraré á rectificar, toda vez que no tengo hecho pacto con el error; pero si, por el contrario, resulta que esas reclamaciones se inspiran en el egoismo, y esas

protestas se fundan en concupiscencias, entonces no rectificaré nada, ni un punto, ni una coma.

¡Qué hay muchas protestas y reclamaciones contra mi obra! Recordad, Sres. Diputados, que fueron muchísimas las que se levantaron contra la obra del Sr. Fernández Villaverde en 1900, y que en aquella campaña se llegó á la injuria y se bordeó la calumnia. En esta de ahora se llegará seguramente á lo mismo, lo espero, pero no me arredra. No olvidéis que entonces, por la energía de aquel Gobierno, se pudo afianzar nuestra solvencia, reconstituir nuestra Hacienda, restablecer nuestro crédito. ¿Qué hubiera sido de la Patria si aquel Gobierno no hubiera procedido con la energía que lo hizo? ¿Qué suerte le hubiera esperado al país, qué hubiera sido de España si aquel Gobierno, amilanado y cohibido ante tantas reclamaciones y protestas, hubiera en ellas inspirado sus resoluciones?

¡Que juzgue la Cámara, que juzgue el país, y que no olviden las provechosas enseñanzas del pasado!
(*Aplausos en la mayoría.*)

DISCURSO

del día 17 de Octubre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 17 de Octubre de 1910.



*Resumiendo el debate
de totalidad sobre el dictamen referente á
«Obligaciones generales del Estado»*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): En primer lugar, Sr. Azcàrate, yo no comprendo ò no me explico á qué pueden obedecer las primeras palabras que S. S. ha tenido la bondad de pronunciar, acusándome de mal humor y de nerviosidad. Ruego á S. S. me perdone por ello, como se lo ruego à todos los Señores Diputados, pues yo no me he dado cuenta de tal excitación; será tal vez una condición aneja á mi carácter, que procuraré modificar. (*El Sr. Acàrate*: Aneja al cargo, si acaso.) No; á mi persona, no al cargo.

Tambien me apena que persona de tanta autoridad, de tan claro entendimiento, de tan gran cultura, haya dado á entender, con la delicadeza que le distingue,

claro está, que le parecían mal todos mis proyectos. Yo sin embargo, ruego à los Sres. Diputados que tengan la bondad de suspender su juicio hasta que esos proyectos tengan estado parlamentario; cuando los dictámenes que la Comisión sobre ellos emita vengan aquí, será el momento oportuno, la ocasión adecuada para que los discutamos, y para que se vea si tienen algo bueno, ó si todo en ellos es malo.

Lo único que yo puedo decir es que he puesto toda mi voluntad, todo mi deseo, todas mis fuerzas al servicio del propósito de acertar; tal vez no lo haya conseguido, y en ese caso lo que deseo es que en la discusión de los proyectos se me ponga bien de manifiesto, á fin de reparar los errores si los hay.

El Sr. Azcárate está conforme con que en alguno de mis proyectos se establezca el impuesto que S. S. llama progresional, y que yo técnicamente llamo progresivo.

Lo de progresional, Sr. Azcárate, es una denominación lanzada por el economista francés José Garnier, y que tuvo algunos adeptos en España, pero no en Alemania, que es la patria de los impuestos personales progresivos, y donde están los fundadores y representantes de la ciencia moderna de la Hacienda.

Impuesto progresional, según Garnier, era sinónimo de impuesto de escala lenta, de escala limitada. Pero hoy es otro su significado, porque no hay que olvidar que desde 1857 acá, han transcurrido muchos años, y han sido también muchas las evoluciones operadas. Hoy se llama impuesto progresional á aquél cuyos tipos de

gravámen se desarrollan formando una progresión aritmética, geométrica ó armónica.

Pero hay más Sr. Azcárate; si progresional ha de significar algo en oposición á progresivo, será la acen- tuación del carácter de progresión de los tipos de la imposición, que es precisamente lo contrario de lo que se quiso significar por Garnier, ó sea la limitación de la escala, la cesación de la progresión, la línea horizontal para la construcción de la escala.

Y dicho esto, voy con toda claridad, sin ambages ni rodeos, á exponer al parlamento cuáles son los propósitos del Gobierno respecto á los servicios á que se refieren las secciones 3.^a, 4.^a y 5.^a de las Obligaciones generales, ó sean los de la «Deuda pública», «Cargas de justicia» y «Obligaciones de clases pasivas».

No hay más que leer las últimas Memorias de la Comisión inspectora de las Cortes para comprender que los intereses del Estado, así como los de los particulares, demandan de consuno reformas en los servicios de la Deuda pública.

Declaro con la franqueza que me caracteriza, con la ingenuidad que me distingue, que bien hubiera querido yo presentar una reforma completa que abarcara el conjunto de los servicios y permitiera en un periodo breve la liquidación de todo lo pasado, dejando limitada la ordenación de este ramo de la Administración pública, á las disposiciones necesarias para el pago de la deuda emitida; pero ya que esto por el momento no sea posible, he dirigido desde luego mis iniciativas hacia aquella reforma reclamada unánimemente por la

opinión, con la cual se podrán conseguir en el más breve plazo beneficios no despreciables.

Como sabe el Congreso los servicios de la deuda se dividen en dos grandes grupos; deuda sin emitir, y deuda emitida.

En el primer grupo, ò sea deudas antiguas, están comprendidos todos los créditos anteriores á 31 de Diciembre de 1849, y que con arreglo á la ley de 1.º de Agosto del mismo año deben satisfacerse con deuda pública.

No hay más que leer la relación de dichos créditos, algunos de fecha muy remota, para comprender la necesidad de liquidar el pasado, pues otra cosa es contraria á una buena y seria administración.

En cuanto al segundo grupo, baste decir que existen más de cien signos de deuda emitida, y que si bien es cierto que de esos solamente están hoy en circulación los de la interior al 4 por 100, exterior estampillada, amortizable al 5 por 100 y 4 por 100, exterior al 3 por 100 consolidada y diferida, y retirados de la circulación los restantes, también lo es que muchos de éstos, y por cantidad de más de 512 millones de pesetas, están pendientes de reembolso ó de conversión, por lo que no puede desconocerse que se causa una gran perturbación en las operaciones de cuenta y razón de la Deuda, y se presenta al Estado como deudor de importantes cantidades, que en su mayor parte procederán de créditos ignorados por los acreedores, ò cuyos signos hayan sido destruidos por accidentes de incendio, de mar ú otros. A poner término á este estado de cosas se dirigen

algunos de los proyectos de ley que he tenido el honor de leer la otra tarde à la Cámara.

En el de Administración y Contabilidad, hay un capítulo en que se establece la prescripción y caducidad de los créditos, así como tambien la prescripción de la deuda pública, por el término de treinta años su capital, y de cinco sus intereses. Otra cosa sería hacer al Estado en cuyo favor siempre se han establecido privilegios, de peor condición que los particulares.

El art. 1936 del Código civil declara susceptibles de prescripción, todas las cosas que están en el comercio de los hombres. ¿Quién puede dudar, señores Diputados, que los Títulos de la Deuda pública son cosas que en el comercio de los hombres se hallan?

El art. 1.936 de dicho cuerpo legal, establece la prescripción à los cinco años, de las acciones para exigir el cumplimiento de cualquier pago que deba hacerse periódicamente.

Y, por último, el art. 1.620 declara prescriptible tanto el capital como las pensiones de los censos; y es evidente que la naturaleza jurídica del contrato de deuda es la misma que la del censo perpetuo. Nadie seguramente se atreverá à poner en tela de juicio, que la deuda del Estado es un verdadero censo consignativo.

Por otra parte, ninguna de las leyes de creación de las deudas establecen su imprescriptibilidad. Y no se diga que en el decreto de 8 de Marzo de 1824 que creò el gran libro de la Deuda pública, al consignar expresamente que los créditos inscritos en él quedaban reconocidos como deuda consolidada é inviolable, privilegio que

ratificó el reglamento de 23 del mismo mes y año, aunque empleando el vocablo «invulnerable», y que se repite en la ley de arreglo y unificación de las deudas de 1851, en que se prohíbe su secuestro, se quiso establecer que la deuda era imprescriptible. No; al declararla inviolable, invulnerable y que no podía ser secuestrada, dichas disposiciones, así como al decir la Constitución en su art. 85 que la Deuda pública está bajo la salvaguardia especial de la Nación, no se ha significado otra cosa que la seguridad de su derecho para el tenedor de la deuda, cualquiera que fuesen las vicisitudes por que atravesara el Estado.

También presento otro proyecto sobre reforma de los servicios de la deuda, en el que se propone:

1.º La caducidad de los recibos provisionales de 175 millones de pesetas, autorizados por la ley de 25 de Agosto de 1874, y las facturas-resguardos representativas de los mismos, cuyo pago no se reclame dentro del plazo de tres meses, toda vez que no se explica que existan todavía después del tiempo transcurrido recibos de dicho empréstito pendientes de conversión.

2.º Que se retire de la circulación la deuda al 3 por 100 exterior consolidada y diferida, no abonándose sus intereses hasta que se realice su conversión con arreglo á la ley de 29 de Mayo de 1882, entregándose entonces los títulos de la deuda correspondiente, con los cupones atrasados que no hubiesen incurrido en prescripción; y que dicha conversión se haga en títulos de la deuda al 4 por 100 exterior estampillada, en la proporción que hoy se halla establecida, si los tenedores de

la del 3 por 100 fuesen extranjeros y solicitasen la conversión en el plazo de un año; y pasado éste, ó si los tenedores fuesen españoles, en Deuda perpetua del 4 por 100 interior con el aumento y bonificación establecidos; con lo cual quedará regularizada la existencia de la referida deuda del 3 por 100 exterior, é igualados los derechos de todos los españoles que tengan títulos de la Deuda pública, cumpliéndose así la Real orden de 1906, dictada de conformidad con lo propuesto por el Consejo de Estado.

3.º Que à los remanentes de los cuatro últimos empréstitos de las tres emisiones de deuda amortizable del 5 por 100, y de la única de igual clase del 4 por 100, se les dé aplicación definitiva ingresando en el Tesoro con cargo al concepto de recursos eventuales del mismo, realizándose los valores vencidos y negociándose los que resulten corrientes, con lo cual se ultimarán las respectivas operaciones.

4.º Que se supriman las rentas interinas ó provisionales que autorizó la Real orden de 17 de Septiembre de 1857 para las Corporaciones y personas que estaban privadas de los recursos dimanados de sus bienes, objeto de la desamortización, mientras ésta se realizaba y tenía lugar la indemnización definitiva; puesto que no tiene razón de ser actualmente dicho sistema provisional; y

5.º Que la deuda perpetua exterior estampillada se extinga en el plazo de cincuenta años, mediante sorteos trimestrales y á la par, constituyéndose á dicho fin en el presupuesto la correspondiente anualidad, que será

de 6.512.332 pesetas oro, necesaria para el completo reembolso de dicha deuda en el plazo marcado.

Declaro, Sres. Diputados, que siento en el alma molestar tanto vuestra atención (*muchos Sres. Diputados*: No, no), pero ya comprenderéis que á ello me obliga la importancia de la materia discutida.

Yo entiendo que toda Nación que tiene deuda exterior carece de independencia económica; aparte de que el régimen de privilegio, de que disfruta la deuda al 4 por 100 exterior estampillada es gravoso al Erario público, en el doble concepto de no contribuir por el impuesto de utilidades como las demás deudas del Estado, y en el de exigir una exportación anual de oro de más de 41 millones de pesetas, que influye considerablemente en la elevación del cambio.

Sentado esto, cabe preguntar: ¿por qué medio, con qué procedimiento se puede llegar á la extinción de nuestra Deuda al 4 por 100 exterior estampillada? La repatriación sería el *desidératum*; pero, ¿está en condiciones el mercado nacional de absorber un empréstito de 1.200 millones, que próximamente serían necesarios para cancelar por reembolso aquella Deuda, á más de el de los 1.500 millones que se propone para el desarrollo de nuestro poder, cultura y riqueza? Por otra parte, no se puede pensar en las actuales circunstancias, en la conversión de dicha Deuda exterior. Sería pretender lo imposible, querer lo absurdo, soñar despierto.

No queda, pues, más que un medio, que es el que el Gobierno propone, y que ya consignó en un proyecto de ley mi amigo el Sr. Besada: la amortización tri-

mestral por sorteo y á la par durante cincuenta años, dedicando á ello 6.512.332 pesetas oro.

El Sr. Garriga hablaba de la conversión de la deuda amortizable al 5 por 100. Yo me permití interrumpir á S. S., y le ruego me perdone, diciéndole que con las conversiones sucede lo propio que con los contratos de comercio; que se hacen, no cuando se quiere, sino cuando se puede.

Es principio inconcuso en materia financiera, que cuando una Deuda se cotiza sobre la par debe desaparecer, porque significa que se paga un interés superior al que se ofrece por el dinero en el mercado. Y yo pregunto á S. S.: ¿cree que dada la cotización de ese signo de Deuda, de 1 por 100 sobre la par, cabe pensar siquiera convertirlo en el del 4 por 100 amortizable ò interior, teniendo en cuenta la cotización de ambos?

En otros de los proyectos de ley que también he presentado se regula el complejo servicio de la Caja general de Depósitos. Claro que yo, como Abogado, no podía incurrir en la herejía jurídica de llevar á los depósitos de la Caja el principio de la prescripción, por que es bien sabido que el depositario está siempre poseyendo en nombre del depositante; pero había otro camino, que es el que yo propongo en el proyecto: todo depósito voluntario ò necesario se declarará abandonado, y por lo tanto, de la propiedad del Estado, si transcurren treinta años, sin que se reclame el pago de intereses.

Se establecen reglas sobre renovación de resguardos y expedición de los duplicados, se condicionan los

endosos—fuente de grandes abusos—estableciendo que no tendrán fuerza legal si de ellos no se toma razón en el registro que al efecto se abrirá en la Caja de Depósitos, y se determinan responsabilidades para los funcionarios á fin de impedir abusos perjudiciales para la Hacienda.

En ese mismo proyecto se propone también que los depósitos procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de Propios, se conviertan forzosamente en inscripciones nominativas de Deuda perpetua del 4 por 100, por un valor enteramente igual al importe del respectivo depósito, canjeando el resguardo por la inscripción correspondiente, y remitiéndola inmediatamente la Dirección general de la Deuda á la del Tesoro para su cancelación.

Con esto se consiguen dos beneficios para el Estado: uno, que los intereses de estos depósitos no continúen por más tiempo sustrayéndose el pago del 20 por 100 del impuesto de utilidades; y otro, que quede liquidada la tercera parte proximamente de los depósitos que hoy existen en la Caja, puesto que estos ascienden á unos 90 millones, y los procedentes de la tercera parte del 80 por 100 de Propios importan unos 30.

En cuanto á las cargas de Justicia, comprendidas en la sección cuarta de obligaciones generales del Estado, proceden como sabéis, de la indemnización anual concedida en determinados casos, por expropiaciones de bienes ó derechos, ó en recompensa de servicios, y basta la simple lectura de su detalle para evidenciar que constituyen un verdadero anacronismo, y que dado

su origen y forma de pago nada más lógico y natural que transformarlas en valores de Deuda perpetua, con cuyo concepto guardan estrecha analogía. Varias disposiciones y últimamente la ley de 18 de Junio de 1885, ordenaron la conversión de dichas cargas de justicia, aún estableciéndola con carácter voluntario, y con la rebaja, como ha indicado mi amigo el Sr. Espada del 25 por 100 del capital.

La mayor parte de los acreedores han solicitado y obtenido la conversión; pero queda aún subsistente una cantidad, grande en el número y pequeña en la cuantía, con relación al importe primitivo de tales obligaciones; y como es de presumir que las que se hallan sin convertir sea por causa de su escasa entidad, hay algunas de 100 pesetas y aun de menos, y acaso por la lenta tramitación à que han de sujetarse los expedientes, puesto que en estos se exige el informe de las Direcciones de la Deuda y de lo Contencioso, de la Intervención general y del Consejo de Estado; y como es evidente la conveniencia de que todas esas cargas de justicia de carácter perpetuo y reconocidas desaparezcan, se propone por el Gobierno en el citado proyecto de ley, relativo à la reforma de servicios de la Deuda, la conversión forzosa de las mismas, abreviando en lo posible los trámites de los expedientes, toda vez que la cuantía de las obligaciones pendientes no requieren tan complejas solemnidades; y se nombra para ello una Junta presidida por el director de la Deuda, que resolverá todas las reclamaciones sobre conversión, y contra cuyo acuerdo no cabrá más recurso que el conten-

cioso, ante la Sala tercera del Tribunal Supremo.

La conversiòn Sres. Diputados, tendrá que pedirla el interesado dentro del plazo de un año, so pena de caducidad que también se declarará cuando solicitada la conversiòn se dejen transcurrir seis meses sin presentar los documentos que la Administración estime necesarios para la justificación del derecho, ò cuando se deje pasar igual periodo de tiempo sin reinstar el expediente (*Muy bien, muy bien en la mayoría.*)

Me llama la atenciòn que los Sres. Diputados que con tanto interés siguen estos debates, y con tanta solicitud se enteran de todos y cada uno de los conceptos del presupuesto, no se hayan fijado en que, entre las cargas de justicia, hay una temporal, no de escasa entidad: una de 450.000 pesetas que anualmente se viene pagando á la Diputaciòn de Navarra. Y es necesario que sobre esto fije la Cámara su atenciòn, por que es de no pequeña importancia para el país.

El año 1841 la Diputaciòn de Navarra solicitò del Estado una indemnizaciòn por su renta de Tablas. El año 1846 se dictò una Real orden para que se procediese á la liquidaciòn de esos créditos y que, mientras tanto, *provisionalmente*, se abonasen todos los años á la Diputaciòn 450.000 pesetas. Van transcurridos desde aquella fecha sesenta y cuatro años; lleva recibidos la Diputaciòn de Navarra cerca de 29 millones de pesetas; y ese expediente aún està sin resolver. Por eso yo dispuse que con toda urgencia, sin pretexto ni excusa alguna, se buscara el expediente, se tramitara y se resolviera, porque estimo que esto lo exigen de consuno el

interés del Tesoro y la seriedad de la administración. (*Muy bien.*)

Y, por último, Sres. Diputados, respecto á las obligaciones de las Clases pasivas, y que, como acaba de decir muy bien mi respetable amigo el señor Azcárate, ascienden en la actualidad, no á los 75 millones que aparecen en la sección 5.^a de Obligaciones generales, sino á bastante más, teniendo en cuenta lo que respecto á este particular aparece en el presupuesto de la Guerra, es innegable que constituye una carga pesadísima del presupuesto, siendo alarmante su progresión creciente, y que, de seguir así, constituirán dentro de poco un gravamen intolerable.

No hay más que recordar que en un periodo de treinta años—de 1881 á 1910—esas Obligaciones de Clases pasivas aumentaron en más de un 40 por 100. En 1881 importaban 48 millones de pesetas y en 1910 excedieron de 74 millones y medio.

Claro está que no se puede pretender la supresión de los derechos pasivos. Sería contrario á las corrientes modernas.

No cabe tampoco pensar en su capitalización, porque aparte de que en la práctica resultaría ineficaz, vendría á contrariarse el fin fundamental de los derechos pasivos.

Y sería, Sr. Garriga, inútil pretender la creación de Montepíos especiales, porque difícilmente llegarían á contar con los recursos indispensables, como lo viene demostrando el Montepío de las clases pasivas del Magisterio de primera enseñanza, cuya precaria situación

constituye una amenaza constante de que en plazo no lejano, tenga el Estado necesidad de atender también al pago de las pensiones de los maestros de instrucción primaria, y de sus familias.

Pero si es de irrefragable evidencia, que se impone la necesidad de modificar la caótica, laberíntica y contradictoria legislación de la materia; que se impone la precisión de reformar las bases en que hoy se asienta el reconocimiento de los derechos pasivos de los servidores del Estado y de sus familias, à fin de poner coto para el porvenir à la progresión creciente de dichas obligaciones. Y á este propósito, el Gobierno, en la forma màs eficaz y rápida, propondrà à las Cortes el restablecimiento de aquellas disposiciones del proyecto de ley de 20 de Mayo de 1862, puestas en vigor por las leyes de Presupuestos de 1864 y 1866, que regularon las pensiones de retiro y orfandad sobre bases de mayor igualdad que las establecidas en los reglamentos de los Montepíos y de manera màs ordenada y metódica; disposiciones que fueron declaradas en suspenso por el decreto de 22 de Octubre de 1868, que restableció y mandó aplicar à la letra y con todo rigor los anacrónicos reglamentos de los Montepíos, con lo cual es indudable que se causó un perjuicio à los intereses del Estado, toda vez que mientras que las pensiones del Tesoro, con carácter vitalicio, no se devengaban hasta después de haber prestado los causantes servicios durante un periodo de quince ó màs años, las del Montepío se obtenían con sólo haber servido dos, aparte de los abusos cometidos con las incorporaciones à los

Montepios. (*Muy bien, muy bien, en la mayoría.*)

Voy á terminar contestando á una pregunta concreta que me ha hecho el Sr. Azcàrate. Claro es que las cantidades que se consignan en Obligaciones generales para el pago de la Comisión del Banco, mientras subsista la ley vigente no hay más remedio que consignarlas, porque son consecuencia del convenio ley de la Tesorería con el Banco. Dice S. S. que hay que suprimirlas. Yo á eso no puedo contestar concretamente; lo único que puede decirle es que en estos momentos estoy trabajando en la nueva ley del Banco, y que estimo que esa ley debe presentarse pronto; pero estimo más, estimo que debe presentarse é inmediatamente discutirse, porque una ley de esa importancia y transcendencia no puede quedar muchos días sobre la mesa; menos aún muchos meses.

Lo que sí diré à S. S. es que he de tener en cuenta todas las indicaciones que ha hecho y todas las demás que mi estudio y mi reflexiones me sugieran.

RECTIFICACION

Para dar las más expresivas gracias al Sr. Azcàrate por las para mí benévolas frases con que ha puesto término à su rectificación.

Tiene razón S. S. ; ya llegará el momento en que discutamos lo del impuesto progresional y progresivo; pero á mí me importa hacer constar lo siguiente: No se puede hacer más que dos hipótesis fundamentales en la construcción de una tarifa para un impuesto personal; que son, que el tipo del tributo sea inalterable,

ò que el tipo del tributo varíe, según la magnitud de la base. El primero se llama proporcional, el segundo se llama progresivo. Dentro del progreso caben otras dos hipótesis; que el tipo del impuesto crezca ó decrezca, según aumente la base tributaria.

Yo no estoy conforme con S. S. No es el impuesto progresivo lo que determina en ese fin social, el repartimiento de la riqueza; no, ya lo he dicho la otra tarde; es el impuesto, es la imposición progresiva general. Otra cosa es el impuesto progresivo especial, el impuesto progresivo como tributo singular, aplicable tan sólo cuando hay que pagar una parte de las obligaciones del Estado, porque cuando se trata del pago de todas, hay una porción de impuestos de carácter real y de carácter personal.

Pero, en fin, ya discutiremos esto, y entonces veremos el alcance que tiene el impuesto progresivo y el impuesto progresional. No tengo más que decir.

DISCURSO

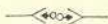
del día 16 de Noviembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
el día 16 de Noviembre de 1910.



*Resumiendo el debate sobre la totalidad
del presupuesto del Ministerio de Hacienda*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Muy pocas, Sres. Diputados, para demostrar la conveniencia y utilidad de los aumentos que figuran en el presupuesto que se discute con relación al de 1909, y que fueron impugnados por los Sres. Diputados que han intervenido en este debate.

Los aumentos se ocasionan por la reorganización de unos servicios, y la creación y ampliación de otros.

Voy á empezar por el exámen de la reorganización de los de la Inspección, que tanto ha censurado el señor Garriga.

Para la organización de las funciones inspectoras de la Hacienda pública no caben más que dos sistemas: la Inspección general, ó las órdenes del Ministro de Ha-

cienda, y las Inspecciones parciales dependientes de los respectivos Centros directivos.

La organización actual de la Inspección que, como sabe el Sr. García Leániz, se denomina Inspección general de Hacienda y que forma una Sección de la Subsecretaría del Ministerio, no responde à ninguno de dichos sistemas, toda vez que ni tiene la inspección de todos los servicios, ni la investigación y comprobación de todos los tributos, puesto que los servicios de las Direcciones de lo Contencioso, Aduanas y Timbre están á cargo de los respectivos directores, así como la investigación y comprobación de los impuestos de Derechos reales, Aduanas y Timbre; y los ramos de la Intervención general y de las Direcciones de Contribuciones y del Tesoro no tienen la inspección de sus respectivos servicios, ni la de Contribuciones la investigación y comprobación de los tributos que administra.

Como yo entiendo que los servicios bien organizados de la Inspección é Investigación son la base de una buena y honrada administración, bien hubiera querido proponer al Parlamento una reorganización análoga á la que existe en otros países, especialmente en Francia; pero en atención à que para esto precisa la concurrencia de tres factores—de que carecemos hoy—: dinero, tiempo y suficiente personal idóneo, he tenido que limitarme à una labor más modesta; esto es, à hacer extensiva à la Intervención general y Direcciones del Tesoro y de Contribuciones lo que hoy sucede con las Direcciones de lo Contencioso, Aduanas y Timbre; es decir, llevar á ellas la inspección de sus servicios y

la investigación y comprobación de los tributos. Y me he decidido á proceder así, porque la práctica viene demostrando que eso es más eficaz que la actual organización de la Inspección.

Está fuera de toda duda que el principio fundamental de una buena organización de las funciones de la Hacienda pública es el de la especialización de los servicios, esto es, que los inspectores conozcan, no de un modo general, sino con todo detalle, la reglamentación del ramo, función ó servicio que haya de ser inspeccionado. ¿Podría haber nada más absurdo que encomendar la inspección de una obra de fortificación ó de la fábrica de Trubia, no á un oficial de ingenieros ó de artillería, sino á uno de infantería? ¿No es indudable que resultaría infructuosa la inspección de las minas de Almadén ó del servicio del Catastro realizada por un empleado del Tesoro, así como la efectuada en una dependencia de Aduanas por un funcionario que hubiere servido la mayor parte del tiempo de su carrera en las de la contribución territorial?

Está fuera de toda discusión que nadie como el director de un ramo conoce al detalle los servicios que dirige y el personal de que dispone, y que nadie como él, por tanto, tiene competencia para acordar una visita de inspección, nombrar la persona que la haya de realizar y dar las instrucciones para efectuarla.

Fundándose en todo esto, se crean en el nuevo presupuesto para las Direcciones del Tesoro, Contribuciones y Propiedades é Impuestos, é Intervención general, una sección de inspección en cada uno de di-

chos Centros directivos, y otra sección en la subsecretaría, dependiente directamente del Ministro, y que estarán encargadas de los servicios especiales que se les encomienden acerca de la marcha y desarrollo de todas las contribuciones é impuestos, y la de estudiar y proponer aquellas reformas que la práctica aconseje. Así se dará unidad al trabajo y se podrá exigir con más razón y fundamento la responsabilidad al jefe del servicio por omisión á deficiencia.

Y ya que de los servicios de la inspección me ocupo, he de decir que también se reorganiza el del impuesto minero.

Hoy esta inspección está á cargo de los ingenieros jefes de las provincias, que dependen del Ministerio de Fomento, y ante ellos se presentan las declaraciones que formulan los concesionarios, que rara vez dejan de ser aprobadas por dicho ingeniero jefe.

Me propongo, para los efectos de los impuestos mineros, dividir la Península en cuatro distritos, estableciendo en cada uno de ellos una sección técnica compuesta de ingenieros de minas, dependientes del Ministerio de Hacienda y á las órdenes inmediatas del director de Contribuciones, que examinarán y aprobarán ó repararán las declaraciones que presenten los concesionarios, averiguando la ley de los minerales y fijando el valor de los mismos.

Después de todo, con esta nueva organización de la inspección de los impuestos mineros, no se hace otra cosa que extender á dicho impuesto lo que viene aplicándose á los demás de producto. Para las contribucio-

nes territorial, industrial y de utilidades, los que actualmente fijan el líquido imponible son los ingenieros agrónomos, los arquitectos, los ingenieros industriales y los profesores mercantiles respectivamente, y todos ellos dependen del Ministerio de Hacienda y están bajo las inmediatas órdenes del director de Contribuciones.

También se aumenta á los efectos del impuesto de utilidades el número de los profesores mercantiles, á fin de poner término á lo que viene ocurriendo de que un gran número de Sociedades se sustraigan al pago del tributo. No satisfacen la contribución industrial porque no están sujetos á ella según la legislación vigente, y no pagan la de utilidades porque en los balances que presentan no existen éstas. En tal caso se encuentran más de 160 Sociedades. Ya comprenderéis, pues, señores Diputados, la necesidad de que haya en las provincias personal idóneo, que sepa leer y entender los balances mercantiles.

Asimismo se aumenta en el presupuesto el crédito para el servicio del avance catastral y Registro fiscal, á fin de dar á dichos trabajos el mayor impulso para que queden todos ellos terminados en el plazo de diez años. Así lo demandan de consuno el interés del Estado y el de los particulares; el del Estado, porque se descubrirá riqueza oculta y se ensanchará la base de la tributación, y el del particular, porque pagará por contribución el tipo único del 14 por 100 en territorial, en vez del 15,50 ò del 19 y pico según se trate de la primera ò de la segunda sección, que es lo que hoy se viene satisfaciendo y en urbana el 17,50, en vez del 21,50 ò del 23.

Reconozco, Sr. Martín Sánchez, que es de gran de importancia, utilidad é interés el Catastro parcelario, negarlo equivaldría cerrar los ojos à la evidencia y empañarse en no querer ver la realidad; pero también creo que S. S. reconocerà conmigo que para ese trabajo hace falta mucho tiempo y dinero, y, que por tanto, no podemos por ahora pensar en ello y debemos resignarnos á lo único que es factible en estos momentos: al avance catastral, cuyos trabajos van muy adelantados.

Y ahora voy à ocuparme de la creaciòn que se propone en el presupuesto, de la Direcciòn y Administraciones provinciales de propiedades é impuestos.

Es verdaderamente enorme y causa espanto el trabajo que pesa sobre la Direcciòn de Contribuciones. Baste decir que tiene á su cargo los siguientes servicios: propiedades y derechos del Estado; contribuciones territorial, industrial y de utilidades; impuestos de consumos, minas, transportes y de cédulas; avance catastral, Registro fiscal y estadística del tributo. Así se explica que desde el año 1903 al 1909 haya despachado dicha Direcciòn más de 100.000 expedientes; sólo en el año 1909 despachó más de 15.000, lo cual da un promedio de unos 48 expedientes diarios ¿Còmo es posible exigir que á esos expedientes se les preste la debida atención? ¿Còmo se puede pedir que haya rapidez en su tramitaciòn?

Esta es una de las dos razones à que obedece la creaciòn de la indicada Direcciòn de Propiedades é impuestos, pues con ella quedará descargada la Direcciòn de contribuciones de algunos servicios; podrá, por

tanto, imprimirse mayor celeridad en el despacho de los expedientes, y examinar y aprobar con más detención los documentos en que funde sus derechos la Hacienda, y las liquidaciones se practicarán seguramente con mayor escrupulosidad.

Y á esta nueva Direccìon pasarán desde luego los impuestos de transportes, consumos y de gas y electricidad, y todo el ramo de propiedades, rentas y ventas; pero, además, Sr. García de Leániz, esa nueva Dirección irá preparando el establecimiento de la *regi*, con los dos órganos fundamentales de administración y de inspección, á fin de que pueda llegar un día en que dicha Dirección recoja los impuestos sobre azúcares: alcoholes y achicorias. (*Muy bien, muy bien.*)

En la Direccìon de Contribuciones se crea una sección, con el necesario personal administrativo y técnico, para la estadística del tributo, de que desgraciadamente carecemos, toda vez que la estadística no ha de ser sólo para conocer el rendimiento del tributo, sino también los movimientos de las bases del mismo.

Nuestra actual estadística de la contribución territorial es del año 1874. La estadística del impuesto de transportes, la más voluminosa de Europa, no contiene más que la liquidación por cada una de las formas reglamentarias; y por ello si se pretende saber, por ejemplo, el efecto de la reduccion del impuesto de transportes sobre los billetes á precios reducidos, no se encontrará seguramente en ella dato alguno.

Es más; cuando se ha querido ceder á los Ayuntamientos el impuesto de transportes urbanos, no ha

sido posible saber por la estadística su importe; razón por la que fué preciso, teniendo por base los datos de la estadística, hacer por personas peritas cálculos, que por cierto oscilaron entre cien mil y un millón de pesetas.

La estadística del impuesto de utilidades contiene detalles como éste: figura una Sociedad con 500.000 pesetas por obligaciones, y pagando por intereses de las mismas más de trescientas mil.

En resúmen: no tenemos estadística del tributo, y es de absoluta necesidad tenerla: y por eso y para eso se crea en la Dirección de Contribuciones la sección à que acabo de referirme.

No es la necesidad de descargar á la Dirección de Contribuciones del enorme trabajo que sobre ella pesa hoy la única razón que se ha tenido en cuenta para crear la de Propiedades é Impuestos; hay otra de gran importancia y transcendencia: la necesidad de desarrollar los impuestos indirectos.

He dicho en varias ocasiones é insisto ahora, que las naciones modernas desarrollan sus impuestos indirectos; que éstos son el principal apoyo de las grandes Haciendas, y que España es de las naciones de Europa que le son comparables la que tiene mayor proporción de contribuciones directas en todo el sistema impositivo del Estado.

El sabio catedrático de la Universidad de Cataluña Federico Flora, en su obra *Ciencia de la Hacienda*, afirma que los impuestos indirectos son y se consideran más importantes que los directos; al punto de que

su productividad, superior á la de los directos, constituye la nota saliente de los grandes sistemas tributarios modernos.

El más genial de los hacendistas modernos, catedrático de la Universidad de Gotinga, Gustavo Cohn, y Adolfo Wagner, catedrático de Berlín y fundador de la moderna ciencia financiera, sostienen y defienden asimismo la justicia, conveniencia y necesidad, de la imposición indirecta.

Y que todos los pueblos modernos desarrollan sus impuestos indirectos no lo digo yo; lo dicen los hechos, que hablan con gran elocuencia y tienen extraordinario é irresistible poder. Si examináis los presupuestos de Italia, Hungría, Alemania, Austria, Francia, Inglaterra y España, os encontraréis con que por cada una peseta de contribuciones directas reales y personales, tienen de impuestos indirectos de uso y consumo; Italia, 1,95; Hungría, 1,75; Alemania (Imperio y Estados particulares juntamente), 2,09; Austria, 2,49, Francia, 2,97; Inglaterra, 1,69; España, 1,56, si comprende la redención militar entre los directos, y de 1,61, si se comprende entre los indirectos, como veís, pues, España tiene menor cifra de impuestos indirectos que Inglaterra, no obstante ser allí extraordinaria la preponderancia de los impuestos directos, á consecuencia de los principios de libre-cambio, que reducen las aduanas al mínimum, y de la secular institución del impuesto sobre la renta.

Y ya que de Inglaterra me ocupo, he de decir que allí toda reforma fiscal encaminada á reducir los impuestos directos y aumentar los indirectos, entrañaría en rea-

lidad una reforma aduanera de carácter proteccionista, pues como las *accisas* ya no pueden recargarse más de lo que están, tendría que llevarse el impuesto à las Aduanas y gravar por consiguiente la carne, el pan, y demás artículos de primera necesidad, ya que los derechos de los 14 ó 17 artículos de su Arancel están extraordinariamente gravados: el café, el té, las especies, las pasas, los higos secos, alcoholes, vinos, etc., etc. Así se explica que no haya ningún liberal inglés que sea partidario del desarrollo de los impuestos indirectos y reducciòn de los directos; pero ya lo acabáis de oir: todos los grandes maestros de la ciencia de la Hacienda, sobre todo los alemanes, opinan lo contrario y sostienen lo que hace un momento he tenido el honor de exponer à la consideraciòn de la Cámara. (*Aprobación en la mayoría*)

Por otra parte, no hay que olvidar que la estratificaciòn social de Inglaterra no es la estratificaciòn social de España. Allí hay muchísimos millonarios, muchos archimillonarios, y son numerosas las clases medias. Aquí, por el contrario, las buenas fortunas no existen en gran número, y en escasísimo las muy grandes; la clase media es muy escasa, y en cambio, son numerosísimas las clases proletarias. Y ¿còmo se ha de atrever nadie à llevar à éstas el impuesto directo? Sería una injusticia; constituiría una verdadera iniquidad. (*Muy bien, muy bien.*)

Señores Diputados: yo no sé si habré recogido todas las indicaciones que se han hecho à propósito del presupuesto de Hacienda; pero la hora es muy avanza-

da, la Cámara está ya fatigada, yo confieso que lo estoy también, y, por tanto, rogándoos que me dispenséis el tiempo que abusé de vuestra bondad, pongo término à mi discurso. (*Muy bien.*)

DISCURSO

del día 23 de Noviembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 23 de Noviembre de 1910.



*Al discutirse el proyecto de ley modificando el
impuesto de derechos reales.*



El Sr. Ministro de HACIENDA: Sres. Diputados, procuraré en breves palabras hacerme cargo de las dos notas salientes del debate de ayer. Los señores que impugnaron el proyecto que se discute han hecho, entre otras, estas dos importantes manifestaciones: que el impuesto proporcional es el más equitativo, y que la tarifa que se consigna en el dictamen que se discute es una tarifa improvisada.

Yo voy á demostrar que el impuesto proporcional no realiza el fin de la igualdad en el sacrificio, y que la tarifa de que se trata no es improvisada, Sr. Garriga, sino bien estudiada y construída con estricta sujeción á reglas técnicas.

Empiezo por afirmar, sin temor de padecer equivo-

cación, y sin que me asalten dudas ni recelos de ser por nadie rectificado, que en la construcción de la tarifa en un impuesto no caben más que estas dos posibilidades fundamentales: el tipo de gravamen permanece el mismo, cualquiera que sea la magnitud de la base, ó varía, al variar ésta. En el primer caso, el impuesto se llama proporcional, y en el segundo, progresivo. En éste caben nuevamente dos posibilidades: el tipo de imposición crece à medida que aumenta la base, ò el tipo de imposición decrece con el aumento de ésta. Se llama por antonomasia impuesto progresivo à la primera de estas dos formas, y la segunda está representada principal aunque no exclusivamente, por el impuesto fijo, cuya forma más frecuente entre los directos es la capitación simple.

Sentado esto, veamos cuál de dichos dos impuestos realiza mejor la igualdad del sacrificio cuál es el más equitativo.

Del principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es el que informa el derecho moderno, se derivan en el terreno tributario estos otros dos: la generalidad ó universalidad del impuesto, y su uniformidad.

El principio de la generalidad significa que todos los ciudadanos están obligados al pago de los tributos generales, y que no se conciben privilegios de clase ni exenciones de esta obligación. Y la uniformidad en el impuesto, consiste en que todos los que poseen la misma riqueza satisfagan cuotas iguales, y desiguales los que están dotados de distinta capacidad contributiva,

de suerte que como dice Flora, la recíproca condición subjetiva de cada uno subsista inalterable después de realizado el pago del impuesto.

Ahora bien; si es necesaria la igualdad del impuesto, es decir la igualdad del sacrificio que el Estado exige à los ciudadanos por medio del tributo, ¿cómo se ha de hacer la distribución de éste para que sea uniforme entre todos los que poseen distinta riqueza?

Como dicen célebres economistas, la capacidad contributiva de quien posee 1.000 pesetas de renta es más del doble del que tiene una de 500.

Es indudable que para inquirir la capacidad contributiva de los ciudadanos, hay que distinguir forzosamente entre sus necesidades reales ò naturales, que son aquellas que es preciso satisfacer para poder vivir, y las ficticias, ò sean de las que se puede prescindir por lo que tienen de voluntarias, de comodidad y de placer.

Y siendo esto verdad, también del propio modo lo es que desde el momento que el impuesto proporcional no distingue entre lo necesario y lo superfluo, entre la renta libre y la necesaria, es indudable que grava más à los ciudadanos que cuentan con lo absolutamente preciso para satisfacer sus necesidades reales ò naturales, que à los que tienen medios suficientes para satisfacer infinitas necesidades ficticias, de donde resulta que en el impuesto proporcional el sacrificio está en razón inversa de la renta, y aquel que no realiza el fin de igualdad que se propone.

Los defensores de este impuesto invocan, como

ventaja ó mérito grande del mismo su objetividad en el sentido de que atendiendo solamente á los bienes y prescindiendo en absoluto de la persona del contribuyente, excluyen la arbitrariedad; y al exigir à todos la misma cuota á todos demanda también el mismo sacrificio. Pero esto no es así. No son los bienes y sí las personas las obligadas á pagar el tributo; ya nadie cree en el viejo fetichismo de la llamada realidad del impuesto, y si alguna duda cupiera, la desvanecería la lectura del art. 3.º de la Constitución, que establece que todo español esta obligado à contribuir en proporción de sus haberes, para los gastos del Estado, de la provincia y del Municipio.

Claro es que los bienes sirven como medio indirecto para apreciar las condiciones personales del contribuyente, y son los reveladores de su capacidad contributiva.

Y en cuanto à que exigiendo una misma cuota se demanda el mismo sacrificio, es completamente inexacto. Pues, ¿quien puede poner en tela de juicio que el que tiene una renta de 10.000 pesetas hace menor sacrificio pagando 1.000 en concepto de tributo que el que teniendo 1.000 de renta paga 100? Al primero después de pagar, le queda lo suficiente para atender á las necesidades naturales ò reales de la vida, y al segundo no.

Para poder obtener la igualdad subjetiva del impuesto, ó sea la igualdad relativa al sacrificio, se debe gravar la renta, no en razón proporcional, sino progresiva; esto es, debe gravarse más la renta libre que la necesaria; por eso los grandes maestros de la ciencia

de la Hacienda sostienen que el impuesto progresivo es el más equitativo y el más natural; que el impuesto progresivo es el que puede realizar la igualdad del sacrificio, es el que puede recabar de todos una cuota de riqueza que suponga un disfrute igual, que es la fórmula más exacta de la justicia del tributo; y, en fin el impuesto progresivo en las ideas democráticas es su expresión fiscal.

El impuesto progresivo lo defienden los grandes maestros como Held, Schanz, Wagner, Cohn, Eheberg, Seligman, Flora, Schaffle y otros; y lo han aceptado y establecido casi todas las Naciones, como Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, Italia, Japón, algunos Estados de los Estados Unidos, Suiza, etc., etc.

Tres son los argumentos que se esgrimen contra el impuesto progresivo, á saber: que es socialista y ex-poliador; que incita al fraude y á la emigración de capitales, y que produce poco.

En cuanto al primer argumento, he de decir que hay muchos individualistas que defienden con entusiasmo el impuesto progresivo; que hay muchos individualistas que, sin abjurar de sus ideas económicas y partiendo precisamente de ellas y razonando sobre la mismas, argumentan en el sentido de que el principio de la progresión es compatible con las ideas económicas más semejantes y heterogéneas.

Claro es, ya lo he dicho en otra ocasión que el principio de la progresión tiene aplicaciones muy varias y significaciones políticas y sociales muy diversas.

Nadie puede desconocer que en circunstancias da-

das, con la acción paralela del resto de la política económica y con escalas suficientemente rápidas, la aplicación del principio de la progresión puede terminar en el socialismo colectivista y en la negación por tanto del régimen vigente, que descansa ó tiene por fundamentos la propiedad privada y el cambio. También he dicho ya en otra ocasión que á esto no va ni irá jamás el actual Gobierno, y estoy seguro que ningún otro que se encuentre en la plena posesión de la integridad de sus facultades intelectuales.

Pero ¡qué más! el Gobierno ni siquiera intenta valerse directamente del impuesto como medio de regular la distribución de la renta nacional, ni aun siquiera dentro de aquellos moderados límites compatibles con el vigente régimen de la propiedad privada. El Gobierno, es cierto, ha prometido reformas sociales, pero también lo es que las realizará por medio de los correspondientes proyectos de ley, y no en manera alguna por la acción del sistema fiscal. La reforma de éste podrá producir, y producirá seguramente, efectos en el orden social; pero no serán más que meras derivaciones que no tocarán ni poco, ni mucho, ni nada, al régimen fundamental de la distribución de la riqueza.

Es decir Sres. Diputados, que la reforma fiscal que propone el Gobierno no es más que esto, la reforma de la Hacienda, pero no de la constitución social interna de nuestra economía nacional.

Por lo mismo que la aplicación del principio de la progresión puede llegar hasta la expropiación de la renta la teoría y la práctica han establecido distinciones en

los impuestos progresivos, y de esas distinciones es la principal, la que opone entre sí los impuestos de progresión lenta, y los de progresión rápida. Estos conceptos de lentitud y de rapidez son relativos, y de esa indeterminación nace cierta inseguridad en la aplicación de los mismos al impuesto progresivo. La característica más segura es esta: impuestos de progresión lenta, son aquellos que no cambian la estructura fundamental de la distribución de la renta entre las economías particulares de la Nación. Impuestos de progresión rápida, son aquellos que cambian esa estructura.

También se distingue entre el impuesto progresivo general, ó mejor dicho, entre la imposición progresiva general y la especial. La primera, que es el impuesto progresivo, como fundamento absoluto de toda la estructura del régimen tributario, el impuesto progresivo como sistema de imposición general. Esto es una utopía que no hay ejemplo en la ciencia financiera de ningún país; esto es un absurdo en la teoría, y en la práctica imposible, económica, jurídica y financieramente.

Ninguna Nación lo ha aceptado, y casi todos los escritores lo combaten hasta con saña, llegando alguno, como Mill, á calificarlo de «robo graduado, y Proudhon de vano pasatiempo, que sirve únicamente para alimentar la charlatanería de los filántropos y hacer que aulle la demagogia.»

La imposición progresiva especial ó sea el impuesto progresivo como tributo singular, existe en muchísimos países, y lo apoyan y defienden la mayor parte de los más reputados hacendistas.

Y ahora voy á ocuparme de lo del impuesto *progresional*. Como también he dicho ya en otra ocasion, lo del impuesto *progresional* es un concepto lanzado á la circulaciòn por el célebre economista José Garnier, y que ha tenido algunos adeptos en España, pero no así en Alemania, que es la cuna misma de los impuestos personales progresivos y la patria de los fundadores y representantes de la moderna ciencia de la Hacienda.

Según Garnier, *progresional* era sinónimo de impuesto de escala lenta. Hoy como es natural, ya no significa esto, y si el impuesto cuyos tipos de gravamen se desarrollan, formando *progresiòn aritmética*, *geométrica* ó *armónica*.

Claro es que la *progresiòn matemática* de los tipos no da la característica, ni aproximadamente siquiera de un impuesto, ni es tampoco la sola manera de construirle, ni en forma rápida ni lenta. Dada una *progresiòn* cualquiera definida de tipos de gravamen, se pueden construir con ella infinitos impuestos, así de forma *rectilínea ascendente* como de forma *curva* así de *escala lenta* como de *escala rápida*.

Y en cuanto á los otros dos argumentos que se esgrimen contra el impuesto *progresivo*, de que incita al fraude y á la evasiòn de los capitales, y produce poco, diré, por, lo que al primero se refiere, que como dice Seligman, el propio argumento cabría en el impuesto *proporcional* y *elevado*. La cuestiòn está, por consiguiente, en demostrar que el efecto indicado se produciría en mayores proporciones en condiciones análogas con el impuesto *progresivo*, que con el *proporcional*, y esta

demostración ni siquiera se ha intentado; lejos de ella, la experiencia de la progresión en los cantones suizos prueba que en todos ha habido un aumento constante en la evaluación total del capital y de la renta; y que en todos aquellos países en que existe el principio de la progresión, ni la institución de la propiedad privada se ha debilitado, ni los capitales han huído del país.

Y en cuanto á que el impuesto progresivo produce poco me limitaré á hacer constar que el fin principal de ese impuesto no es el mayor rendimiento, y sí la más equitativa distribución de la carga del tributo. Reconocido esto, que es lo principal, el que de más ó menos rendimientos es puramente secundario.

Es indudable que el impuesto progresivo especial realiza la igualdad del sacrificio mejor que el proporcional, que distribuye más equitativamente la carga del tributo.

En el proyecto que he tenido el honor de presentar al Congreso se divide el impuesto sobre las sucesiones en dos miembros: uno llamado de conjunto, de carácter progresivo, sobre el total de los bienes relictos; y el otro de carácter proporcional sobre la cuota adjudicada á cada partícipe en la herencia. Ya lo dije cuando tuve el honor de exponer á la Cámara el pensamiento económico del Gobierno. Yo, en ese proyecto, me inspiré en el ejemplo de Inglaterra en su ley de 1894; ley en la cual se estableció el impuesto progresivo sobre el conjunto

Y no hay que perder de vista, no hay que relegar al olvido por que es dato importantísimo, que en esa

época, en 1894, el pueblo inglés era un pueblo modelo de individualismo económico, así como importa advertirnos que hoy que las corrientes son otras, sin embargo—fijad vuestra atención Sres. Diputados—el impuesto de cuota continua siendo proporcional en Inglaterra.

El impuesto global de los ingleses no era más que un impuesto diferido hasta la muerte del causante, no representaba otra cosa que todos aquellos gravámenes que el causante en vida debió pagar y no pagó; no era, en fin, más que un corrector, una compensación à todas las desigualdades del conjunto tributario. Por eso el impuesto de conjunto no mira jamás al heredero, sino únicamente al causante; en tanto que el impuesto de cuota, que es el impuesto por enriquecimiento, no mira más que al heredero.

Y yo pregunto. Si el pueblo inglés se ha visto en la necesidad de establecer ese impuesto de conjunto para compensar las grandes desigualdades que resultan de la totalidad de su sistema tributario, ¿qué no debemos hacer nosotros? ¿Es que nadie que no cierre los ojos à la evidencia y que no desconozca la realidad, no afirmará conmigo que nuestro sistema tributario gravà más à los pequeños propietarios que à los grandes, à las pequeñas rentas que à las cuantiosas? Si alguna duda cupiere, ahí están testimonios fehacientes que lo acreditan; ahí está esa información brillantísima hecha por la Comisión extraparlamentaria para informar sobre los consumos; en ella aparecen los datos obtenidos de presupuestos familiares de distintas clases sociales, de los que resultan que, mientras las rentas de 1.250 pesetas

están gravadas por consumos (cuidado que es solo por la cuota para el Tesoro, que no hablo de los recargos municipales) con el 5 por 100, las rentas de 30.000 pesetas en adelante lo están con el 0,85.

¿Es que hay nadie que desconozca que los valores mobiliarios en España no están tan democratizados como los demás países? ¿Hay quien ponga en tela de juicio que la inmensa mayoría de los valores mobiliarios en España está en poder de las clases acomodadas, y, lo que es triste decir, que la casi totalidad de ellos se sustrae al pago del impuesto de sucesión? Ni es posible desconocer que en la propiedad inmueble... (*El Señor Marqués de Cortina*: No es exacto eso). Yo hago esta afirmación, nacida en la práctica y del estudio (*El Señor Marqués de Cortina*: La casi totalidad es mucho decir.)

Las grandes ocultaciones en la propiedad inmueble, ¿dónde están? En los grandes propietarios. Esa riqueza ¿no es verdad que en muchas ocasiones obtiene incremento, aumento de valor que no depende, que no obedece à la acción, al esfuerzo, al trabajo del propietario, sino que responden à la acción de la comunidad, que es obra social? ¿No estamos viendo, en las poblaciones que se encuentran en periodo de desarrollo, que los terrenos, así edificados como no edificados, experimentan grandes aumentos de valor, y que no sería justo que no tributasen más que por la renta del aumento? No; deben tributar por el incremento mismo, que es una riqueza que no ha ganado el propietario, y que se encuentra en su herencia por un ordenamiento jurídico, que tampoco es obra suya.

Pero, aparte de esto, á todos se alcanza que nuestro sistema de impuestos indirectos grava todos los artículos de primera necesidad, menos el pan, y que eso no sucede en Inglaterra con sus *accisas*, Aduanas y licencias.

Nuestro sistema directo de contribuciones sobre el producto no tiene, como el *income-tax* inglés, un *mínimum* exento, ni hace rebajas á las clases inferiores. Nuestro sistema de gravámenes, de que ayer hablaba el Sr. Zavala, sobre las rentas del trabajo, tiene cuotas de las cuales algunas llegan hasta la expropiación, hasta el 20 por 100, cosa que no ocurre en Inglaterra; y en fin, nuestro sistema de Catastro, de Registro y de matrículas, se basa en promedios de producción mucho más duros y desiguales que los que sirven de base á las «Cédulas» del impuesto inglés.

De suerte que ya lo veís; Si Inglaterra se creyó en el caso de establecer su impuesto de conjunto, para buscar con él la compensación, para corregir con él las grandes desigualdades de su sistema tributario, ¿qué no debemos hacer nosotros cuando he puesto de manifiesto y de relieve, sin que deje lugar á ningún género de dudas, que son de mucha mayor cuantía las desigualdades de nuestro sistema tributario que las del sistema inglés?

Pero, en fin, como en el seno de la Comisión he observado tendencias muy distintas. como he visto que había quienes no opinaban en favor del impuesto de conjunto, y como yo entiendo que gobernar es transigir, no tuve inconveniente, siempre que se llevara el principio de la

progresión á la cuota, en aplazar el impuesto global, y á esto responde el dictamen que se discute.

Ese impuesto progresivo, y con esto voy á la segunda parte de mi discurso, ese impuesto progresivo sobre la cuota ha de hacerse efectivo con sujeción á la tarifa que consta en dicho dictamen. Esa tarifa no es, como ha dicho el Sr. Garriga, una tarifa improvisada; está hecha á la manera de la tarifa francesa. En esa tarifa no hay una razón única de progresión para todos los grados de parentesco, sino que hay varias razones de progresión, mayores ó menores, más ó menos acentuadas, según sea más ó menos remota la relación del heredero con el causante. Las líneas de gravamen no son paralelas entre sí, sino que abren por regla general en la misma dirección en que se elevan; por eso decía yo ayer, en una interrupción, que abrían en forma de abanico.

Las progresiones de esa tarifa son aritméticas, y las razones de esas progresiones son las siguientes: primera. Treinta céntimos de peseta para los tres primeros escalones de la línea recta legítima, la natural y el conyuge supérstite por lo que se refiere á la cuota viual y esos tres escalones son el de la categoría de 1.000 pesetas hasta la clase de 1.000 á 10.000; el de esta categoría hasta la de 10.000 á 25.000, y el que va de aquí á la de 25.000 á 50.000, y he puesto como razón de progresión treinta céntimos á diferencia de lo que hago en los demás escalones de los mismos conceptos, como después explicaré, porque yo siempre he creído y sigo creyendo, que en esas pequeñas fortunas hasta 50.000

pesetas bien se puede afirmar que el hijo ha trabajado con el padre y, por consiguiente, apenas cabe hablar de enriquecimiento. 2.^a Cincuenta céntimos para los demás escalones de dichos tres números de la tarifa, esto es, desde la clase de 50.000 á 100.000, hasta la de 100.000 á 250.000; desde aquí á la de 250.000 à 500 000 de ésta à la de 500.000 à 1.000.000; desde ésta à la de 1.000.000 à 2.000.000 y, finalmente, desde ahí à la horizontal de la tarifa. 3.^a Cincuenta céntimos para el cònyuge por la porción no legítima; en este número de la tarifa la razón de la progresión es constante. 4.^a Setenta y cinco céntimos para los colaterales de segundo grado, en razón de la posibilidad de una comunidad de origen de la fortuna de los hermanos; tambien es constante la razón de esta progresión; y 5.^a Una peseta en todos los demás casos, siendo del propio modo constante la razón de la progresión.

Esta tarifa no obstante estar basada en el tipo francés, ofrece importantes diferencias con la vigente tarifa francesa. En primer lugar, la tarifa francesa establece, en la línea directa, tres grados, y por consiguiente tres líneas distintas de gravamen, à saber, los hijos y los padres, los nietos y los abuelos y todos los demás. En esta que se discute, no hay más que un grado; en la línea directa no se divide. En segundo lugar, la tarifa francesa, la horizontal entra á partir de los 50 millones de francos; en ésta, á los dos millones de pesetas, es decir, que la proporción empieza en 50 millones en la francesa, y en dos en ésta; y, por último, los tipos de gravamen son mucho más bajos en la

tarifa que se discute que en la tarifa francesa.

Y así como el movimiento se demuestra andando, yo voy à demostrar la exactitud de mi afirmación leyendo unos datos que luego entregaré à los señores taquígrafos para que consten en el *Diario de las Sesiones*.

La tarifa francesa, á excepciòn de dos solos casos, que son la renta de primer grado, en el primer escalón, donde hay en nuestra tarifa un aumento de 10 céntimos, y la cuota no legítima de la viuda, en que hay 50 céntimos, en todo lo demás, la tarifa francesa es muy superior á la tarifa española.

Però yo os debo ahora la explicaciòn y la justificaciòn de esas dos excepciones. Esa explicaciòn es que la tarifa española tiene el primer escalón en las 1.000 pesetas y la francesa en 2.000 francos.

Y veamos ahora el resto de la tarifa. En la línea directa hay un aumento sobre la que se discute hasta de 1,50; en la de segundo grado hasta 2 por 100, y en la de grados más remotos hasta 2,50, y así sucesivamente; y luego aumentan de 3,75 de 7,25, de 6 de 8 de 7 y de 3. De manera que queda justificado que los tipos de gravamen de la tarifa que la Comisión consigna en su dictamen son inferiores à los de la tarifa francesa.

Impórtame hacer constar que se ha procurado construir esta tarifa con el mayor esmero; pero yo no debo ocultar á los Sres. Diputados que no se ha podido hacer á la perfección porque no es posible á causa de las dificultades con que se lucha, especialmente para establecer el rendimiento probable de los tipos de gravamen,

por la deficiencias de la estadística tributaria. En la estadística del impuesto no se encuentran aquellos datos que son precisos para poder calcular con garantías de acierto ese rendimiento probable de la progresión; ni en la estadística de la población, que no se ha ocupado jamás de este problema, se encuentran datos respecto del promedio de duración de la *generación* y del número medio de los hijos que deja cada matrimonio al disolverse; y claro es que, faltando datos tan necesarios, tan precisos, no es posible, hacer una obra completa. Y digo que no es posible no ya refiriéndome al Ministro que tiene el honor de dirigirse al Parlamento, porque después de todo yo he de reconocer que la obra no es mía, sino del que conceptúo el más apto y el más competente en estas materias en España, que es el señor Flores de Lemus, y por eso yo considero que la tarifa está bien construída, aun cuando tenga aquellas deficiencias propias de los defectos *del material* que acabo de indicaros.

Termino, pues, Sres. Diputados, para no molestar más vuestra atención, diciendo que no podemos volver la espalda à la realidad; que es preciso no olvidar que las corrientes modernas van à la construcción, en forma progresiva, del impuesto sobre las sucesiones en general. Y os ruego que me perdonéis el tiempo que molesté vuestra atención. (*Muy bien, muy bien, en la mayoría.*)

ESTADO COMPARATIVO Á QUE HA HECHO REFEREN

RESULTADOS *de la comparación entre los tipos de la tari*
(En la escala del proyecto español no existe la
en cambio, en la francesa, la

CONCEPTOS	0	1.000	2.000	10.000
	1.000	2.000	10.000	25.000
Recta de primer grado.....	+ 0,10	+ 0,40	0,10	0,30
Idem de segundo grado....	0,40	0,10	0,60	0,80
Idem más remota.....	0,90	0,60	1,10	1,30
Cónyuges, cuota legítima..	2,90	2,60	3,35	3,80
Idem, cuota no legítima....	0	+ 0,50	0,25	0,50
Colaterales de segundo grado.....	2,25	1,50	2,25	2,25
Idem de tercer grado.....	2	1	2	2
Idem de cuarto grado.....	4	3	4	4
Idem de quinto grado.....	6	5	6	6
Idem de sexto grado.....	5	4	5	5
Idem de grados más distin- tos del sexto y extraños.	1	0	1	1

El signo + indica la diferencia en más de la tarifa española; las
tarifa francesa.

CIA EN SU DISCURSO EL SR. MINISTRO DE HACIENDA

*fa francesa vigente y los del dictamen de la Comisión.
división de 1.000 á 2.000, y de 2.000 á 10.000;
primera clase es de 1.000 á 2.000.)*

25.000 50.000	50.000 100.000	100.000 250.000	250.000 500.000	500.000 1.000.000	1.000.000 2.000.000	Más de 2.000.000
0	0	0	0	0	0	0 à 1,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50 á 2
1	1	1	1	1	1	1 à 2,50
3,50	3,75	4	4,25	4,50	4,75	5 á 7,25
0	0,25	0,50	0,75	1	1,25	1,50 á 3,75
1,50	1,50	1,50	1,50	1	1,50	1,50 á 3,75
1	1	1	1	1	1	1 á 4
3	3	3	3	3	3	3 á 6
5	5	5	5	5	5	5 à 8
4	4	4	4	4	4	4 à 7
0	0	0	0	0	0	0 á 3

cifras que no llevan signo alguno son las diferencias en más de la

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Voy à contestar à algunas observaciones que ha tenido la bondad de hacerme mi querido amigo y maestro el Sr. Azcárate.

Lo que Proudhon calificò en la forma por mí indicada, es la imposición progresiva general, es decir, el impuesto progresivo como fundamento absoluto de toda la estructura del sistema tributario.

Su señoría se extraña de que yo haya citado las autoridades... (*El Sr. Azcárate*: No es eso, señor Ministro, no me extraña) científicas de que he hecho mención, en apoyo de mi tesis, pero ¿cómo no las había de citar, dada la autoridad universalmente reconocida que tienen?

El Sr. Azcárate insiste en lo que ha sostenido ya varias veces, esto es, en defender los impuestos directos y exponer su opinión contraria à los indirectos. Y yo, à mi vez, ratifico que los impuestos indirectos son el apoyo principal de todas las grandes Haciendas. E invoqué la autoridad de Cohn y Wagner, grandes financieros alemanes, catedrático el primero de Gottinga, y el segundo de Berlín, que defienden y sostienen la justicia, conveniencia y necesidad de la imposición indirecta.

Cohn dice en su obra *Tratado de la Ciencia de la Hacienda* lo siguiente: «La esencia de la imposición sobre el consumo descansa en esto, en que busca la

medida de la capacidad para subvenir á las necesidades *públicas*, en la constitución de las necesidades *privadas* de los contribuyentes.» (*El Sr. Azcárate*: Me parece deplorable.) Pues lo dice Cohn, gran maestro de la Ciencia de la Hacienda.

Y ahora oiga S. S. la opinión de Wagner. (*El señor Garriga*: Ha dicho Bebel, el jefe de los socialistas alemanes.) Perdone S. S., el Sr. Azcárate se refirió á Wagner. (*El Sr. Azcárate*: Esa era idea mía, lo decía yo.— *Varios Sres. Diputados*: Es Bebel.) Parece que ya no es Wagner ni Bebel, es el Sr. Azcárate. (*Risas.*) Lo que dice Wagner en varias obras, entre otras, en una monografía publicada en 1905, bajo el título «De la participación económica de los Ayuntamientos en las instituciones del Estado para la cultura general», es lo siguiente: «Desde hace largo tiempo se reconoce, cada vez con mayor generalidad, que bajo el influjo de doctrinas económicas parciales, de opiniones que eran prejuicios y banderines políticos, se ha ido demasiado lejos en Prusia. Los daños de estos impuestos (los de consumo) desde el punto de vista de su efecto de cargar, en general sobre los consumidores, y en particular sobre las «clases humildes», han sido frecuentemente exagerados, y seguramente excesivamente generalizados, mientras que las ventajas financieras no se han estimado en lo que valían. Mediante una elección exacta, que es muy posible, de los artículos sujetos al impuesto, y mediante una determinación igualmente exacta de la elevación de los tipos de gravamen, desaparecen totalmente ó se debilitan de una manera importantísima las

objecciones y reparos que se derivan del excesivo gravamen de las clases bajas. Estas clases no pueden ordinariamente quedar libres de todo impuesto, lo que además no sería justo, y el gravamen de las mismas por el Estado y por el Municipio se realiza con frecuencia en forma de impuestos indirectos mejor que con los directos, así para los contribuyentes como para el Fisco.»

Ya ve, pues, S. S., Sr. Azcàrate, cómo Wagner no se muestra muy conforme con las opiniones de S. S.

En cuanto á que los bienes muebles que posean en España los extranjeros estén sujetos al pago del impuesto, yo sólo diré á S. S. que hoy no lo están. Podría citar varios casos, en especial el de un banquero amigo de muchos de los Sres. Diputados, que por los valores muebles que poseía en España su padre, de nacionalidad francesa, no hubo de abonar nada en concepto de derechos de transmisión, por manifestarle la Hacienda que no venía obligado á ello.

Y al ser gravados en el dictamen los bienes muebles que los extranjeros posean en España, viene el Fisco á romper con el principio del estatuto personal, que tan funestamente ha inspirado todo nuestro derecho, y que no han tenido en cuenta otras naciones al someter al pago de los tributos allí existentes á los bienes muebles que en ellas poseen los españoles, como sucede en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania.

Su señoría, Sr. Azcàrate, está conforme en que dichos bienes muebles tributen, pero propone que se establezca el principio de la reciprocidad, y en el dictamen se consigna que para que estén exceptuados dichos bie-

nes del pago del tributo es necesario pactarlo en los Tratados. (*El Sr. Azcárate*: ¿Y si no hay Tratados?) ¡Que se hagan!, porque lo que yo quiero es que eso del pago del impuesto no se deje al arbitrio de los Gobiernos. Yo deseo que conste de manera expresa pactado; pues de otro modo, por las exigencias diplomáticas, podrían los Gobiernos eximir del impuesto à los bienes muebles que los extranjeros poseen en España. Y de ahí la razón de que yo sostenga la necesidad de votar el artículo tal como se halla redactado.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Dos palabras nada más, Sr. Azcárate. Insisto en lo dicho. Una cosa es la imposición progresiva general, que ya expliqué antes en qué consiste, y que es la que afecta á toda la estructura del régimen tributario, y otra distinta es el impuesto progresivo especial, ò sea como impuesto singular, y para cuya ejecución hay tres sistemas, susceptible cada uno de ellos de multitud de combinaciones: el impuesto progresivo por escala, que es el que existe en Inglaterra, sobre el conjunto de los bienes relictos, y el que se propone en el proyecto que se discute; el impuesto progresivo por deducción, que es el impuesto inglés, sobre la renta, y el italiano, sobre la riqueza mueble, y el impuesto progresivo por clases, que es el impuesto prusiano y austriaco, sobre la renta.

Y en cuanto á lo del impuesto *progresional*, me ha de permitir S. S. le diga que técnicamente no hay más que dos impuestos: el proporcional y el progresivo. Lo

de *progresional* fué una denominación que lanzó en 1857 à la circulación José Garnier, y que tuvo algunos adeptos en España, pero absolutamente ninguno en Alemania, no obstante ser esta Nación la cuna misma de los impuestos personales progresivos y la Patria de los fundadores y representantes de la moderna escuela financiera. Si *progresional* ha de significar algo, en contraposición à progresivo, es la acentuación de la progresión de las cuotas de imposición, precisamente lo contrario de lo que quería significar Garnier, que era la escala limitada, la supresión de la progresión, y hablando técnicamente, la *horizontal*, ó sea la proporcionalidad.

Insisto en que el impuesto progresivo general es cosa distinta del impuesto progresivo especial, y que no se debe olvidar lo que hicieron los Médicis en Florencia con la «décima scalato», arma de que se valieron para arruinar à sus adversarios y abatir las libertades públicas.

Y por último, Sr. Azcárate, he de recordar á S. S. que, si bien es cierto que hay quien sostiene que el impuesto progresivo sólo cabe en los directos, porque el fundamento de éstos es que varía según la magnitud de la base, y que, por tanto, el Fisco viene obligado à saber, aun cuando no sea más que aproximadamente, la fortuna del ciudadano; también lo es que un gran maestro de la ciencia de la Hacienda, Seligman, sostiene que el principio de la progresión se puede llevar á los impuestos indirectos, bastando para ello gravar más fuertemente lo superfluo que lo necesario.

Creo que no dejo nada sin contestar. Si algo he omitido, Sr. Azcàrate, dígamelo S. S. y tendré mucho gusto en subsanar la omisión.

DISCURSO

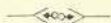
del día 28 de Noviembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
el día 28 de Noviembre de 1910.



*Haciendo el resúmen de la discusión sobre la
totalidad del proyecto de ley de reforma
de la contribución de utilidades.*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): No tema la Cámara que vaya á molestar su atención por mucho tiempo. No me propongo hacer un discurso, y sí únicamente recoger las notas más salientes de este debate.

He de empezar por decir á mi querido amigo particular el Sr. Bergamín que no es exacto que yo haya rectificado, y por tanto abandonado los principios fundamentales que informan los dos proyectos de ley à que se ha referido S. S. en la última sesión ó sean, el del impuesto de derechos reales sobre las sucesiones y el que es objeto del presente debate.

En el primero de dichos proyectos se establecían sobre las sucesiones dos impuestos: uno de carácter pro-

gresivo, llamado de conjunto, sobre el total de la masa relicta; otro de carácter proporcional, sobre la cuota adjudicada à cada uno de los partícipes en la herencia. Pero en vista de que la representación de la minoría conservadora en la Comisión de presupuestos combatió desde el primer momento á sangre y fuego el impuesto de conjunto, y teniendo en cuenta que dicho proyecto, como los demás complementarios del de presupuestos, tienen para su aprobación un plazo fatal que expira el 31 de Diciembre, y como gobernar es transigir, Sr. Bergamín, me resigné, no à abandonar y sí solamente á aplazar el establecimiento de dicho impuesto de conjunto, á condición de llevar la progresión al impuesto de cuota en la forma que establece la escala consignada en el dictamen de la Comisión.

Es decir, Sres. Diputados, que el principio fundamental de dicho proyecto, que no era otro que el de la sustitución del principio de proporcionalidad por el de progresión, subsiste en el dictamen. ¿Dónde está, pues, Sr. Bergamín, esa rectificación, ese abandono de que ayer S. S. acusaba à este Gobierno?

Ademàs, yo debo recordar à S. S. lo ocurrido con motivo de la vigente ley francesa del impuesto sobre las sucesiones. El proyecto se había presentado por el Gobierno estableciendo el impuesto de conjunto. La ley hizo desaparecer dicho impuesto y acentuó la progresión en el gravamen de las cuotas, y á nadie se le ha ocurrido en el Parlamento francés dirigir á aquel Gobierno las censuras que S. S. ha tenido para éste.

Y ahora voy à ocuparme del dictamen que se discu-

te. Las Compañías fabriles anónimas, ó comanditarias por acciones, están por la legislación vigente sometidas al pago, no de la contribución industrial, sino de utilidades; y se da el caso de que un número grande de Sociedades se viene sustrayendo al pago del tributo. No satisfacen contribución industrial porque, como acabo de decir, no están sujetas á ella, y no pagan por utilidades porque éstas, ó no existen en los balances que presentan, ó tienen escasa importancia. Yo podría citar muchos casos, pero me limitaré ahora á decir que la Plaza de Toros de Madrid, que venía pagando por industrial 81.000 pesetas al año, pagò en 1909 por utilidades 360 pesetas.

Pues bien; para evitar todos estos abusos, partí y parto del principio, que no podía abandonar ni abandonaré jamás, de que la Hacienda necesita una cuota fija que tenga el carácter de anticipo y mínimo de pago de la contribución por utilidades, tarifa 3.^a No se me ocultó que la contribución industrial no era el medio más adecuado y eficaz para conseguirlo, ya porque los signos exteriores que constituyen la base en dicha contribución son pésimo instrumento de gravamen para las grandes Empresas que tienen su representación principal en las Sociedades anónimas, ya también porque no existe correspondencia entre la contribución industrial y la de utilidades, toda vez que son, Sr. Bergamín, completa y totalmente distintas, porque si bien es cierto que ambas gravan los rendimientos de la Empresa, los rendimientos probables, la industrial y los efectivos la otra, también lo es que cuando el Estado le dice á un

fabricante «tú tienes en tu fábrica mil husos y por ellos debes pagar tal cuota», no se detiene à preguntarle si el capital con que adquirió aquellos husos es suyo, si es de su exclusiva propiedad ó lo ha pedido prestado; y en cambio, en la de utilidades, se descuentan los intereses del capital prestado, puesto que el gravamen pesa única y exclusivamente sobre las utilidades que el contribuyente obtiene con su propio capital y con su trabajo y dirección como empresario.

Ya veis, pues, Sres. Diputados, que es sustancial, esencialísima, la diferencia que existe entre la contribución industrial y la de utilidades.

Pero como yo me encontré con que el estado de cosas creado por el partido conservador con iniciativas ministeriales, traídas una y otra vez al Parlamento, estaba orientado en ese sentido de la contribución industrial, consigné en mi proyecto la compatibilidad de ambas cuotas, si bien la de industrial había de computarse al hacerse la liquidación por las utilidades, y si la cuota que en este concepto hubiera de pagarse fuese nula, igual ó menor que la satisfecha por industrial, quedaría firme y subsistente el pago de ésta.

Ahora bien; al enterarse del contenido del proyecto, los interesados, esto es, las Sociedades anónimas y comanditarias por acciones, y después de celebrar varias reuniones y una gran asamblea en esta Corte, como es público y notorio, designaron una Comisión para que en representación de todas ellas me hiciera saber sus aspiraciones. Esa Comisión, procediendo con una corrección exquisita, digna de todo encomio y ha-

ciéndose cargo de la realidad, me manifestó que dichas Sociedades no regateaban el nuevo sacrificio que por la fuerza de las circunstancias se les exigía, pero que deseaban que se realizara sin vejaciones innecesarias; que al establecerse la compatibilidad de las cuotas de industrial y utilidades, se les imponía la molestia de una doble inspección é investigación, y que, para evitarla, proponían pagar una cuota fija con el carácter de anticipo y mínimo de pago de la contribución sobre utilidades de 3 por 1.000 de su capital las Sociedades de fabricación, y de 6 por 1.000 las demás, y claro es, Sres. Diputados, que como esta propuesta estaba dentro del principio mantenido en mi proyecto, no tuve el menor inconveniente en aceptarla. ¿Dónde está, pues, Sr. Bergamín, la rectificación que según S. S. se ha hecho del principio que informa el proyecto por mí presentado? (*Muy bien*).

Para evitar dudas é interpretaciones se consigna en el mismo dictamen lo que ha de computarse como capital que servirá para medir la cuota al 3 y 6 por 1.000; pues en el art. 3.º se dice que dicho capital lo formarán las siguientes partidas: la cantidad desembolsada à cuenta del valor de las acciones, y tratándose de Sociedades comanditarias, además, el valor de las aportaciones de los socios colectivos de las mismas, teniendo en cuenta en su caso las reducciones del capital social legalmente acordadas; el importe de las reservas, y por último el importe de las amortizaciones extraordinarias, excepto aquellas que responden à depreciaciones ò pérdidas, asimismo extraordinarias, de los elementos

del capital de la Sociedad, y que tendrán la consideración de amortizaciones extraordinarias, tratándose de las Sociedades de fabricación, todas las amortizaciones en cuanto excedan de las cantidades concedidas por la ley, que, como sabéis, Sres. Diputados, son el 15 por 100 para el material industrial de las de fabricación, y el 5 por 100 para las demás, según así se determina en la regla 3.^a del art. 50 del Reglamento de utilidades de 18 de Septiembre de 1906, y en el Real decreto de 8 de Abril de 1908.

La determinación del capital de una Compañía mercantil puede dar siempre dos cantidades distintas: una, la que representa la masa social responsable de las obligaciones sociales, y otra, la que representa los valores efectivamente aplicados en cada momento al fin social. La cuota al 3 y 6 por 1.000 del capital tiene, como ya dije, el carácter de anticipo y mínimo de la de utilidades, y éstas, en cuanto dependen del capital, están relacionadas con la masa del mismo, aplicada al negocio; es decir, que lo que interesa determinar es la segunda de las magnitudes dichas.

El capital aplicado al negocio de una Compañía está representado por dos factores: las aportaciones de los socios, y los beneficios acumulados. El primero es evidentemente el capital desembolsado sobre las acciones en las Compañías anónimas, y la suma de las aportaciones de los socios colectivos, más la comandita, representada por acciones en las Compañías comanditarias. Puede ocurrir, sin embargo, que, por una reducción del capital social, sea éste menor que la cantidad primi-

tivamente desembolsada ó aportada. Esta reducción, para que surta efectos legales, es preciso que esté acordada en la forma y con los requisitos que determina el art. 168 del Código de Comercio y que se inscriba en el Registro mercantil; porque de otro modo, y según disponen los artículos 24 y 25 de dicho Cuerpo legal, la reducción no surtirá efectos para tercero más que en lo favorable. Esta es la explicación de la primera partida que aparece en el art. 3.º del dictamen para la computación del capital.

Los beneficios acumulados pueden estar representados por las reservas y por las amortizaciones extraordinarias. En cuanto á las primeras, no hay necesidad de explicación alguna; son fondos acumulados de los beneficios sociales que aumentan prácticamente el capital de las Compañías.

Más complicada es la cuestión de las amortizaciones por su variedad grande. Los principales casos son los siguientes:

1.º *Amortización de las propias acciones.*—Es evidente que, salvo una reducción del capital social de que ya he hablado, esa amortización debe computarse, según así se desprende del art. 166 del Código de Comercio.

2.º *Amortización de obligaciones.*—La computación de estas amortizaciones es indispensable, toda vez que ellas aumentan el capital efectivo en la misma proporción en que disminuyen las obligaciones; y

3.º *Amortización del valor de los elementos productivos del negocio.*—Los elementos de producción

están sujetos à deterioro, depreciaciones y pérdidas que necesariamente han de amortizarse; esas son las amortizaciones ordinarias, que no se computan porque á ellas corresponde una disminución efectiva de los elementos que integran el capital. Pero cuando la amortización excede de la cantidad determinada por la ley, puede ocultar el importe efectivo del capital, lo cual se demuestra en este ejemplo: una Compañía minero-metalúrgica tiene 10 millones de capital-acciones y reservas á que corresponde en el activo del balance: minas, un millón de pesetas, fábricas y talleres, siete millones; productos en almacén, un millón; cuentas deudoras, 900.000 pesetas; caja, 100.000; total, 10 millones de pesetas. Dicha Compañía destina de los beneficios un millón de pesetas à la amortización de la mina que sigue existiendo y produciendo, y el capital aparecerá entonces como la suma de las demás partidas, esto es, menor en un millón, si no se computa la amortización de la referida mina.

Esta clase de amortizaciones es de toda evidencia que debe computarse, pues hasta formalmente se las puede hacer pasar del activo al pasivo, à sumar con el capital, acciones y las reservas, sin alterar la cuenta de «Beneficios».

Y ya que de esto me ocupo, he de decir al Sr. Bertràn y Musitu que el caso à que aludía S. S. en su discurso de la última sesión no se refiere à amortización de capital, y sí à una conversión, à una sustitución de deuda, por lo cual es claro que no podría computarse, así como tampoco debe hacerse con las amortizaciones pro-

cedentes de pérdidas; por ejemplo, una Sociedad tiene una fábrica; ésta es destruída por el fuego, y la amortiza; es indiscutible que tal amortización no puede computarse en el capital.

En el proyecto à que se refiere el dictamen que se discute se proponía también que las Sociedades regulares colectivas, las comanditarias simples y, en general, todas las que persiguieran un fin lucrativo, y que hoy están sometidas al pago de la contribución industrial, pasaran à contribuir por utilidades. ¿Quién duda que esto es lo que debe ser?; y digo más: que á la contribución de utilidades hay que someter à todos, no ya à esas Sociedades, sino à los mismos particulares.

Estoy seguro, Sr. Marqués de Cortina, que la contribución de utilidades dará grandes resultados cuando la Administración cuente con todos los resortes y elementos necesarios, con el suficiente personal idóneo y con estadísticas del tributo y cuando el contribuyente tenga mayor cultura, y entonces se llegará seguramente á exigir las cuotas de dicha contribución al tipo máximo de 6 por 100. (*Muy bien.*)

Pero no se puede desconocer que á las Sociedades regulares colectivas no se las puede llevar á tributar por utilidades sin preparación y contra su voluntad, puesto que muchísimas de ellas, por su escasa importancia, no llevan contabilidad, y la inspección é investigación serían completamente ineficaces.

Por estas consideraciones, cuando los interesados tuvieron la bondad de visitarme y me manifestaron unánimemente que preferían que se les elevara la cuota in-

dustrial en dos décimas, á pagar por utilidades, no tuve inconveniente alguno en aceptarlo.

En cuanto á la rebaja de cinco centésimas, de que habla el art. 1.º del dictamen, responde al pensamiento de igualar tipos de tributación que deben ser idénticos, y que hoy se hallan enormemente distanciados entre sí. Las Compañías comanditarias simples y las regulares colectivas tributan al 5 por 100 próximamente; ese es, en efecto, el tipo que sirve para determinar las cuotas de la tarifa 3.^a de la contribución industrial y de comercio, y aunque en la práctica el tipo queda algo por bajo de su importe nominal, puede admitirse que las dos décimas que actualmente recargan las cuotas y el premio de cobranza, producen una compensación efectiva. Las Compañías comanditarias por acciones y las anónimas que ejercen las mismas industrias de la tarifa 3.^a de la contribución industrial, tributan al 6 por 100 más la décima; en suma, el 6,60 por 100. Yo rebajo media décima y quedan al 6,30, y como de otra parte recargo en dos décimas la cuota de industrial, quedarán en adelante prácticamente igualadas todas las Empresas fabriles, cualquiera que sea su forma, á poco más del 6 por 100.

El apartado *B* del mismo número de la tarifa de utilidades, á que también alcanza la rebaja de las cinco centésimas, comprende las Compañías de tranvías, cuyo tipo de tributación resulta de 13,20; las Compañías de ferrocarriles tributan á tipo mucho menor, y, en buen número de casos, la diferencia en el terreno económico no justifica tal diversidad. Yo reduzco ahora lo que pue-

do, media décima, y estoy dispuesto à rebajar màs en cuanto no comprometa con la rebaja el interés de la Hacienda. (*Muy bien, muy bien.*)

Y respecto á lo que el Sr. Bergamín manifestó acerca de las Sociedades extranjeras, yo sólo diré que el artículo està redactado en la única forma en que se podía redactar, y que no alcanzo cuáles puedan ser las reglas que han de servir de base para la fijación del capital que dichas Sociedades dediquen á sus negocios en España.

El Sr. Bergamín parecía preocuparse de las posibles injusticias á que podía dar lugar el gravamen de las sucursales de Sociedades extranjeras por todo el capital social. Esa preocupación no es enteramente infundada; pero no debe tampoco exagerarse; no se olvide lo que aconteció á nuestro primer Instituto de crédito con ocasión del intento de establecer una sucursal en París, caso recordado aquí por el Sr. Marqués de Cortina. Ni podemos perder de vista la dirección firme y resuelta de la Administración del *income-tax* inglés de ir extendiendo el tributo á las Compañías extranjeras por todos sus beneficios.

El Sr. Bergamín se lamentaba de que no se hubiera traído al dictamen la fórmula consignada en el art. 10 del proyecto de ley de 30 de Abril de 1908.

Esa fórmula, Sr. Bergamín, ni por su pensamiento, ni por su forma, ni por la construcción de la escala regresiva que contiene, puede ser aceptada, como voy à demostrar.

El indicado art. 10, dice así: «Las agencias ò sucur-

sales de las Sociedades extranjeras establecidas en España ò que se establezcan en lo sucesivo y que se dediquen al comercio ò á la industria, satisfarán una cuota fija proporcional al capital total social de la Sociedad, con sujeción á la siguiente escala:

CAPITAL	Madrid y Barcelona	Capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes	Pueblos
De 100 000.000. á más....	100.000	50.000	25.000
De 75 á menos de 100....	80.000	40.000	20.000
De 50 á menos de 75.....	60.000	30.000	15.000
De 25 á menos de 50.....	40.000	20.000	10.000
De 5 á menos de 25.....	20.000	10.000	5.000
De 1 á menos de 5.....	10.000	5.000	2.500
De menos de 1.....	5.000	2.500	1.250

«Liquidado el impuesto de utilidades que les corresponde satisfacer por el beneficio líquido que resulte de los balances ò declaraciones juradas, pagarán tan sólo lo que excediere de dicha cuota.»

La dificultad primera que se ofrece es la de saber si las cuotas son una por sucursal ó una por Sociedad. El artículo no lo dice. Sin embargo, la interpretación única admisible es la de una cuota por sucursal, porque á ese principio responde la construcción regresiva de la tarifa.

Los gravámenes, calculados por las cuotas de Madrid y Barcelona, se mueven entre un mínimo de 0,8 y un máximo de 10,0 por 1.000, y no hay más que leer dicha tarifa para ver que, à medida que es mayor el capital, la patente es proporcionalmente màs pequeña. ¿Por qué? Porque se supone que, à mayor capital, mayor número de sucursales; así, lo mismo si se trata del comercio al por menor de artículos de consumo que si se trata de material ferroviario.

Y en cuanto à la construcción de la escala sólo diré que entre el mínimo y el máximo de gravamen hay en la mayor parte de los grados de la escala diferencias de 400, y más de 400 por 100 en los tipos de gravamen.

Y, por último, en algunos casos, el gravamen es ¡del 41 por 100!

El Sr. Iglesias (D. Dalmacio) censuró en su discurso de la otra tarde el que la capitalización de fincas rústicas se hiciera al 5 por 100, fundándose en que dichas fincas no producen màs que el 3. Olvidaba el Sr. Iglesias que aquí de lo que se trata es única y exclusivamente de fijar la relación media entre el valor de renta y venta en los registros fiscales, ò, como hoy se dice, en el Avance catastral, à que el dictamen se refiere expresamente.

Estoy bien seguro que S. S. no habría dicho lo que ha dicho, si hubiera en aquel momento tenido en cuenta que las Instrucciones de 23 de Octubre de 1901 dicen que la renta se deducirá del valor cuando no conste expresamente, tomando como tipo medio esa misma vigésima parte de aquel valor, que ahora sirve

de base en el dictamen para restablecer el capital.

También censuraba S. S. el impuesto del 3 y del 6 por 1.000, por entender que ese impuesto era sobre el capital. Pero, Sr. Iglesias, ¿no sabe S. S. que los impuestos se dividen en *nominales* y *reales*? ¿Que los nominales son los que tienen base y fuente distintas, y los reales los que las tienen idénticas? El impuesto de que se trata es un impuesto *nominal*: la base por que se mide es el capital, y la fuente de donde se paga, la renta.

Y voy ahora á honrarme recogiendo las principales indicaciones hechas en su discurso por mi querido amigo y correligionario el Sr. Marqués de Cortina. Contestaré sólo á las de índole general, pues las demás las examinaremos y serán discutidas cuando llegue el momento oportuno, que será al ponerse á debate el dictamen relativo á ingresos; pero no por ello he de dejar de expresar ante todo al Sr. Gómez Acebo la gratitud inmensa que las benévolas frases y los lisonjeros juicios de S. S. despiertan en mi espíritu. Su señoría ha estado injusto en el elogio de mi persona, porque yo no he hecho absolutamente nada que merezca elogios de nadie. Yo llegué al Ministerio de Hacienda y no me propuse otra cosa que cumplir con mi deber; no he hecho más que estudiar, que poner al servicio de mi país lo poco que sé y mi grandísima voluntad para servirle. De manera que ni he hecho nada que merezca gratitud, ni aun habiéndolo hecho podría derivarse de ello la gratitud del país, ya que sólo se trataba del cumplimiento de mi deber. No obstante, le agradezco mucho á S. S.

la bondad y la benevolencia que conmigo ha tenido.

No tengo por qué ocultar que estoy conforme con muchísimas de las cosas que ha dicho S. S. Lo que hay, Sr. Gómez Acebo, es que precisa que asentemos la planta en el terreno de la realidad, en el terreno de los hechos. Por lo demás, ¿quién duda que muchas de las afirmaciones que ha hecho S. S. han merecido casi la unanimidad de asentimiento del Parlamento.

Y á propósito de esto, S. S. nos citaba aquí el caso de Inglaterra y de otros países respecto de las herencias, respecto de los capitales; ¿no es esto? Yo ya en otra ocasión, discutiendo sobre otro proyecto de ley, decía que era necesario, cuando se discutían estas cosas, que tuviésemos en cuenta la realidad, que no olvidásemos que nosotros somos españoles y estamos en España, y que la estratificación social de España no es la inglesa, porque en Inglaterra hay muchísimos archimillonarios, muchos millonarios y una gran clase media; y en cambio aquí hay unas cuantas grandes fortunas, muy escaso número de buenas fortunas, una clase media, muy reducida, y, en cambio, una masa enorme de proletarios. De suerte que por no tener en cuenta esto, se echa de menos la justificación de esas diferencias que con tanta elocuencia exponía S. S. á la consideración del Parlamento.

En un punto estamos completa y totalmente distanciados; en la cuestión del superávit. Yo, Sr. Gómez Acebo, lo he declarado no una, sino tantas cuantas veces he tenido ocasión para ello; yo sostengo que es ne-

cesario á toda costa, por encima de todo, mantener, no sòlo la nivelación, sino los sobrantes en los presupuestos. Porque yo estimo que sin eso no se podrá llegar á la consolidación del crédito, porque creo que sin eso no podrá entrar España en la corriente del crédito europeo; será, en una palabra, un pueblo moderno.

Decía el Sr. Gòmez Acebo: «¿Qué importa que pasen dos ò tres años con déficit?» ¡Ah, Sr. Gòmez Acebo, importa! Eso—decía yo en una interrupción—es peligroso, porque sin querer nos puede volver á aquellos tiempos anteriores á 1900, á aquellos tiempos en que de cincuenta presupuestos sòlo cuatro se liquidaron con superávit, y con superávit, pequeño; y en cambio, los cuarenta y seis restantes, con déficit, cuyo promedio fué, durante aquellos cincuenta años, de 79 millones anuales.

Eso me espanta, eso me produce una impresión extraordinaria, y por eso yo trabajo con ahinco, trabajo con fe, con la mira puesta siempre en el superávit, por evitar el déficit; y no me contento con la mera nivelación, sino que quiero superávit. Si es mucho, si es grande, mejor; si no puede ser grande, me contentaré con uno modesto.

El Sr. Gòmez Acebo hacía cuentas para demostrar que yo no necesito apretar tanto al contribuyente. ¿Por qué? Porque, decía, y repito, mi gratitud por los elogios inmerecidos que con motivo de esto ha tenido la bondad de dirigirme S. S., gracias á la acción de S. S. se aumentó la recaudación en lo que llevamos de año en 30 millones con relación al anterior.

Es verdad; pero no confundamos los factores, no involucremos esto con el presupuesto de 1911.

- Los Sres. Diputados recordarán, porque yo tuve especial cuidado de hacerlo constar así tantas cuantas veces se me ha presentado la oportunidad, que el partido liberal, cuando vino al Poder, se encontró con que estaba rigiendo por autorización el presupuesto de 1909, el cual se había liquidado con 33.360.000 pesetas de déficit, no por culpa ciertamente de la gestión del partido conservador, sino por culpa de sucesos que ni pudo preverlos ni evitarlos: por la guerra de Melilla, que costó unos 54 millones de pesetas; y siendo el déficit de 35.360.000 pesetas, es claro que de no hacerse tal gasto el superávit hubiera sido mayor de 18 millones de pesetas.

Peró, en fin, el hecho, sea por lo que quiera, el hecho doloroso, el hecho triste para el crédito de España es que el presupuesto de 1909 se ha liquidado con déficit, lo que no quería yo que volviera á ocurrir en 1910, por lo que antes indicaba á S. S.; porque estimaba que eso era peligroso, peligrosísimo para el porvenir, y por ello me presenté á la Cámara y con toda sinceridad, como debe hablarse siempre, sin ocultar nada, con la cabeza levantada, dije al Parlamento: con cargo al presupuesto de 1910 hay que pagar 12 millones de pesetas contraídos y no pagados en 1909 con motivo de la guerra; con cargo al presupuesto de 1910 hay que abonar otros 7.500.000 pesetas como consecuencia de las leyes de reforma de Correos y Telégrafos y Comunicaciones marítimas votadas en 1908; hay asimismo

que satisfacer lo que significa el aumento del contingente de 85.000 à 115.000 hombres; aumento que fué preciso, absolutamente necesario, que se hizo imprescindible, no sólo por los sucesos de Melilla, sino porque era y es necesario que nuestro ejército tenga las unidades orgánicas precisas, y que todas ellas estén debidamente nutridas para que sea una verdad y resulte eficaz la instrucción militar. Había, además, en el presupuesto de 1910 que pagar los gastos ocasionados con motivo de la nueva organización que fué preciso dar á nuestro ejército en Melilla y á la policía indígena, para asegurar, no sólo los territorios ocupados, sino también nuestras propias posesiones, hasta tanto que un acuerdo con el Majzen suministrara las garantías adecuadas; era preciso asimismo satisfacer con cargo á 1910 los gastos derivados de la compra del material de campaña, de la reconstrucción del antiguo, de las fortificaciones, etc., etc.; y, en fin, había que abonar con cargo al repetido presupuesto en ejercicio, 17.978.000 pesetas, por no ser suficiente el crédito de 17.972.000 consignado en el presupuesto de 1909, para el cumplimiento de la ley de 1908, relativa á construcciones navales, civiles é hidráulicas.

Es decir, que los gastos militares y los de estas construcciones venían á formar un total de unos 81 millones. Y yo decía: ¿es procedimiento financiero de sinceridad el que estos 81 millones que proceden y derivan de gastos de carácter extraordinario, de guerra y de construcciones navales y civiles, vayan á pesar sobre el presupuesto ordinario de 1910, rompiendo el equili-

brio entre los ingresos y los gastos, y haciendo aparecer el déficit en proporciones mucho más alarmantes y graves que las del año 1899?

Eso á mi juicio produciría graves perturbaciones, haría despertar en todos, nacionales y extranjeros, la duda, la sospecha de que rectificábamos la conducta seguida desde 1900 acá y volvíamos á sistemas anteriores á esa fecha, en que empezó la reconstitución de nuestra Hacienda.

Y pedí al Parlamento que autorizara la emisión de obligaciones del Tesoro por 81 millones de pesetas, como en efecto lo hizo; pero yo, Sres. Diputados, no he necesitado negociar de esa suma más que 45 millones, y me esfuerzo por recaudar lo más posible en este año, para ver si libro al país de los nuevos gravámenes que necesariamente determinaría la negociación del resto de aquellas obligaciones, con la carga de intereses de bastante importancia. Van recaudados 30 millones más que el año anterior, y si tenemos la fortuna de obtener en el mes de Diciembre más aumento todavía, se aplicará todo ello, Sr. Marqués de Cortina, á liquidar el presupuesto de 1910.

No hablemos de la cantidad mayor y menor que vaya á producir el proyecto de derechos reales, porque esto lo discutiremos cuando se trate de los ingresos; pero sí he de decir á la Cámara, y con esto termino, que me importa recordar que el Sr. Presidente del Consejo, no una, sino repetidas veces, siempre, ha declarado que él y que este Gobierno, sobre todo él, que claro es que puede continuar con otros Minis-

tros que no sean los actuales, es incompatible con el déficit; y esto que el Sr. Presidente del Consejo ha dicho constantemente, está en contradicción con lo que S. S. le atribuye; y yo, como él, sostengo la absoluta necesidad de asegurar por todos los medios, y cueste lo que cueste, la nivelación. Es claro que al país toca hacer el sacrificio; pero crea el Sr. Marqués de Cortina que entre el esfuerzo que de la Nación se solicita para que no haya déficit, y las ventajas enormes que para ella representa la consolidación del crédito, yo estimo que la elección no es dudosa. (*Muy bien.*)

DISCURSO

del día 1.º de Diciembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 1.º de Diciembre de 1910.



Resumiendo el debate

*de totalidad sobre el dictamen referente al proyecto
de ley de reforma del impuesto de transportes,*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): ¡Qué situación tan crítica, tan difícil y tan triste es la del Ministro de Hacienda! De un lado, requerimientos imperativos del deber, de la necesidad de velar por la nivelación del presupuesto; de otra parte, reclamaciones de una porción de intereses que se creen lesionados injustamente. Yo quisiera que la Cámara se hiciese cargo de la situación del Ministro de Hacienda.

No es que el Ministro de Hacienda tenga un empeño de amor propio gusto y complacencia de estrujar al contribuyente como decía la otra tarde el Sr. Marqués de Cortina, no; el Ministro de Hacienda se encuentra

frente á un problema que necesariamente ha de resolver. Todos os levantáis, Sres Diputados, á defender los intereses de vuestras respectivas comarcas; todos reclamáis contra las reformas del Ministro de Hacienda; llegais algunos á decir que no os importaría que á condición de que se atendieran vuestras peticiones se liquidara el presupuesto con déficit. Pero ¡qué pronto pasarían estas impresiones!; cuando transcurrido el año viérais que el déficit era una realidad, ¿qué no diríais, y con razón, del Ministro de Hacienda?

Yo os lo confieso con toda sinceridad; nadie siente más que yo el tener que recurrir á los medios que la imperiosa necesidad me ha obligado á emplear. Yo quisiera poder complacer á todos, poder atender todas las reclamaciones; pero me hallo constreñido por la necesidad absoluta de mantener la nivelación del presupuesto; y para mantenerla, estoy dispuesto á todo, absolutamente á todo; sino lo consigo, no será por falta de voluntad ni porque haya dejado de hacer cuanto á mi alcance estaba.

Y dicho esto, vamos á concretarnos á la materia objeto de este debate: impuesto de transportes.

He dicho en otra ocasión que la prodigalidad en las exenciones de tributos es perjudicial; lo es por varias razones; porque merma los ingresos del Tesoro; porque desnaturaliza el impuesto; porque lo desacredita. Ese descrédito nace de que no hay nadie que pueda creer en la justicia de un impuesto del que se exime á una gran masa de ciudadanos. Y es un hecho de evidencia notoria, que las leyes de 1904 y de 1907 han estable-

cido un sin número de exenciones, ya absolutas, ya relativas en el impuesto de transportes.

No es que yo censure la obra de aquel Ministro, al contrario, creo que hizo bien, yo, en su caso hubiera hecho lo mismo. Pero es que las circunstancias por que atravesaba la Hacienda en aquellos momentos no son las circunstancias presentes. Por otra parte, no hay que relegar al olvido sobre todo por lo que se refiere à los transportes marítimos que en algunas de las disposiciones que establecieron esas exenciones se dijo que estas serían transitorias, lo cual revela claramente que el Gobierno se proponía estudiar la forma, el sistema, el medio más adecuado y eficaz de conseguir el fomento de la exportación y del tráfico directo.

Después las Cámaras votaron, el Rey sancionó y la *Gaceta* publicó la ley de Comunicaciones marítimas. En esa ley se conceden primas de construcción, primas y subvenciones de navegación, se suprime el impuesto de transportes en la descarga de mercancías en cierto tráfico, se rebajan los derechos sanitarios, se disminuyen los derechos obvencionales de los cónsules, y se otorgan, en fin, otra porción de concesiones y de beneficios à la navegación. Y yo creo que es un principio al que no se puede faltar, el de la justicia distributiva del impuesto, y este principio se opone à que la navegación continúe disfrutando de este doble trato de favor que hoy tiene.

Dicho esto, vuelvo à lo que antes indicaba de que el Sr. Osma, cuando estableció, por las leyes de 1904 y de 1907, las exenciones en el impuesto de transpor-

tes, hizo muy bien, procedió con el criterio de un buen Ministro de Hacienda. Porque yo reconozco que todo lo que sea evitar las dificultades del transporte, que todo lo que sea aliviar de gravámenes, favorece la producción y el consumo, Hizo bien el Sr. Osma porque las circunstancias en que se encontraba el Tesoro no eran las actuales.

Entonces los presupuestos se liquidaban con importantes sobrantes, era natural que el Sr. Osma se preocupara, en primer término, de lo que se refiere à los transportes, pero hoy la situación de la Hacienda es muy distinta, hoy necesita acudir al contribuyente y exigirle un nuevo sacrificio à fin de mantener la nivelación de el próximo presupuesto.

Y al pedirle sacrificios al contribuyente, yo tuve que llamar también à las puertas del impuesto de transportes, con tanta más razón, cuanto que este impuesto llegó à rendir 23 millones de pesetas sin que jamás haya habido ni controversias ni reclamaciones, ni expedientes. Y esto, Sres. Diputados, era muy natural, porque cuando se adeuda por toneladas, ya lo comprenderéis, el gravamen es muy llevadero, poco duro, ligero, poco sensible; en realidad, viene à tener las apariencias de mero derecho de estadística.

Màs aún: dentro de la necesidad imprescindible de acudir à este recurso, no restablezco íntegramente todos los gravámenes, puesto que continúan las exenciones de las leyes de 5 de Abril y 6 de Diciembre de 1904 que suprimieron el impuesto en el comercio de cabotaje à los carbones minerales y cok, à los trigos y demás

cereales y sus harinas, ganados, patatas, garbanzos y legumbres secas, carbones vegetales, leñas y abonos, conservo estas excepciones para favorecer el tráfico de abastecimiento de las poblaciones de nuestro litoral.

Aparte de esto, aún no se restablecen íntegramente las tarifas para los aceites, vinos, cereales y frutas que se exportan tanto á Europa como á los pueblos de América. El impuesto que en la ley de 1900 era de 5, 2,50 y 2 pesetas respectivamente, quedará reducido á 1 peseta.

Ahora bien; es necesario que nos hagamos cargo de la realidad; es preciso que el país sepa la significación efectiva de ese gravamen, porque después de oír el discurso elocuente del Sr. Santa Cruz, se podría creer se trata de una carga insoportable. ¿Y sabéis cuanto importa? Cero diez por hectólitro de vino, ó quintal métrico de aceites ó de frutas. Los barriles de uvas, que generalmente pesan 25 kilogramos se gravarán con dos y medio céntimos, las cajas de naranjas, que por término medio pesan 85 kilogramos, con 8 céntimos.

Ahora la Cámara juzgará si este tipo de gravamen es ò no llevadero, si puede perjudicar la exportación de esos productos en la forma que ha indicado el Sr. Santa Cruz (*Muy bien muy bien.*) Yo, que desde el fondo de mi alma aplaudo al Sr. Santa Cruz por el entusiasmo con que defendió los legítimos intereses del país que le vió nacer, no puedo menos de rogar al propio tiempo á los Sres. Diputados que no se dejen arrastrar por la elocuencia imponderable del Sr. Santa Cruz, que vean la cuestión que se debate á través del prisma ilu-

sorio y siempre engañoso de los apasionamientos, sinó que por el contrario procuren examinarla á través del prisma acromatizado de la razón y de la realidad.

Y voy ahora á tratar de los kilométricos señor Gómez Acebo.

Yo agradezco á S. S. con toda mi alma, como á todos los Sres. Diputados á quienes se les ocurran soluciones prácticas que proporcionen recursos al Tesoro, las indicaciones que ha tenido la bondad de hacer. Pero no exageremos, Sr. Gómez Acebo; pongamos las cosas en su punto.

Más antes he de referirme á otra indicación hecha por el Sr. Espada. Parecía desprenderse del discurso de S. S. que la elevación del gravamen de los billetes por kilómetros perjudicará el tráfico á distancia. No, no está en lo cierto S. S.

¿Cual es la base, Sr. Espada, para pedir el impuesto de que se trata? El precio del billete kilométrico como del ordinario. Pues bien; en un mismo viaje por la misma línea, en el mismo tren y en el mismo coche, con kilométrico y con billete ordinario, el titular del kilométrico paga la mitad del impuesto de transporte que el portador del billete ordinario (*El Sr. Marqués de Cortina*: ¡Naturalmente!) Así por ejemplo, el Sr. Gómez Acebo y yo hacemos un viaje á Barcelona S. S. lleva un kilométrico y yo un billete ordinario; S. S. paga por su kilométrico por impuesto de transporte 10 pesetas, y yo por el mío 20 próximamente.

¿Por qué he rectificado lo que consigné en el proyecto respecto al recargo sobre los kilométricos de

primera y segunda clase, y respecto la exención de él á los de tercera á diferencia de lo que se propone en el dictamen? Este cambio se funda en la consideración de los efectos conexos dentro de la economía nacional.

A las compañías de ferrocarriles que tienen material moderno de tercera clase, ¿no es verdad que al no imponer el gravamen á los kilométricos de tercera clase se les coloca en unas condiciones de desigualdad extraordinaria, á que no hay derecho? Eso equivaldría á cruzar las relaciones de medición de sus tarifas, si se estableciera el gravamen para los billetes de primera y segunda clase y no para los de tercera, se rompería la relación de los precios de los de esta clase y de los de (*El Sr. Marqués de Cortina*: Yo no le he censurado á S. S. por eso.)

Cierto; pero contesto al Sr. Espada, que se extrañaba de que en el proyecto no se extendiera á los billetes de tercera el gravamen, y en el dictamen sí. Voy ahora á contestarle á S. S. ¿Es ó no cierto Sr. Gómez Acebo, que el billete ordinario de tercera clase paga por impuesto de transporte el 25 por 100? ¿Y le parece bien á S. S. que el pobre obrero que, en busca, de trabajo va de un punto á otro, y necesita comprar un billete de tercera pague el 25 por 100 de impuesto (*El Sr. Marqués de Cortina*: ¡que me ha de parecer bien!) Está bien; pero no ha dicho S. S. nada contra ello. Pues mientras ese obrero paga el 25 por 100, el rico por su kilométrico de primera, clase para viajar y para divertirse, paga sólo el 10 por 100.

Esto es evidentemente injusto. *El Sr. Marqués de*

Cortina: ¿Y si el obrero trae familia?) ¿Dejará, Sr. Gómez Acebo, de resultar una enorme injusticia? El hecho notorio es que el billete de tercera clase ordinario paga 25 por 100, y el kilométrico de primera 10, y esto, repito, no es justo.

Creo, además, que S. S. está equivocado, y que no por eso se venderá menor número de billetes kilométricos (*El Sr. Marqués de Cortina*: No los habrá,) ¡Ya lo veremos! Pero comprenda S. S. que cuando he traído este proyecto, es por que lo he estudiado y he tenido á la vista los datos; y claro es que debo dar mayor autoridad á esos y perdóneme S. S., que á las suposiciones de S. S.

Tiene razón el Sr. Gómez Acebo; según los cálculos, eso significa 2 millones de pesetas; y yo pregunto, Sres. Diputados: si por un lado rebajo del proyecto 2 millones de pesetas; si por otro prescindo del millón y pico que representa la concesión hecha á la exportación de los aceites, vinos y frutas, y al mantenimiento de las exenciones del cabotaje. ¿á que queda reducido el proyecto?, qué recursos voy á obtener? Yo pido á la Cámara que tenga esto en cuenta; que reflexione, que tenga siempre por norma y criterio la casi seguridad de que si se siguen regateando los ingresos, el presupuesto se liquidará con déficit. (*Muy bien.*)

PRINCIPALES MANIFESTACIONES

del día 2 de Diciembre de 1910.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES
hechas en el Congreso por el
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
el día 2 de Diciembre de 1910.

*Con motivo de la discusión del
articulado del proyecto de ley, de reforma del
impuesto de transportes.*

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Antes de contestar concretamente á la pregunta que ha tenido la bondad de dirigirme el Sr. Marqués de Cortina, me importa, para justificar una vez más cuanto en la tarde de ayer he tenido el honor de exponer à la Cámara, leer los siguientes datos para que los señores Diputados juzguen.

«Mientras los valores de los billetes suben rápidamente de 77,4 millones en 1903 à 82,3 en 1905 y 84,3 en 1906, el impuesto ha bajado de 13,7 millones en 1903 à 12,9 en 1907, y à 13 escasos en 1906. Es decir, que sin alterar los tipos de gravamen, el importe medio del impuesto respectivo del valor del billete ha ba-

jado desde 17,6 por 100 en 1903, á 15,7 en 1905 y á 15,3 escasos en 1906. Como se ve, el año de 1904 es de crisis para el impuesto, ¿porqué? por la implantación de billetes kilométricos. En 1903 se liquidaron por la cuota general próximamente 77,3 % total del valor de los billetes, y sólo 22,4 por la tarifa de excepción; en 1905 los billetes de excepción habían subido á 42 $\frac{2}{3}$ por 100 los del tipo general habían bajado á 57 $\frac{1}{2}$ por 100, y el descenso continúa, amenazando gravemente los rendimientos del impuesto.»

Por lo que veis, Sres. Diputados, lo que resulta de estos datos, es que lo que perjudica muy notablemente al rendimiento del impuesto de transportes son los billetes kilométricos.

Y dicho esto, y como yo lo único que quiero es que las concesiones que se hagan no lleven aparejado el peligro de la desnivelación del presupuesto, no tengo el menor inconveniente en aceptar la segunda propuesta del Sr. Marqués de Cortina, esto es, que los billetes kilométricos y circulares se graven con el 15 por 100 en vez del 25 que se establece en el dictamen, y que se autorice al Gobierno para que en el caso de que de la liquidación del primer trimestre del ejercicio económico no resulte recaudada la cantidad proporcional á la que se calcula como ingreso por este tributo, eleve dicho impuesto de 15 por 100 hasta el 25.

¿Es esto? Pues queda aceptado. Ya veis, Sres. Diputados, que yo no estrujo al contribuyente por el solo placer de hacerlo, como decía el Sr. Gómez Acebo.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA: (Cobián): Nada más que para hacerme cargo de la última indicación del Sr. Marqués de Cortina, la cual justifica que esos billetes son de lujo, que el impuesto sobre ellos debe elevarse al 25 por 100. (*El Señor Marqués de Cortina: No.*)

Además no hay que perder de vista que más del 50 por 100 de los billetes kilométricos que se expenden son de primera (*El Sr. Marqués de Cortina: Los pordioseros de levita.*) Serán los pordioseros de levita; pero crea S. S. que ese es un dato muy elocuente.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Al empezar ayer mi discurso, tuve el honor de afirmar que estaba plenamente convencido de que todo lo que sea atenuar las dificultades para el tráfico y rebajar los gravámenes es conveniente para el desarrollo de la producción, del tráfico y del consumo.

Quise dar à entender con ello que este proyecto es de los que no tienen otro fundamento que la ley de la necesidad fiscal, y lo he dicho sinceramente, sin ambages ni rodeos. El impuesto de transportes, en el cual hizo el Sr. Osma reducciones grandes, por los años 1904 y 1907..... (*El Sr. Osma: El Sr. Osma, no; las Cortes con el Rey.*)

Es natural, Sr. Osma; pero ya sabe S. S. que es frecuente, cuando se trata de una ley, citarla por el nombre del Ministro que presentó el proyecto de la misma.

Pues bien; en la tarde de ayer afirmé, y en ello me ratifico hoy, que S. S. hizo bien realizando entonces desgravaciones en el impuesto de transportes; pero yo tengo la seguridad de que si S. S. no fuera el autor de esas rebajas de 1904 y 1907, y se encontrara actualmente en este banco, no las propusiera hoy ¿Por qué? Porque aquellas circunstancias de la Hacienda eran muy distintas de la situación presente. Entonces no tenía necesidad S. S., como decía con gráfica frase el Sr. Gómez Acebo, de apretar los tornillos al contribuyente; porque aquellos presupuestos se liquidaban, por fortuna, con grandes excedentes. Pero ¿es este el caso actual, señor Osma? ¿Son esas las presentes circunstancias? ¡No! Por eso, aun estimando yo que es convenientísima para la producción, para el tráfico y para el consumo la supresión del impuesto de transportes, no he tenido más remedio que traer à la consideración y aprobación del Parlamento este proyecto. Yo declaro que he transigido en todo aquello que he podido; pero ya no puedo más, y comprenderá el Sr. Osma que como he transigido hasta ahora, transigiría en este otro punto, si me fuera posible, con gran satisfacción; pero créame S. S., no puedo.

Lo que decía el Sr. Osma es exactísimo; aquí van à quedar perjudicadas las hortalizas. Pero yo digo, señor Osma, que no puedo sacrificar de los ingresos que calculo obtener por este proyecto más que la cantidad que representan las modificaciones introducidas por el dictamen de la Comisión y por la parte aceptada de la enmienda de S. S. Que todos los interesados se pon-

gan de acuerdo, que como buenos hermanos procuren que ese beneficio se extienda á todos, que yo en eso no tengo inconveniente alguno; lo que yo no puedo es, después de haber llegado al límite de las concesiones, traspasar ese límite, y por ello tengo que declarar con pena con grandísima amargura, que no me es posible aceptar la enmienda de S. S. por lo que se refiere á las hortalizas.

Esto, Sres. Diputados, no es un capricho; es que este extremo representa cerca 400.000 pesetas, y yo no puedo prescindir de ese ingreso. He renunciado ya á unos 2 millones de pesetas, y dejo á la consideración de la Cámara si es posible pedir más transigencia y sacrificio al Ministro de Hacienda. Pero eso no obsta para que yo me preocupe hondamente de buscar la forma de que el beneficio que se otorga á los demás artículos á que aquí nos hemos referido alcance también á las hortalizas.

Yo le aseguro al Sr. Osma, yo empeño mi palabra ante el Parlamento, que en el próximo presupuesto para 1912, que tengo el propósito de hacer, Dios mediante, reduciré ò suprimiré, si puedo, el impuesto de transportes para las hortalizas.

Decía el Sr. Osma que el impuesto de transportes es antieconómico. Ya sabe S. S. cómo yo pienso. Lo he dicho ayer; lo acabo de repetir, pero es necesario tener en cuenta que, en general, no hay ningún impuesto que no sea antieconómico contra la economía particular; porque todos disminuyen la fortuna del contribuyente y todos restringen el consumo.

El Sr. Osma se lamentaba también en la forma adoptada, primero en el proyecto, y más tarde en el dictamen, en lo tocante al restablecimiento de las exenciones del impuesto de transportes. No crea el Sr. Osma que esto se ha hecho por habilidad. ¡Qué habilidad, señores, si el proyecto de ley no se presenta á personas indoctas; si se hace para traerlo al Parlamento! Se ha hecho porque son tantas (S. S. lo decía hace un momento), son tantas las exenciones, que su enumeración completa en el proyecto llenaría varios pliegos de papel.

Esta es la sencilla explicación, el por qué de la forma del proyecto y del dictamen de la Comisión.

Y nada más Sr. Osma, pues yo confieso que la situación del Ministro de Hacienda defendiendo este proyecto es difícil—ya ve S. S. si hablo con toda lealtad—esto no tiene más defensa que la ley de la necesidad; y termino rogando al Sr. Osma que se dé por satisfecho con la admisión de la enmienda en la forma que la Comisión ha expuesto.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián:) Insisto en el ofrecimiento que ayer he hecho, y que he repetido esta tarde, refiriéndome al próximo presupuesto; pero como no tengo ningún interés en que si no son precisos para la nivelación del presupuesto se exijan esos ingresos, propongo á la Cámara una resolución análoga á la que le propuse al Marqués de Cortina: una autorización

al Gobierno para que si durante el primer trimestre del ejercicio de 1911 se confirman los cálculos relativos á la posible recaudación por dicho tributo, el Ministro de Hacienda pueda suprimir el impuesto de transportes sobre las hortalizas que se exporten, tanto á Europa como á los puertos de América. (*Muy bien.—Aprobación de todos los lados de la Cámara.*) ¡Yo no puedo hacer más, señores!

Esa autorización al Ministro puede consignarse en la ley misma. Porque yo, Sres. Diputados, ¿que persigo? ¿Asegurar la nivelación? ¿No me hacen falta esos ingresos? Pues con alma y vida los renuncio porque creo que, en efecto, es, no conveniente, sino necesario y el argumento que hacía el Sr. Azcárate es tan lógico, que sobre él no cabe discutir. La misma cifra que representa el impuesto de transporte de las hortalizas, y que se eleva á cerca de 400.000 pesetas, demuestra la enorme suma de toneladas que se exportan al año.

Si á la Cámara, pues, le parece bien mi propuesta, tendré una gran complacencia en ello. (*Muy bien.*)

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Como yo Sr. Crespo Azorín, estoy dispuesto á cumplir lo que ofrezco, y por eso procedo siempre con gran cautela para no ofrecer lo que no puedo cumplir, me veo en la necesidad de no aceptar la propuesta de S. S.

Acepté lo de la autorización relativa á las hortalizas, porque alimento la esperanza, que creo no he de

sufrir la dolorosa decepción de ver frustrada, de que las circunstancias me permitirán realizarlo; y como estoy seguro, dados los cálculos hechos, de que las reducciones que propone S. S. no será posible hacerlas, tengo el sentimiento de no poder aceptar esa propuesta. (*El Sr. Crespo Azorin*: Es que en este caso era para mantener el *statu quo*.)

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Nada más que dos palabras. Es necesario que la Cámara sepa que la excepción que se establece en el dictamen respecto de los tapones, es una excepción que se consigna por primera vez, es decir, que no se trata de restablecer lo que estaba prohibido. (*El Sr. Albert*: Pero que debía haberse hecho.) Por ello á pesar de las circunstancias en que se encuentra el Ministerio de Hacienda, y que le obligan á recargar á todos los contribuyentes, ha accedido á la pretensión de S. S. (*El Sr. Albert*: Lo que agradezco mucho.) ¿Que más puede desear S. S.? Creo que ya es bastante concederle la exención respecto de los tapones y de los residuos. En cuanto á la relativa al cuadradillo no puedo aceptarla por afectar grandemente á los términos de otro problema, planteado desde hace tiempo, y que no es este el momento oportuno de abordar.»

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Ese ar-

fículo tiene una explicación muy lógica y muy justa.

Sabe el Sr. Gandarias que el valor del mineral, que forma la base del impuesto, es una diferencia entre el que tiene en el punto de destino y los gastos de transporte desde el almacén hasta aquel punto. Pues bien; si para estimar el valor sobre el que ha de pesar el tributo no se le computan al minero los gastos de transporte, si estos valores quedan libres y exentos del impuesto, ¿no será una injusticia, Sr. Gandarias, que el minero que tiene un ferrocarril no pague el impuesto de transportes? Nada más.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Crea el Sr. Azcárate que si las circunstancias por que atravesamos no fuesen tan críticas ni apremiantes, habría intentado alguna reducción en el impuesto de transportes de los minerales, repito que no he podido realizarlo por las circunstancias difíciles en que me encuentro; pero yo opino como el Sr. Azcárate, estoy conforme con S. S. y tenga la seguridad de que inmediatamente que los tiempos varíen realizaré lo que ahora he tenido el propósito de hacer.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Ruego al Sr. Garriga que retire la enmienda. Ya estudiaremos eso, es un aplazamiento, ya veremos lo que se puede hacer más adelante.

DISCURSO

del día 6 de Diciembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
el día 6 de Diciembre de 1910.

*Resumiendo el debate sobre la totalidad
del proyecto de ley, de reforma de la
contribución territorial.*

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Mi propósito, Sres. Diputados, es hacer el resumen del debate sobre la totalidad del dictamen que se está discutiendo; pero antes me creo en la necesidad imprescindible de decir algunas palabras sobre la grave cuestión que se ha suscitado incidentalmente, con motivo de la cuestión del voto particular del Sr. Bergamín.

Si el Catastro es la descripción completa, detallada y valorada de toda la propiedad territorial de la Nación, y es la carta geográfica de su superficie, es innegable, Sres. Diputados, que tiene una grandísima importancia la realización de ese trabajo.

Por medio de interrupciones, me parece haber ex-

presado mi opinión de que, en efecto, conforme en un todo con la del Sr. Azcárate y con la de otros Sres. Diputados, entiendo que esa es función privativa de la soberanía del Estado; pero creo también necesario que esta cuestión se debata en forma.

Estimo que después de haber sido alegada por el señor presidente de la Comisión, en la tarde de ayer, la excepción dilatoria, ya no debíamos haber insistido en este debate. El señor presidente de la Comisión lo dijo claramente: promuévase el debate en forma reglamentaria, en términos en que puedan aportarse todos aquellos elementos, todos aquellos medios precisos, para formar cabal juicio acerca de punto de tal importancia y de tan grande interés para la Nación española, y entonces la Cámara examinará y resolverá. Sobre esto no tengo más que decir.

Con el proyecto que se discute yo me he propuesto cuatro fines: primero, el dar á la contribución territorial la elasticidad de que hoy carece; segundo, procurar poner término á la injusticia que actualmente impera, y merced á la cual se beneficia el defraudador á costa del que no lo es; tercero, dar unidad á los tipos de gravamen, hoy tan diversos, y, por último, estimular la comprobación de los Registros fiscales. He aquí la cuádruple finalidad que persigue el proyecto que se discute.

Dar la elasticidad de que hoy carece á la contribución territorial.

¿Quién duda que la contribución territorial está estancada? ¿Quién duda que está apresada, férrea-

mente sujeta por el cupo fijo, y que por virtud de este cupo fijo no puede, á medida que aumenta ò disminuye la capacidad contributiva, aumentar ò disminuir la contribuciòn? Romper de una vez esas ligaduras es el primer fin de mi proyecto.

El cupo fijo. Lo decía el Sr. Rodés; lo decía el señor Carner: Desde la ley de 1845 que estableció la contribuciòn territorial, viene ésta siendo contribuciòn de cupo. Es decir, que la cantidad que debe contraerse es fija, y que los tipos varían, como cocientes que son de dividir el cupo por la riqueza imponible. En esa misma ley de 1845 se preceptuaba que el cupo se fijaría anualmente por las Cortes.

La ley de Presupuestos del 88 al 89 fijò el cupo en 166.757.000 pesetas, cantidad que invariablemente ha venido figurando en todos los presupuestos hasta el de 1893-94, en que se dispuso que tributara fuera de cupo la riqueza oculta descubierta por virtud y á consecuencia de lo dispuesto en el Real decreto de 9 de Febrero de 1893; pero vino la Real orden de 1.º de Abril de 1896, y esa Real orden mandó que se incorporara á las respectivas secciones la riqueza oculta descubierta, modificando de esta suerte lo dispuesto en la ley de Presupuestos de 1893-94. E hizo más esa Real orden: fijar el cupo en 170 millones. ¿Còmo se ha formado ese cupo que no ha votado el Parlamento? Esto es lo que yo necesito exponer á la consideraciòn de la Cámara.

Se ha formado del siguiente modo: Cupo fijo de la ley de Presupuestos del 88-89, 166.757.000 pesetas; al-

tas por registros fiscales aprobados, 981.072; suma total comprendida en los estados de repartimiento, 167.738 072, riqueza urbana tributando fuera de cupo por virtud de lo dispuesto en la ley de Presupuestos del 93-94, y reintegrada al repartimiento á tenor de la Real orden de 1896, 1.418.297, total, 169.156.369. La Real orden redondeando sin duda la cifra, fija 170 millones. Era necesario que el Parlamento conociera el por qué de ese cupo fijo, cuya aprobación se propone ahora á la Cámara, para que sea en lo sucesivo el cupo fijo del Reino.

Y esto me lleva como de la mano á tratar de otra cuestión importantísima y transcendental de que se ha ocupado el Sr. Rodés y también el Sr. Carner: de los repartimientos. ¡Es verdad! ¿Por qué no decirlo, si á ella nos debemos? ¡Es cierto que en los repartimientos se cometen injusticias, é injusticias evidentes! Independientemente de las arbitrariedades que se realizan en los pueblos, está en la propia constitución y mecanismo del repartimiento la causa de su injusticia fundamental. Por eso yo quiero recordaros cómo se hacen los repartimientos.

Cupo fijo, 170 millones. De esta cantidad hay que deducir la correspondiente á la parte del concierto con las provincias Vascongadas y los dos millones de Navarra. Por la cantidad que resta tienen que contribuir las provincias no aforadas, en esta forma: Se rebaja primero la suma de las cuotas de los Registros fiscales al tipo de 17,50, después la de la primera sección de urbana, al mismo tipo, y la primera sección

de territorial al de 15,50; y quedan dos secciones: la segunda de urbana y la segunda de rústica. Se deduce el importe de la segunda de urbana al tipo de 21,50, y el resto es lo que en realidad se reparte en la segunda sección de rústica, allí es adonde va todo lo indeclinable. He ahí explicada la razón de cómo está aprisionada la contribución por el cupo fijo, de cómo está estancada y no puede crecer. Pero como mis opiniones particulares nada valen y carezco de autoridad para imponerlas, voy á limitarme, por lo que á punto tan importante se refiere, á recordar lo que un distinguido publicista dice de nuestro repartimiento de la contribución.

Los registros fiscales de urbana se aprueban y ofrecen un aumento que sube hoy á unos 40 millones de pesetas. Se comprueban estos registros y ofrecen nuevos aumentos que exceden hoy de 13 millones de pesetas, el avance catastral, consumiendo millones, estima la riqueza rústica de un pueblo, la de una provincia... todo inútil.

Los registros fiscales aprobados y los comprobados producen un aumento de ingresos desde que se dan las altas correspondientes hasta que empieza á regir un nuevo repartimiento, pues entonces el aumento que de allí se obtiene, se pierde en el cupo; es á restar de la carga de los demás pueblos ó riquezas. El avance catastral de un pueblo tampoco surte efecto, más que de contribuyente á contribuyente en el mismo pueblo; pues con arreglo á las leyes de 1900 y de 1906, el cupo de ese pueblo no se altera, sea cualquiera la cantidad

de riqueza descubierta, produciéndose de este modo enormes diferencias de tributación; el avance catastral de toda una provincia iguala à los contribuyentes de la misma y lleva consigo un tipo de equidad, pero solamente para esos contribuyentes; pues los que pagan por reparto son aligerados de sus cargas, si hay aumento en el avance catastral de los demás pueblos, y al contrario, todo ello con arreglo al texto terminante de la ley de 1900 y al lamentable olvido padecido por el legislador en 1906. Como la ocultación es inmensa, pues los avances catastrales aprobados arrojan una cifra media de ocultación de 31,26 por 100, á saber: 75.709.731 amillaradas, de 110.139.824 estimadas en los avances; esto es, un aumento medio de 45,48 por 100; cada vez será menor la cantidad à repartir entre los que no han querido descubrir su riqueza, ó sea que el régimen vigente representa la recompensa de los defraudadores, legalmente organizada.

Y es verdad; aquí está pintado con toda fidelidad el cuadro, sin que se hayan recargado sus negras tintas. Y precisamente es uno de los fines esenciales del proyecto el de romper ese cerco, el acabar con esa injusticia legal apoyando el tributo en su base natural y propia, y dejándole moverse libremente á compàs de la riqueza de que se paga.

Vamos al tercer punto. Hay un número considerable de tipos de gravamen. La ley del 45, lo sabéis todos, había fijado un tipo máximo y único para toda la propiedad territorial y para todos los pueblos, sin distinción de rústica y urbana: el 12 por 100. Ese tipo se fué paulati-

namente elevando por las leyes del 56, del 64, del 69, del 70 y del 72, hasta el 20, y uno más para gastos de recaudación y partidas fallidas.

Pero siempre, como dije, para toda la propiedad territorial de España, para todos los pueblos. Mas vino en el año 1881 la reforma del Sr. Camacho, y estableció dos tipos: uno de 15 por 100 para los que declaran su riqueza, más 1 por 100 para gastos de cobranza, y otro tipo, el de 21, para los pueblos que no presentaran la declaración de su riqueza. El año 85 se suprime el *equivalente de la sal*, cuyo importe se refunde con la contribución territorial, y aquellos tipos se elevan á 17,50 y á 23, respectivamente. La ley dijo que este arreglo tendría solamente carácter provisional, y que la Administración se preparaba para ir á la unificación de los tipos. Lejos de eso, la ley de 1887 aumentó el número de ellos, separando la riqueza rústica de una parte, y la pecuaria y la urbana de otra; para la riqueza rústica establece dos tipos: el de 17 y el de 22 para la primera y segunda sección, respectivamente, y para la urbana y la pecuaria otros dos: el de 17,50 y el de 23. La ley del 88 equipara la propiedad pecuaria á la rústica, y establece también dos tipos, el mínimo de 15,50 y el máximo de 20,25, dejando subsistir para la urbana los antiguos.

Iba á decir que estos son los tipos vigentes; es verdad, pero no en número, porque aun hay más: el de 17,50 para el registro fiscal de urbana y el de 14 para el avance catastral de rústica cuando está terminado en toda una provincia, y los innúmeros

tipos para aquellos pueblos pertenecientes á provincias en que no está terminado el avance catastral, para esos, señores Diputados, asombraos, el tipo de gravamen varía entre el 1,72 y el 33 por 100.

Dejo á vuestra consideración el número enorme de tipos de gravamen que tenemos, el cual produce confusiones é injusticias, y por lo cual en este proyecto se pretende unificarlos.

La ley de 1906 dispuso que hasta tanto no se terminara el avance catastral de toda una provincia, el Catastro no surtía efecto para ella en cuanto al cupo; de suerte que su efecto queda reducido á la mejor distribución del cupo entre los propietarios del Municipio, y nada más; pues ni el Estado se beneficia con el aumento de riqueza descubierta, ni el contribuyente de un Municipio cuya riqueza es realmente inferior á la amillarada viene á pagar el tipo justo. Y hasta cuando se termine el avance de una provincia, esos efectos son los que pudieran esperarse, porque el incremento de contracción en esas provincias se pierde totalmente para el Estado en las demás.

Se realizó el avance catastral de rústica en la provincia de Albacete; resultò el tipo aproximado de 14 por 100... (*El Sr. Martín Sánchez*: Se hace para favorecer al propietario el Catastro.) Pues ¿qué duda cabe? No se puede poner en tela de juicio tal cosa. (*El señor Martín Sánchez*: Lo digo en apoyo de lo que dice S. S.) No se había de hacer para favorecer al contribuyente y para favorecer al Estado, para que se pudiera descubrir la riqueza que había oculta y que oculta con-

tinúa, y cuyo descubrimiento favorece al contribuyente de buena fe, puesto que tiene que pagar un tipo menor de gravamen.

Decía, Sres. Diputados, que la ley de 1906 dispuso eso, y que en el proyecto se propone que no haya necesidad de esperar á que esté catastrada toda una provincia, para que surta efecto el catastro de aquél pueblo; y se dice, que todo pueblo que el 31 de Agosto tenga hecho su avance catastral de rústica, disfrutará de los beneficios que la ley le otorga, y pagará el 14.

Pero decían los Sres. Rodés y Carner, «no es justo que no se lleve la cuota á los demás contribuyentes», y yo digo á SS. SS., no se lleva porque ese sería un salto en las tinieblas, por una razón sencillísima. ¿No decía el Sr. Carner que hay muchos Ayuntamientos, y es rigurosamente exacto, que no tienen amillaramiento? Pues si no tienen amillaramiento, claro está que no constan de una manera fehaciente ni la riqueza que ha de tributar, ni la persona que ha de pagar el tributo. Más aún, hay Ayuntamientos que tienen amillaramiento, pero esos amillaramientos están plagados de falsedades, falsedades en el nombre de las personas que en él figuran, falsedades en las fincas, falsedades en la totalidad de los líquidos imponibles, y yo digo; ¿qué medios puede tener la Administración para llevar la cuota á todos esos pueblos que no tengan el avance catastral? No hay más que uno; decir: el líquido imponible para la cuota será en ese caso el que resulte del último repartimiento; pero yo dejo á la consideración del Sr. Carner si sería lógico, si no resultaría una contradic-

ción flagrante que se fuera á establecer el régimen de cuota asentándolo sobre el líquido imponible del repartimiento, que reconoce S. S. que está plagado de falsedades. (*El Sr. Carner*: El medio que daba el proyecto del Sr. Besada.) A eso voy. ¿Por qué no se faculta à los Ayuntamientos para que puedan presentar las declaraciones de riqueza? Pues muy sencillo; es necesario que hablemos con claridad, porque resultaría una de estas dos cosas: ò que tendría que pasar la Administración por lo que dijeran esas declaraciones, y tenga S. S. la seguridad de que resultarían inferiores à lo amillarado, ò habría de hacerse la comprobación por la Administración, gastando muchísimo dinero, distrayendo el personal que tiene dedicado al avance catastral y desorganizando lo que hoy tiene organizado; aparte la perturbación que ocasionaría el que en un mismo Ayuntamiento en un mismo término municipal hubiera dos clases de contribuyentes. Estas son las razones que yo he tenido para no andar ese camino.

Pero, además, me he inspirado en las lecciones del pasado, que deben servir à todo gobernante de provechosa enseñanza para el presente y para el porvenir. El año 1881 ya se hizo eso, el Sr. Camacho llevó la contribución de cuota á la sección primera de la contribución urbana; y á pesar de haberlo circunscrito sólo à esa primera sección, ¿qué resultò? El más tremendo de los fracasos, y la ley de 1885 tuvo que volver otra vez á implantar el régimen de cupo fijo.

Y vamos ahora, Sr. Martín Sánchez, à discutir el único punto que S. S. ha impugnado del proyecto,

que es el contenido en el art. 9.º del dictamen.

La ley del Catastro dispone que la oficina encargada de la conservación del Catastro se establezca donde estén los Registros de la propiedad que hoy, como todos sabéis, se hallan en las cabezas de los partidos judiciales.

El art. 9.º del dictamen dice que esas oficinas se establecerán en la capital de la provincia mientras no esté toda ella catastrada. Decía S. S., ¿á qué derogar eso? Tiene razón el Sr. Martín Sánchez. Yo discuto siempre con toda lealtad y con toda sinceridad. No se me ocultó, al redactar este proyecto, que era mucho mejor lo de la ley de 1906, pero me he encontrado con una grave dificultad, con la imposibilidad de realizarlo, y yo creo que á la ley hay que llevar lo que es de posible realización, no aquello que se sabe de antemano que no se puede ejecutar, por eso he puesto ese artículo en el proyecto que discutimos.

El cumplimiento de ese precepto de la ley de 1906 llevaría aparejado un gasto de importancia, no como decía el Sr. Martín Sánchez dejándose guiar de su buen propósito y de un gran optimismo, de unos 10 ó 12 peritos, ¡no!; piense S. S. en el número de partidos judiciales que hay en España, que son 509, fijese S. S. en que en cada una de estas oficinas ha de haber, cuando menos, el empleado principal, que ha de tener 1.500 pesetas de sueldo, y además un conserje ó portero. Pues multiplique S. S. y verá el número extraordinario de miles de pesetas á que asciende. Y esto, suponiendo que un perito agrícola haya de tener á su cargo la con-

servación del registro de urbana. (*El Sr. Martín Sánchez*. En tres provincias nada más.) ¡Si no es eso! Su señoría no se ha fijado bien en la ley de 1906, porque no se refiere sólo á cuando esté terminado el avance de rústica, sino que se incluye también el registro fiscal, y hasta que no estén los dos no se puede hablar de avance catastral; son los dos factores que lo integran, y en esas cuatro provincias no hay más que lo relativo á rústica, más no lo referente al registro de urbana. ¿No es exacto? Por esto no se lleva á los partidos judiciales, con arreglo á la ley, en esas cuatro provincias catastradas, la oficina de conservación, sino que se deja en la capital de las respectivas provincias. No se lleva á los partidos judiciales, porque aun faltan por hacer los trabajos del registro fiscal de urbana, y hasta que estén terminados no está hecho el avance catastral, que es á lo que se refiere la ley de 1906 en su art. 28. (*El señor Martín Sánchez*, El 27.)

El 27 dice que han de estar en las capitales de los partidos judiciales, y el 28 precisa y determina los documentos del avance catastral, y comprende los relativos á esos dos factores, de rústica y de urbana.

Pero, además, aun cuando pudiéramos salvar esta dificultad, que yo creo grande, nos encontraríamos con otra mayor, ¿dónde tenemos el personal práctico para esto, Sr. Martín Sánchez? No habría más remedio que distraerlo de las operaciones de realización del avance catastral, y entonces podría decirse que en vez de determinarse en diez años como cálculo, se determinaría en quince ó diez y seis.

Pero, en fin, yo declaro que estoy convencido de la eficacia de esas oficinas de conservación, que la ley de 1906 ordena que se establezca en las capitales de los partidos judiciales no tan sólo por lo que se refiere al avance catastral y aun al catastro parcelario, esto es, desde el punto de vista fiscal y jurídico del catastro, sino también y principalísimamente porque aspiro á que esas oficinas sean los verdaderos núcleos de la Administración de Hacienda pública española para extenderla y llevarla fuera de las capitales de provincia, porque hay que afirmar que la Administración no está hoy más que en las capitales de provincia, siendo necesario llevarla á los pueblos, y por eso precisamente me parece muy bien utilizar tales oficinas como núcleos para este propósito, porque sólo de esa manera podrá ser España un pueblo moderno. Ya lo decía hace un momento interrumpiendo al Sr. Rodés, lo que está fuera de toda duda es que la Administración municipal ha fracasado. ¿Quién puede poner eso en tela de juicio? ¿No estamos viendo que no hay amillamientos, ni padrones de cédulas, ni matrículas de industrial ni ninguno de los documentos de la Administración? (*El Sr. Azcárate: ¡Ha sido la tutela de cincuenta años tan beneficiosa!*) Señor Azcárate, yo no hago más que establecer el hecho, ha fracasado y no tengo más remedio que ver la manera de salvar esa situación, y el único medio que estimo eficaz es constituir esas oficinas, para que sean los núcleos de la Administración de la Hacienda pública. (*El Sr. Santa Cruz pronuncia palabras que no se perciben.*) Pero el Sr. Carner ¿no censuraba los re-

partimientos? ¿No decía que no había amillaramientos? ¿No decía que no había padrones de cédulas? Pues eso es lo que digo ahora, no digo más.

De suerte que no aventuro ninguna opinión. (*El señor Carner*: Y el Estado no tiene Catastro ni estadísticas.) Está bien; como estoy tan penetrado de la importancia de esas oficinas, voy à proponerle á S. S., señor Martín Sánchez, una transacción. La ley que se discute dice: «las oficinas se constituirán ó establecerán en la capital de la provincia». Pues que diga la ley, «podrá el Ministro de Hacienda establecer en la capital de la provincia la oficina para la conservación del Catastro»; y de ese modo quedará el Ministro en plena libertad para si lo cree conveniente y tiene personal hacer lo que dispone la ley de 1903, llevándola á las cabezas de los partidos judiciales, y si el Ministro, por el contrario, estima que no es necesario ó conveniente ó carece de bastante personal, llevarla á la capital de la provincia. (*El Sr. Martín Sánchez*: Conforme. Tengo la seguridad de que S. S. la llevará al Registro de la propiedad.) ¿Ve S. S. cómo discutiendo con sinceridad y buena fe se llega pronto á un acuerdo? (*El señor Martín Sánchez*: Se convencerá S. S. de que esa es la clave de la ley de 1906: la conservación de los trabajos que se hagan.)

Comprendo que estoy molestando demasiado la atención de la Cámara, y termino, Sres. Diputados, haciendo estas afirmaciones: con el proyecto que se discute se da por primera vez elasticidad á la contribución territorial, en la mayor parte de los casos habrá mayo-

res rendimientos, en otros bajará, pero será siempre inspirándose en una razón de justicia, no se favorecerá á un contribuyente en perjuicio de otro, no se beneficiará al defraudador á costa de quien declara su riqueza, y, por último, se estimulará la comprobación de los registros fiscales, pues no olvidéis que si el registro fiscal para el tipo de 17,50, que es el mismo tipo que paga la urbana de la primera sección, luego ¿qué interés han de tener los propietarios que están en la primera sección de urbana por que se forme, ni menos por que se compruebe el registro fiscal? Ninguno, porque pagan lo mismo.

Para que haya un estímulo que facilite la comprobación de los registros fiscales, que desgraciadamente ofrece dificultades, se establece en el proyecto el 17,50 para los aprobados y comprobados, y el 18,50 para los que no están comprobados. Estimo que esto es un medio de estimular la comprobación de los registros fiscales.

Y no tengo más que decir, por lo que termino, pidiendo perdón á la Cámara por el tiempo que he molestado su atención. (*Muy bien, muy bien.*)

DISCURSO

del día 12 de Diciembre de 1910.

DISCURSO

pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 12 de Diciembre de 1910.



Al discutirse el artículo de la Ley de Presupuestos.



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Ya sé yo que el Sr. Espada, al hacer la pregunta que acaba de formular, no perseguía más finalidad, ni tenía otro objetivo que realizar, que el de que las cosas constaran de una manera clara y terminante. Está muy bien. Es cosa rara lo que viene ocurriendo en la discusión de este presupuesto con la minoría conservadora, y ya es necesario que restablezcamos bien los hechos y que pongamos los puntos sobre las fes.

Un día se levanta el Sr. Espada y hace creer à la opinión que aquí se han presentado distintos proyectos de ley reformando los tributos y exigiendo un grandísimo sacrificio al contribuyente para pagar la enorme cifra en que este Gobierno eleva los gastos del presupuesto; y es claro, esto para el Gobierno es de grave-

dad suma, porque el país contribuyente, que no está en los pormenores de la cuestión, podrá creer fácilmente que esos 79 millones que hay de diferencia entre el presupuesto de 1911 y el de 1909 son producidos por acciones ó por hechos del partido liberal, y que para eso acudimos al país contribuyente, para que pague esos 79 millones; y no es así, Sres. Diputados, no es así.

Nosotros hemos aumentado los gastos en unos 9 millones de pesetas, y vamos á hacer la cuenta. (*El Sr. Espada*: Es al contrario.) ¿Que no es eso, señor Espada? Pues oiga S. S. En el presupuesto de 1911 importan los gastos, con los aumentos del Senado, 1.123 millones. Y en el presupuesto de 1910, que rige por autorización y con el cual compara S. S. los gastos, suman 1.036 millones. Pero, ¡ah, Sr. Espada!, no es esa la cantidad; porque á esos 1.036 millones, cifra prevista en ese presupuesto, hay que añadir los 2 millones de pesetas que para cumplir una ley de SS. SS., la de reformas en Correos y Telégrafos, he tenido que pedir al Parlamento mediante un proyecto de crédito extraordinario para el presupuesto de 1910; y para cumplir otra ley, la de Comunicaciones marítimas, tuve que solicitar del Parlamento otro crédito de 5.500.000 pesetas; es decir, 7.500.000 pesetas que hacen subir los 1.036 millones á 1.043.711.000; 1.044 millones en cifras redondas. ¿Cuál es, pues, la diferencia efectiva del proyecto de presupuestos respecto del presupuesto vigente? De 1.044 millones á 1.123 van 79 millones en cifras redondas.

Pues vamos á ver cómo se descompone ese aumento.

Primero, 20 millones que hay que llevar á este presupuesto en cumplimiento de la ley de Construcciones navales, civiles é hidráulicas.

Segundo, 7 y medio millones para cumplir la ley de Comunicaciones marítimas, y 2 millones para la de reforma de servicios en Correos y Telégrafos. (*El Sr. Espada*: Pero ha descontado antes S. S. 5 millones) Pero, Sr. Espada, si estoy refiriéndome á los presupuestos de 1911 y al de 1910. Es natural... (*El señor Espada pronuncia palabras que no se perciben*.— *El Sr. Espada*: ¿Me permite S. S. una interrupción?) Sí, señor. (*El Sr. Espada*: Su señoría sostiene que no hay más que 81 millones de diferencia entre el presupuesto de 1910, prorrogado el de 1909 con los créditos adicionales, y el proyecto de 1911. ¿Por qué? Porque dice, 7 y medio millones de reducción...) No; por los aumentos al actual. (*El Sr. Espada*: De aumentos hoy vigentes, que es reducción en el aumento positivo del proyecto. Esos 7 y medio millones se descomponen del modo siguiente: 5 y medio millones por la ley de Comunicaciones marítimas, y 2 millones para Correos y Telégrafos, y ahora quiere S. S. descontar de los 81 millones otra vez siete millones y pico; es decir los 5 y medio millones de Comunicaciones y los 2 de Correos y Telégrafos. Por eso yo, empleando una locución vulgar, le decía á S. S. que son dos de la vela y de la vela dos.) No; no son dos de la vela y de la vela dos.

¿Quiere S. S. hacer otro cálculo? Pues tomemos

como término de comprobación, no el presupuesto que está rigiendo por autorización, sino el presupuesto de 1909 que han hecho SS. SS. Y resulta que el presupuesto de 1909 importa también 1.044 millones; comparando con él el proyecto para 1911, resultan 79 millones de aumentos; y entraba yo en el análisis de las cantidades que integran esa diferencia, y decía: veinte millones de la ley de Escuadra. Dos millones de la reforma de Correos y Telégrafos (*El Sr. Espada pronuncia palabras que no se perciben.*) ¡Pero si para que no haya equivocaciones estoy haciendo la comparación con el presupuesto de 1909, en el que no existían esas partidas! De suerte que son 2 millones para la reforma de Correos y Telégrafos y 7 y medio millones, cifra que daba S. S. la otra tarde, para el cumplimiento de la ley de Comunicaciones marítimas; en suma, 30 millones próximamente. Pero S. S. se olvidaba de otra disposición legislativa también de aquel tiempo y que es el artículo 11 de la ley de Presupuestos de 1909, donde se dispuso que se elevase al presupuesto el crédito necesario para el pago del personal de primera, con destino en las preventivas y correccionales, crédito que asciende à cerca de 3 millones de pesetas. Ese es el art. 11 de la ley de Presupuestos de 1909, y precisamente cuando yo hace días me ocupaba de este asunto, el señor Marqués de Figueroa me dijo: esa es cosa nuestra; eso se ordena por el art. 11 de la ley de Presupuestos de 1909, y á eso es á lo que voy. De modo que son por todos estos conceptos 33 millones próximamente. (*El señor Espada: Esa era una autorización.*) También era

una autorización la de los 2 millones para Correos y Telégrafos.

Vamos ahora á la segunda parte. Yo no culpo á SS. SS. de la guerra de Melilla, pero menos pueden SS. SS. culparnos á nosotros. De manera que SS. SS. no serán responsables de las consecuencias de esa guerra, pero menos lo es este Gobierno. Y ¿qué resulta? Que el aumento del contingente, la nueva organización que fué preciso dar á las guarniciones de Melilla y á la policía indígena para asegurar no sólo los territorios ocupados, sino también nuestras propias posesiones, hasta tanto que un arreglo con el Majzen facilite las garantías adecuadas, determinan otro aumento de unos 34 millones.

Estos conceptos ascienden, como digo, á unos 34 millones, que sumados á los 33 millones anteriores forman un total de 67 millones de pesetas que son obligaciones heredadas, no contraídas por nosotros, y esos 67 millones son los que nos obligan á acudir al contribuyente, y á exigirle el grandísimo sacrificio que le pedimos, para evitar la desnivelación del presupuesto. (*Muy bien, muy bien*).

De 67 millones á 79, ¿cuántos van? Doce. Vamos ahora á ver los conceptos á que responden.

Un millón trescientas mil pesetas se destinan á satisfacer los intereses de la deuda del 4 por 100 interior, emitida en los años 1908 y 1909, y el mayor importe de las declaraciones de haberes pasivos; 800.000 pesetas, á que asciende el crédito para la confección de los nuevos títulos de la deuda perpetua inte-

rior al 4 por 100, y de las hojas de cupones de la deuda amortizable al 5 por 100; un millón de pesetas para el pago de los intereses de los 45 millones de Obligaciones del Tesoro que han sido negociadas. Suman estas partidas más de 3 millones; 3 millones de cuyo aumento no es tampoco responsable este Gobierno; restan, por tanto, unos 9 millones.

Y en éstos es preciso recordar que están comprendidos los créditos para el aumento de la Guardia civil y del haber del referido instituto y del Cuerpo de carabineros, para mejora de los sueldos de los coroneles, tenientes coroneles y comandantes del ejército; aumento de escuelas y adquisición de material científico, mejora de jornal de los mineros de Almadén, etc., etc. Véase si es ó no exacto lo que dije la otra tarde en una interrupción; que nosotros, en realidad, no habíamos aumentado el presupuesto en más de 10 millones. Pues ahora rectifico, y digo que ni aun en eso, porque no pasan de 9.

Y por ello puedo decir que para pagar esos 9 millones que constituyen en realidad nuestros aumentos, no habríamos necesitado poner mano en ninguno de los tributos, porque con sólo haber estimulado un tanto la gestión recaudatoria, se habrían conseguido esos millones, y no hubiera sido preciso venir á las Cortes en demanda de todas esas reformas de impuestos, y á exigirle al país el gran sacrificio que se le pide. Y como yo buscaba el puntualizar bien las cosas, para evitar que la opinión pública sea inducida á error, me he visto precisado á molestar la atención de la Cámara con

el recuerdo de estos hechos y de estas cifras.

La segunda pregunta cuya contestación deseaba el Sr. Espada es la relativa á las obligaciones del Tesoro. Teniendo en cuenta que se ha aumentado la recaudación este año respecto del anterior en cerca de 33 millones, aliento la esperanza de no tener que negociar más. (*El Sr. Espada; En este año.*) Naturalmente; en este ejercicio. (*El Sr. Suárez Inclán, D. Félix:* Pero nos pedía el Sr. Espada que consignáramos los intereses de los 81 millones.)

Podrán notar los Sres. Diputados la finalidad que persigue el Sr. Espada, que aparezca una gran cifra de gastos. Y es extraño, afán de abultar los gastos y afán de discutir los proyectos de reforma de los tributos mermando los ingresos, ¿Qué queréis? ¿Adónde vais? ¿Qué os proponéis? (*Muy bien, en la mayoría.*)

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián); Necesitaría ser adivino para contestar á S. S., por una razón muy sencilla. En primer, lugar es necesario que tenga S. S. en cuenta que yo no sé si en el ejercicio que viene habrá necesidad ó no de negociar el resto. Yo desde luego estoy en el firmísimo propósito de que no se negocie ni un millón más. No sé si lo podré realizar, pero este es mi propósito por hoy.

Además, hay otra cosa. Sabe S. S. que esas obligaciones son renovables, yo no sé si cuando llegue el término de las obligaciones se renovarán ó no,

no puedo decir á S. S., por tanto, á cuánto pueden ascender esos intereses. Por eso, á mi juicio, el procedimiento más adecuado es el que ha seguido la Comisión, consignar en el presupuesto la cifra indispensable para el pago de los tres trimestres y ampliarla, porque no se sabe á qué cifra podrá luego extenderse el crédito. Creo, pues, que he contestado, no ahora, sino antes, con toda congruencia, precisión y claridad á la pregunta del Sr. Espada.

APÉNDICE

DISCURSO

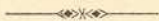
del día 3 de Noviembre de 1910.

DISCURSO

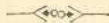
pronunciado en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 3 de Noviembre de 1910.



*Relativos á la transformación del impuesto
de consumos.*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): El Sr. Armasa ha tenido la bondad de dirigirme en la sesión del viernes último varias preguntas que voy à tener el honor de contestar.

Desea S. S. saber si el Gobierno está dispuesto à dictar un Real decreto declarando que el reparto vecinal es medio legal para la exacción del impuesto de consumos en las capitales de provincia, y facultando à los Ayuntamientos para crear todos los arbitrios que estimen justos y que tengan por única finalidad la sustitución del impuesto de consumos.

En cuanto á lo primero, tengo el gusto de contestar á S. S. que no hace falta semejante declaración

por decreto, toda vez que ya està hecha de un modo expreso y terminante en el art. 6.º de la ley de Presupuestos de 1909. Por virtud de ese precepto todos los Ayuntamientos pueden utilizar como medio legal para la exacción del impuesto de consumos el reparto vecinal, si bien con un límite infranqueable: que no podrá pasar el repartimiento de la cantidad total á que ascienda el impuesto de consumos. Este impuesto representa la suma de estos cuatro factores: el cupo para el Tesoro, el recargo municipal que no puede, según la ley de 1904, pasar del 120 por 100 de los derechos de tarifa de consumos de todas las especies en general, excepto la sal que no tiene recargo, la cerveza, en que puede llegar el recargo hasta el 150 por 100 según la ley de desgravación de vinos de 1907, y los alcoholes en los que no puede pasar aquél de 20 pesetas por hectólitro conforme á la ley de 10 de Diciembre de 1908; el 5 por 100 para partidas fallidas, y el 3 por 100 para cobranza. Para mayor claridad pongamos un ejemplo.

Supongamos que se trata del Ayuntamiento de Madrid: cupo para el Tesoro, 3.948.088 pesetas, de cuya cantidad sólo ingresa en las arcas del Estado 2.783.518, en razón á que la diferencia de pesetas 1.164.570 le fué otorgada como auxilio en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.º de la ley de 3 de Agosto de 1907 sobre desgravación de la especie «vinos», recargo municipal, suponiendo el máximo de 120 por 100 sobre todas las especies, excepto la sal que no lo tiene, 4.413.418 pesetas; 5 por 100 para partidas fallidas, 418.075, y 3 por 100 para cobranza, 250.845. Total repartible, 9.030.427;

es decir, que si el Ayuntamiento de Madrid utilizara el medio del repartimiento vecinal para la exacción del impuesto de consumos no podría rebasar, so pena de nulidad, la indicada cifra de pesetas 9.030.427.

Y con esto creo que queda contestada la primera pregunta que S. S. se ha servido dirigirme.

En cuanto à autorizar por decreto à los Ayuntamientos para que puedan establecer todos los arbitrios que tengan por conveniente y con el solo fin de sustituir el impuesto de consumos, me limitaré à decir à S. S. que eso no es materia de la competencia del Poder ejecutivo y sí del legislativo.

Desea también S. S. conocer el criterio del Gobierno acerca del importante problema de los consumos, y así como cuándo se va à presentar el proyecto de exacciones municipales.

Cuando he tenido el honor de presentar al Parlamento en el mes de Julio último el proyecto de ley de Presupuestos y demás proyectos complementarios, declaré paladinamente, sin ambages ni rodeos, que el Gobierno bien hubiera querido, haciendo honor à sus convicciones, proponer en el presupuesto para 1911 la completa y total transformación del impuesto de consumos, acabando así para siempre con los fielatos, verdaderas aduanas interiores que impiden la libre circulación, con daño grave de los intereses del comercio y aun del país en general; pero que razones de alta prudencia, à que no puede ni debe sustraerse ningún gobernante; las atenciones extraordinarias que en los presentes momentos pesa sobre el presupuesto del Estado,

hasta el extremo de exigir grandes miramientos para afianzar su nivelación, y, sobre todo, el fundado temor de comprometer con la reforma, si de un solo golpe se llevase á efecto, las Haciendas municipales, como aconteció en 1854 y 1868, obligaban al Gobierno á proceder sin precipitaciones ni apresuramientos en la ejecución de su pensamiento, en la realización de su decidido propósito de llegar cuanto antes á la completa y total transformación del impuesto de consumos.

¿Quién no recuerda, Sres. Diputados, que la revolución del 54 abolió el impuesto de consumos y que la situación precaria de las Haciendas municipales impuso la necesidad de su restablecimiento? ¿Quién no recuerda que la revolución del 68 volvió á suprimir el impuesto de consumos, que al poco tiempo, en la ley de Febrero de 1870 sobre organización de las Haciendas municipales, se autorizó á los Ayuntamientos para imponer arbitrios sobre los artículos de comer, beber y arder, y, en fin, que en 1874 el Sr. Camacho, Ministro de Hacienda, volvió á incorporar dicho impuesto al Estado? Es decir, que la revolución suprimió los consumos y que la revolución comprendió la necesidad absoluta que había de restablecerlos y los restableció. ¿Es que se puede inferir el agravio á aquellos hombres del 54 y del 68 de que no han querido de verdad la abolición de los consumos? ¡No! Lo que hay es que, á pesar de los grandes esfuerzos, que seguramente hicieron, no les fué posible encontrar la fórmula de la sustitución; esto mismo revela, por modo eficaz y elocuente, que no es obra tan fácil, que no es tarea tan sencilla, como vulgarmente

se cree, la transformación del impuesto de consumos.

Y recuerdo todo esto, Sres. Diputados, porque estimo que nuestra conducta debe inspirarse en esas provechosas enseñanzas del pasado.

Todos ó casi todos estamos conformes en que el impuesto de consumos es odioso, por la forma vejatoria y costosa de su exacción y por su desigualdad; todos estamos conformes en que cuanto antes debe irse à la sustitución de dicho impuesto. Pero, ¿cómo, por qué medio, con qué procedimiento?

Hasta ahora no se han dibujado màs que dos criterios: el de las desgravaciones parciales, inspiradas en cada caso en particulares conveniencias del consumo y de la producción, y el que se basa fundamentalmente en la supresión del tributo, sustituyéndole por nuevos gravámenes.

En cuanto al sistema de la desgravación por especies, es notorio que con tal procedimiento no se remedie el mal que se trata de evitar. Mientras tanto que exista una sola especie sin desgravar, la forma de la exacción del impuesto seguirá siendo vejatoria y costosa. Recordemos lo ocurrido cuando las desgravaciones de los trigos, harinas y vinos, desgravaciones que produjeron una pérdida de millones al Estado, y poco ó ningún provecho al productor y consumidor.

En cuanto al otro sistema que tiene por fundamento la supresión total del tributo y su sustitución por otros impuestos, me limitaré á recordar que el importe del de consumos asciende en total à 135 millones de pesetas, en esta forma: 55 para el Estado por su cupo, y 80 à los

Municipios por sus recargos. ¿Es posible, Sres. Diputados, que en estas circunstancias pueda lanzarse sobre las actuales contribuciones una carga adicional de 135 millones líquidos?

¿Por qué, decía la otra tarde el Sr. Armasa, no renuncia el Estado al importe de los cupos de consumos? Pues, sencillamente, porque no puede, porque de renunciar á esos 55 millones iríamos derechamente al déficit, y lo primero y más importante es mantener la nivelación del presupuesto, porque sólo así se consolidará nuestro crédito y España será un pueblo moderno y entrará en la corriente del crédito europeo.

Pero además debo decir á S. S. que aun en la hipótesis de que el Estado pudiera renunciar y renunciara á esos 55 millones, ningún beneficio obtendría por ello el consumidor. Seguramente que éste continuaría pagando los 55 millones, juntamente con los recargos municipales, sin más diferencia que la de hacerlo el Ayuntamiento en vez de realizarlo el Estado. Y para demostrar, señor Armasa, la exactitud de mi afirmación, recuerdo á S. S. lo que actualmente sucede con los Ayuntamientos de Burgos, La Coruña, La Unión y Vigo, que no obstante no pagar cupo para el Tesoro, continúan administrando el impuesto por medio de fielatos en provecho exclusivo de sus Municipios.

Y nada he de decir de la imposibilidad absoluta en que se encuentran los Ayuntamientos de prescindir de los 80 millones que vienen recaudando por el concepto de recargo de consumos. Unicamente diré que dichos recargos constituyen el nervio de las Hacien-

das municipales, que éstas se nutren principalmente con el producto del impuesto de consumos.

Así, pues, Sres. Diputados, sólo cerrando los ojos á la evidencia y empeñándose en no querer ver la realidad, se puede desconocer que la única, lògica, eficaz y no perturbadora solución para conseguir la transformación en el impuesto de consumos, descansa en la base de la constitución de las Haciendas locales.

Los recursos patrimoniales de los Ayuntamientos son escasos y su actual sistema de ingresos insuficiente para subvenir á las elementales atenciones de los mismos, de tal modo, que apenas los Ayuntamientos traspasan en su desarrollo el límite de las Comunidades rurales, el déficit efectivo es crónico en sus presupuestos. Si las grandes capitales pueden sufragar sus gastos se debe á que el Estado, con una fijación enteramente arbitraria de los cupos voluntarios de consumos, renuncia de hecho á una parte considerable de sus ingresos que no baja actualmente de 17 millones de pesetas, ocurriendo por esta circunstancia que los servicios municipales de gran número de poblaciones están en realidad costeados por contribuyentes extraños al Municipio, que acaso no poseen ni jamás poseyeron fuente alguna de riqueza en el mismo, ni gozaron directa ni indirectamente de los servicios municipales. Y como esa situación es tanto más aguda cuanto mayores son los Municipios, hay que contar que en el desenvolvimiento general de éstos se llegue á un punto en que todo el sistema se derrumbe, si antes no se provee á remediarlo reformando fundamentalmente el régimen económico local.

El Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tenía señalado en 1904 antes de las desgravaciones del trigo y sus harinas en cupo de consumos de cerca de 9 millones de pesetas; hoy no llega á 3 millones; y por cierto que cuando en 1885 se le redujo dicho cupo en más de un millón de pesetas, se hizo con la condición expresa y aceptada por dicho Ayuntamiento de que había de adquirir una dehesa, de construir un matadero para el ganado de cerda, establecer un mercado general de ganados y construir una nueva nave en el matadero, á fin de que los ganaderos pudieran matar libremente; y nada de eso se realizó, nada de eso se hizo.

Hoy á las Haciendas municipales les pasa lo contrario de lo que sucede con la general del Estado. Esta tiene exceso de impuestos directos; es la Nación de Europa que con relación á las que le son comparables tiene mayor proporción de contribuciones directas en el conjunto del sistema impositivo del Estado, y en cambio tiene un gran vacío de impuestos indirectos. Las Haciendas municipales tienen exceso de impuestos indirectos y escasez de directos. Hay, pues, como dice la Comisión extraparlamentaria nombrada para el estudio del problema de los consumos, que reintegrar al Estado de una parte de la imposición sobre ciertos artículos de consumo y entregar recíprocamente á las Corporaciones municipales una parte de los ingresos generales sobre el producto.

Los impuestos personales no pueden ni deben ser base de las Haciendas municipales, excepción de aquellos formados por una masa de propietarios territo-

riales que cultivan por sí mismos, residiendo en el Ayuntamiento: este es el caso de algunos Municipios suizos. Y no puede ni debe ser apoyo principal de las Haciendas municipales el impuesto personal, ya sobre el patrimonio, ya sobre la renta, porque este impuesto, para que no produzca funestas consecuencias, ha de ser muy suave.

Así, pues, para que los Municipios puedan tener impuestos personales es necesario que tengan en bastante número impuestos directos reales ó de producto, y excepcionales condiciones de moralidad.

No olvidemos que uno de los más importantes argumentos que se esgrimen contra el impuesto de consumos es el de las grandes iniquidades que realizan los Ayuntamientos por medio de los repartos.

Los utilizan como arma política para arruinar á los adversarios y favorecer á los amigos, del propio modo que los Médicis, por medio de la *décima scalato*, sumieron en la miseria á familias poderosas por el solo delito de ser sus enemigas, y abatieron las libertades políticas. ¿Qué no sucedería, Sres. Diputados, si se entregase á los Ayuntamientos el impuesto sobre el patrimonio y la renta de los ciudadanos?

En resúmen, hay que constituir las Haciendas municipales desarrollando los impuestos directos, especialmente los reales, los de producto, y á eso se encamina el proyecto ya presentado por el Gobierno sobre consumos y Haciendas locales, y el que muy en breve leerá el Sr. Presidente del Consejo de Ministros sobre exacciones municipales.

Este último proyecto no reforma, como hacía el de Administración local, los organismos y funciones municipales, y se limita á establecer las normas de la imposición y de la administración económica.

Se afirma en él que se va á la supresión del cupo de consumos, aunque no de un golpe, aunque no rápida y brutalmente; se establece que en lo sucesivo no podrán revisarse los cupos para elevarlos, y sí únicamente para reducirlos hasta su extinción; que cuando esté en vigor el censo de población de 1910 no se harán más nuevos señalamientos de cupos que los que sean inferiores á los actuales; se suprime el reparto de consumos y la venta á la exclusiva; se regula en otra forma el reparto general; se declara que el cupo de consumos es una mera carga del presupuesto municipal, con lo que se le quita el carácter de impuesto del Estado, y, en su consecuencia, los Ayuntamientos que quieran y tengan medios puedan sustituir dicho impuesto; y, en fin, se determinan las exacciones que los Ayuntamientos pueden establecer para atender á sus necesidades, exacciones que se fijan por este orden:

1.º Contribuciones especiales para cubrir el coste de las obras que hagan los Ayuntamientos y en que estén especialmente interesados particulares.

2.º Derechos y tasas por los servicios en que también especialmente estén interesados particulares.

3.º Participaciones de los Ayuntamientos en los aumentos de valor que obtengan los terrenos sitos en su término municipal é independientemente de la acción del propietario; y

4.º Impuestos que podrán consistir en los recargos sobre las contribuciones directas del Estado; arbitrios sobre carruajes de lujo y pompas fúnebres; imposición municipal sobre los billetes de espectáculos públicos, juegos permitidos, casinos, círculos y otras Sociedades de recreo; imposición sobre el consumo de gas y electricidad; arbitrios sobre consumos é inquilinatos; repartimiento general y prestación personal.

En cuanto á los arbitrios sobre consumos, ha de ser por este riguroso orden: sobre los artículos de lujo, cuyo arbitrio no pasará del 20 por 100 del valor del artículo; sobre los artículos de lujo de masa, ó sean los de consumo general, que no podrá exceder del 10 por 100, y sobre los artículos de primera necesidad, que no podrá pasar del 5 por 100.

Los Ayuntamientos podrán establecer, hasta que no se suprima el cupo, el arbitrio de consumo á todos los artículos de primera necesidad, exceptuando el maíz, trigo, centeno, frutas, hortalizas, materiales de construcción y materias primeras para la industria, porque es indudable que el arbitrio sobre dichos materiales y primeras materias no es en realidad de consumo, y sí de circulación, que grava el capital y que produce graves perturbaciones.

Y en cuanto al arbitrio sobre los inquilinatos, se establece que solamente tendrá lugar en las poblaciones mayores de 30 000 almas y cuando se haya agotado todo el recargo máximo de las cédulas.

Y dicho esto, Sres. Diputados, y á fin de evitar que la opinión pública pueda ser inducida á error por los ma-

quiavelismos y predicaciones de quienes no se inspiran en otros propósitos ni persiguen más objetivo que concitar las pasiones y perturbar el orden, impórtame declarar, para que conste:

1.º Que el Gobierno tiene el deliberado y firmísimo propósito, como lo revelan los dos proyectos de ley á que acabo de referirme, de ir cuanto antes á la transformación del impuesto de consumos; pero no rápida y brutalmente como por algunos se pretende, y sí con método, con orden, con prudencia, gradual y consecutivamente, asentando la planta en el terreno de la realidad y atento siempre á la defensa de los intereses, así de la Hacienda general como de las municipales.

2.º Que la Comisión informadora de Consumos, presidida por el ilustre Sr. Navarro Reverter, y de que forman parte individuos representantes de todos los partidos políticos, incluso el Sr. Moya, después de tres años de extraordinario trabajo y de haber escrito cuatro tomos tan voluminosos como interesantes, ha propuesto por unanimidad que se vaya á la transformación del impuesto de consumos por etapas, gradual y consecutivamente, según así se consigna en la cuarta de sus conclusiones.

3.º Que el Gobierno está dispuesto desde luego á aceptar cualquier fórmula para la sustitución del impuesto de consumos, siempre y cuando que sea práctica, eficaz, que no comprometa ni la nivelación del presupuesto del Estado ni las Haciendas municipales, y que no imponga al contribuyente mayor gravamen del representado por el impuesto de consumos.

4.º Que aun abolido el impuesto de consumos, no hay que forjarse la ilusión de que se abaraten las subsistencias. Tened en cuenta el principio de la repercusión del impuesto.

El problema de las subsistencias lo integran múltiples y complejos factores, uno de ellos los consumos; pero hay otros, como la organización de los mercados, de los mataderos, la reducción del número de despachos de carnes, etc., etc.

Y que por la supresión de los consumos no se abaratarían las subsistencias no lo digo yo, lo dicen los hechos que hablan con grande elocuencia y tienen irresistible y extraordinario poder.

En efecto; las carnes en canal, por ejemplo, se pagan en el matadero de esta Corte al precio medio de 18 pesetas la arroba, esto es, á 1,61 el kilogramo. Al detalle, el precio de las clases corrientes oscila entre 2 y 3 pesetas el kilogramo; es decir, un sobreprecio de una peseta el kilogramo, término medio, ó lo que es lo mismo, un 50 por 100 de recargo.

Pero, ¿qué más, si la carne de buéy, procedente de España, se vende en Gibraltar el kilo á 1,41 pesetas? Y no se diga que es que allí no se paga derechos de consumos, porque añadiendo los 25 céntimos que aquí se abona por dicho concepto, resultaría el kilo á 1,66 pesetas.

En el año 1866 el abastecimiento de carnes en Madrid se recargó por los intermediarios en pesetas 18.700.000, que, unidas á los 3.300.000 pesetas importe de las pieles de las reses sacrificadas y que

quedaron en manos de dichos intermediarios, da un total de 22 millones de pesetas, cuando es así que la recaudación de consumos por la especie «carne» representó aquel año solamente 7 millones. De donde resulta que los intermediarios ganaron, á costa del consumidor, 15 millones de pesetas.

Encarecimiento análogo al que sufren las carnes grava los demás artículos de necesario consumo. Las patatas se expenden al por mayor al precio de 11 á 15 céntimos kilogramo, y el que rige al detalle oscila entre 18 y 20 céntimos, á pesar de estar gravadas con menos de medio céntimo por derecho de consumo. El encarecimiento por las reventas de artículos tan necesarios como son la carne y la patata para las clases más modestas, representa 50 y 33 céntimos por 100 respectivamente.

Si se examinan otros artículos de consumo, y perdonadme que sea tan pesado (*Voces:* No, no.—*El señor Pidal, D. Manuel:* Esa cuestión de las subsistencias está bien que se traiga y discuta en el Parlamento. Oímos á S. S. con muchísimo gusto.) Decía, Sres. Diputados, que si se examinan otros artículos de consumo, se llega á idénticas conclusiones. El arroz de buena clase se vende en la Alhóndiga á 55 céntimos el kilogramo, y siendo el precio al detalle por la misma unidad 80 céntimos y los derechos de consumos 4 céntimos, resulta un aumento de reventa de 21 céntimos, ó sea un sobreprecio de 38 por 100. El vino de Valdepeñas se cotiza en la Alhóndiga á 25 céntimos el litro; no está gravado con impuesto de consumos, y

se vende al detalle á 40 céntimos; diferencia 15 céntimos, equivalente á un recargo de 60 por 100 sobre el precio de la Alhóndiga.

Con estos datos, Sres. Diputados, de cuya exactitud respondo, pues son rigurosamente ciertos—y dispuesto estoy á traerlos á la Cámara mañana mismo si alguien duda de ello—, se demuestra, de modo que no deja lugar á duda, que no es verdad, que no es cierto que con la supresión del impuesto de consumos por sí sola se abaraten los precios de las subsistencias en la medida deseada y se alcance la solución de este importante problema.

Y 5.º Que el Gobierno está dispuesto á que la ley se cumpla, á que ningún Ayuntamiento, por importante que sea, se coloque fuera de ella, porque esto sería la anarquía, y con la anarquía no puede transigir ni este ni ningún Gobierno; á dictar las disposiciones necesarias, á adoptar cuantas medidas sean precisas para que, sin excepción, todos los Ayuntamientos cumplan la ley sin pretexto ni excusa alguna y á fin de asegurar para el año 1911 los cupos del Tesoro, y si fuese preciso y lo exigiesen los intereses de la Hacienda, llegar hasta la incautación por el Estado de la renta de los consumos en Madrid. (*Aprobación en la mayoría.*)

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): No hay, Sr. Azcàrate, en ninguna de mis palabras y conceptos nada que tenga sabor á amenaza. Me he limitado á

afirmar que el Gobierno está dispuesto á hacer que la ley se cumpla, á no tolerar que ningún Ayuntamiento, por importante que sea, se coloque fuera de la legalidad, á adoptar todas las medidas y á dictar cuantas disposiciones sean necesarias á fin de asegurar el cupo de consumos para el Tesoro, y á llegar en este camino, si fuese preciso y lo exigieren los intereses del Estado, hasta la incautación por éste de la renta de los consumos de Madrid. ¿Qué hay en esto de amenaza? Sólo hay la sincera declaración de que el Gobierno está dispuesto á cumplir con su deber. ¡Pues no faltaba más que porque un Ayuntamiento adopte acuerdos ilegales y aun apele á dilaciones dejáramos llegar el 31 de Diciembre y el Estado no pudiera hacer efectivo el cupo de consumos! ¿Cree S. S. lícito que el Gobierno permanezca impasible ante esta peligrosa actitud?

El Sr. Azcárate decía: «Está bien pero, ¿quién es el responsable de esta situación que se ha creado? El Gobierno, por sus indecisiones, por su indiferencia ante este problema de los consumos.» No, Sr. Azcárate; S. S. que tiene un espíritu tan justiciero, estoy seguro que es el primero en reconocer que el Gobierno ha hecho todo lo que ha podido y debido hacer; que el Gobierno tiene el deliberado y firmísimo propósito de ir cuanto antes á la transformación del impuesto de consumos; pero que no va, que no le es lícito ir con precipitación, con frenesí rayando en la locura, como por alguien se pretende. El Gobierno va á la transformación del impuesto con toda prudencia, con método, con orden; y buena prueba de ello son los dos proyectos á que en mi discurso me he re-

ferido: al ya presentado sobre consumos y Haciendas locales, y al que muy en breve se presentará sobre exacciones municipales.

No olvide S. S. que el Gobierno, después de todo, en la solución del problema de que se trata, no hace otra cosa que seguir el criterio unánimemente sustentado por la Comisión extraparlamentaria de consumos en su conclusión tercera, que dice así: «Supresión gradual y consecutiva de los cupos de consumos, sal y alcoholes del Estado; de los fielatos, encabezamientos, arriendos y demás medios para la cobranza del impuesto de consumos...»

Si S.S., Sr. Azcárate, me hubiera hecho el honor de fijar su atención en el proyecto que presenté en Julio último sobre consumos y Haciendas locales, no hubiera ciertamente hecho las afirmaciones que acaba de consignar.

Las Haciendas municipales se forman ya reduciendo sus gastos, ya aumentando sus ingresos, y por eso se propone en dicho proyecto la supresión del cupo de la sal, sin que en esto resulte contradicción con mi criterio opuesto á las desgravaciones por especies; toda vez que la supresión del cupo de la sal responde en puridad á reducir los gastos de los Ayuntamientos, en el sentido de que como en la especie sal es enorme la defraudación, razón por la que jamás se hace efectivo el cupo en su totalidad, necesitan los Ayuntamientos, suplir con los fondos de sus arcas municipales la diferencia entre el importe del cupo ó lo recaudado; diferencia que casi siempre asciende al 40 ó 50 por 100, resultando así que

con la supresión de dicho cupo obtienen los Ayuntamientos una economía que, aproximadamente, es de cuatro millones de pesetas.

También se propone que se releve á los municipios y á las Diputaciones provinciales de la obligación de reintegrar al Estado los haberes del personal de prisiones, obligación que hoy corre á cargo de aquéllos y que representa una economía para los mismos de cerca de tres millones de pesetas.

Por otra parte se propone la cesión á favor de los Ayuntamientos del 20 por 100 de la renta de propios del 10 por 100 de aprovechamientos forestales en los montes á cargo del Ministerio de Hacienda, y no de los demás por ser de utilidad pública, y del 10 por 100 sobre el arbitrio de pesas y medidas; se autoriza á los Ayuntamientos de las poblaciones donde tuvo aplicación la ley de Desgravación de vinos para establecer patentes sobre la venta de dicho artículo, para la cual conste que hoy no están autorizados, y que, por lo tanto si por algun Ayuntamiento se cobrasen, habría una exacción ilegal; se extiende á todos los Ayuntamientos, excepto á los de las provincias Vascongadas y Navarra, la facultad concedida á los de las capitales de provincia y poblaciones mayores de 30.000 habitantes, de recargar hasta un 40 por 100 las cuotas de la contribución industrial y de comercio; se ceden á los Ayuntamientos los impuestos de carruajes de lujo y Círculos de recreo, con la amplitud necesaria para que puedan determinar las bases y tarifas de dicha imposición, y se les autoriza, en fin, para establecer arbitrios sobre los solares en re-

lación con el aumento de valor obtenido entre dos enajenaciones consecutivas de los mismos. Este arbitrio claro que es para lo futuro, y no para el aumento de valor que los solares hayan alcanzado en tiempos pasados, pues otra cosa sería dar efecto retroactivo á la nueva exacción, lo cual sería injusto.

Y además se les autoriza para poner un arbitrio sobre el inquilinato. ¡Este es el proyecto, Sr. Azcárate!

En cuanto al de las exacciones municipales que muy en breve se presentará, á fin de demostrar la sinceridad con que procede el Gobierno al afirmar que es el primer interesado, haciendo honor á sus convicciones, en que cuanto antes se transforme el impuesto de consumos se consigna claramente que se suprime el cupo, si bien no de golpe, y sí paulatinamente, por etapas. Porque, señores, ¿cómo se va á suprimir tan rápida y radicalmente dicho cupo? ¡Hay que buscar antes la forma de sustituirlo!

Pero, en fin, y ya que SS. SS. han debido estudiar profundamente el problema, puesto que con tanta autoridad y constancia hablan de él, les ruego encarecidamente que presenten una fórmula que sea práctica, eficaz y que no comprometa ni la nivelación del presupuesto del Estado ni la normalidad de las Haciendas municipales, en la seguridad absoluta de que el Gobierno en el acto, ahora mismo, la acepta; y así se demostrará por modo eficaz y elocuente que no es el Gobierno, como se pretende hacer creer á las gentes, el que tiene empeño en la no transformación del impuesto de consumos.

Y en cuanto á si los impuestos indirectos son ó no el principal apoyo de las grandes Haciendas, me limitaré á poner á la afirmación del Sr. Azcárate, contraria á dichos impuestos indirectos, la mía favorable, que seguramente no tendría autoridad alguna si estuviese fundada en la doctrina casi unánime de todos los grandes maestros de la ciencia de la Hacienda. Todos, Cohn, Magner, Flora, etc., etc., sostienen y defienden la justicia, conveniencia y necesidad de la imposición indirecta.

Pero hay más; S. S. Azcárate, sabe muy bien que la única Nación europea que tiene más impuestos indirectos que España es Turquía, y que en la primera Memoria del Gobierno alemán sobre la reforma tributaria del Reino de Wurtemberg, y que seguramente habrá leído S. S., se reconoce la preponderancia de los impuestos indirectos en todas las grandes Haciendas.

Yo no sé si habré dejado por contestar alguna de las indicaciones de S. S., si así fuera, créame que es por olvido. (*Aprobación en la mayoría*).

PRINCIPALES MANIFESTACIONES

del día 29 de Noviembre de 1910.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES

hechas en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 29 de Noviembre de 1910.



*Al discutirse el articulado del proyecto de ley
reformando la contribución de utilidades.*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Comprenderá el Sr. Urzáiz que entre su autorizada opinión y lo que el voto particular propone no hay diferencia sustancial. (*El Sr. Urzáiz*: He empezado por decir que no lo he oído.) A eso voy. La propuesta de S. S. y el voto particular coinciden en que se autorice al Gobierno para que á propuesta del Ministro de Hacienda, fije el capital que las Sociedades extranjeras dedican en España á sus negocios. (*El Sr. Urzáiz*: Publicándolo en la *Gaceta*). Claro es que, siendo acuerdo del Consejo de Ministros, traducido en Real decreto, la *Gaceta* tiene que encargarse de publicarlo. (*El Sr. Urzáiz*: Eso no lo dice el voto particular). Perdone el Sr. Urzáiz: no hay inconveniente en que lo diga, aunque se sobre-

tiende; porque si el Gobierno es el que ha de resolver, será por acuerdo del Consejo de Ministros. Ya sé yo que puede hacerse por Real orden, más no tengo inconveniente en que se diga; por Real decreto publicado en la *Gaceta*.

El voto particular añade otro requisito que á mí me parece bien, y es que se oiga al Consejo de Estado en pleno; S. S. lo estima innecesario, y yo mismo, toda vez que en las facultades del Gobierno está siempre el oír á dicho alto Cuerpo.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): ¿Para qué vamos á seguir discutiendo acerca de un punto tan sencillo y que está tan claro? Conste que el Gobierno desea que esa autorización esté condicionada, como aparece en el voto. El Sr. Urzáiz propone la autorización absoluta, ilimitada, sin duda para que, pesando toda la responsabilidad sobre el Gobierno, pueda haber pretexto, llegado el caso, de censurarlo. Está bien: pongamos término á esto. Yo, aun prefiriendo la fórmula del voto, ruego á la Comisión acepte la propuesta del Sr. Urzáiz. (*El Sr. Pedregal*: Eso no, pido la palabra).

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Yo ruego á los Sres. Diputados que si les parece ya llegado el momento de que pongamos término á esta discusión, lo

hagamos, porque después de todo estamos discutiendo sobre un juego de palabras. (*Aprobación*).

Ahí está el voto. Resulta que todos, menos el Sr. Urzáiz, están conformes con él. (*El Sr. Urzáiz: Y S. S. antes*).

Ya he dicho que prefería el voto á lo que propone S. S.: porque yo prefiero que esa autorización esté fuertemente limitada, que no que sea amplia. Eso es lo que he dicho; pero no quería hacer cuestión de ello.

Su señoría se empeñaba en que la autorización fuera en los términos que S. S. expresó, y yo rogaba á la Comisión, para acabar el debate, pues llevamos ya tres cuartos de hora discutiendo, rogaba á la Comisión que aceptara esa solución; pero veo que inmediatamente se levantan de los demás lados de la Cámara las representaciones de los distintos partidos y dicen: «No estamos conformes con esa fórmula y sí con la del voto.»

Ellos piden limitaciones, restricciones al arbitrio gubernamental; ¿qué he de hacer yo más que levantarme á decir: pues yo también quiero esas limitaciones. (*Muy bien, muy bien*).

El Sr. Pedregal dijo: «En el voto hay un inciso, y ese inciso puede dar lugar á interpretaciones no conformes con el espíritu de la ley.» Y basta que lo diga un Sr. Diputado para que el Gobierno se crea en el caso y en el deber de decir, pues que se suprima ese inciso, para evitar todo linaje de dudas, de suspicacias y de sospechas. (*Muy bien, muy bien*).

¿Es esto? Pues si es esto, ruego á los Sres. Diputados que con esa ligera modificación lo voten y den por terminada la discusión.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): La ley está clara. No creo que sobre eso puedan suscitarse controversias. Lo que única y exclusivamente ha de segregarse para no computarlo en el capital son las amortizaciones ordinarias que se refieren al desgaste, al demérito, à la pérdida de los elementos de producción; porque es claro que estos elementos de producción hay que amortizarlos, y esa amortización que es ordinaria no puede computarse en el capital, porque representa una disminución de valor de los distintos elementos que integran el capital; pero es que esta misma amortización de carácter ordinario se computa en el capital si rebasa los límites marcados en el Reglamento de 1906 y en el Real decreto de 1908, esto es, el 15 por 100 del material industrial y el 5 por 100 de lo demás.

Y cité un caso, el de una Sociedad cuyo capital estuviere formado por varios elementos, entre ellos una mina; esta mina se amortiza con los beneficios sociales; ¿es que ya no forma parte del capital? Ciertamente; y por esta razón es preciso computar la amortización, so pena de dejar fuera de cuenta esa mina que sigue explotándose por la Sociedad y produciéndole beneficios.

Habló también S. S. de la amortización de obli-

gaciones. Ya tengo dicho que hay que computarla; como debe computarse la amortización de acciones; salvo el caso, á que también aludía el otro día, de reducción del capital; pues es claro, según el texto del dictamen, que esta reducción no se computa; lo contrario sería absurdo. Pero esa reducción del capital, sabe muy bien el Sr. Garriga que ha de ajustarse á las prescripciones del art. 168 del Código de Comercio, y que para que surta efectos contra tercero es condición precisa, según los artículos 24 y 25 de aquel Cuerpo legal, que se inscriba en el Registro mercantil. Creo, pues, Sres. Diputados, que el artículo del dictamen á que acaba de referirse el Sr. Garriga está claro; que no puede dar fundadamente ocasión á dudas.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES

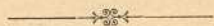
del día 30 de Noviembre de 1910.

PRINCIPALES MANIFESTACIONES

hechas en el Congreso por el

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

el día 30 de Noviembre de 1910.



*Al discutirse el articulado del proyecto de ley
reformando el impuesto sobre las utilidades*



El Sr. Ministro de HACIENDA (Coblán): Cuando he tenido el honor de hacer el resúmen del debate de totalidad del proyecto que se discute, cuidé muy especialmente, contestando á una afirmación del Sr. Bargamín, de demostrar que no se había rectificado en nada el principio que inspiraba el proyecto; que ese mismo principio es el que informa el dictamen de la Comisión.

Para demostrarlo me referí á un hecho indiscutible, perfectamente cierto, el de que, á consecuencia de haber pasado á tributar por utilidades las Sociedades anónimas y comanditarias por acciones, Sociedades gravadas antes con la contribución industrial, se daba el caso de que un sin número de ellas se sustraían al tributo;

no pagaban por industrial, porque no estaban sometidas à esa contribución, y no pagaban por utilidades, ò pagaban una cuota insignificante, porque en sus balances ó aparecían solamente pérdidas ó muy exiguas ganancias y añadía yo que, no era posible que esta situación perdurase; que era necesario adoptar disposiciones para evitar que estos casos pudieran reproducirse, ó mejor dicho, pudieran continuar, y que era de absoluta necesidad, y este es el principio que informa el proyecto, dotar á la Hacienda de algún medio para imponer una cuota mínima, anticipo de la de utilidades.

Yo nunca he creído que la contribución industrial fuera el medio más adecuado para realizar ese fin, y estimo que no lo es, primero porque como sabe muy bien el Sr. Azcàrate, la contribución industrial descansa en signos externos, y por consecuencia, tratándose de grandes empresas, representadas principalmente por las Compañías anónimas, es claro que el de los signos externos no es el método propio y adecuado para gravarlas; y segundo, porque yo jamás he creído que la contribución de utilidades y la contribución industrial se correspondan, sino que siempre he sostenido y sostengo que entre la contribución industrial y la de utilidades hay una grande, una esencial diferencia, la cual se pone bien de manifiesto y de relieve con solo recordar que en la contribución de utilidades hay que descontar los intereses de los capitales prestados, y en la contribución industrial, no.

Cuando mi proyecto fué conocido del público, se me presentó una Comisión que ostentaba la represen-

tación de todas las Compañías anónimas y comanditarias por acciones, eso se lo afirmo à S. S. y esos interesados, con la representación que ostentaban, me propusieron la fórmula que yo no tuve inconveniente en rogar à la Comisión que consignara en su dictamen; porque dado mi modo de apreciar la diferencia que hay entre la contribución industrial y la de utilidades, estaba y estoy convencido que el principio que informaba mi proyecto quedaba en todo su vigor, y la solución práctica propuesta por los interesados estaba màs en armonía con mi modo de pensar.

El Sr. Azcárate decía: «Bien; pero esto se puede lograr dejando en completa libertad à las Sociedades para que cada una pague por industrial ó por utilidades, según les plazca.» (*El Sr. Azcárate*: No es eso: O que paguen por el proyecto de S. S. ó por el dictamen de la Comisión.)

A eso voy. Lo que dice S. S. es que las Compañías tengan absoluta libertad para pagar, ó sea cuota por industrial que como anticipación consignaba yo en mi proyecto, ò esta otra del 3 y del 6 por 1.000 que se establece en el dictamen.

Pues yo le digo à S. S. que no creo que haya ningún Ministro de Hacienda que acepte esa proposición. Yo comprendo que se adopte uno de esos métodos; pero nunca ese sistema mixto, porque eso crearía una serie de perturbaciones en la administración é investigación del tributo, de que apenas se puede formar idea; y, además cada contribuyente examinaría y aquilataría qué cuota le convenía más, y tratándose de impuestos que

ambos á dos gravan rendimientos medios presuntos, todas las desviaciones posibles respecto del rendimiento efectivo serían aprovechadas por los interesados en uso de perfectísimo derecho; y en último término, la aplicación simultánea de ambas contribuciones cubriría una serie indefinida de errores tributarios que pagaría el Tesoro, y á eso yo no puedo asentar; eso no puedo aceptarlo. Si se presenta una enmienda suscrita por todas las representaciones políticas de la Cámara, pidiendo que se vuelva al primitivo proyecto, venga esa enmienda, que servirá de orientación al Gobierno para ulteriores resoluciones. Lo que no puedo hacer, repito, es aceptar el sistema mixto que propone S. S.: ó lo uno ó lo otro.

No sé si el Sr. Azcárate desea alguna otra aclaración ó declaración. (*El Sr. Canals*: Contestar á la enmienda.) No, perdone el Sr. Canals; el Sr. Azcárate, antes de apoyar la enmienda, limitóse á hacer, las observaciones que acabo de contestar.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Me importa únicamente rectificar una afirmación que acaba de hacer el Sr. Azcárate. Estima S. S. que esa cuota anticipada del 3 y de 6 por 100 es un impuesto sobre el capital. ¿No es esto? Pues yo le digo á S. S. que no; y fundo negación tan rotunda, en que los impuestos, como sabe S. S. mejor que yo, puesto que es maestro en todas estas materias (*El Sr. Azcàrate*: Nada de eso;

y cada día menos), me fundo, digo, en que los impuestos se dividen en nominales y reales; impuestos nominales son aquellos en que la base por que se mide el tributo y la fuente de que se paga son distintas, y reales son los que tienen idéntica base y fuente, y de aquí que este impuesto es un impuesto nominal sobre el capital, ya que la base para medir el impuesto es el capital, y la fuente de que se paga es el rendimiento. (*El Sr. Azcárate*: ¿Y si no lo hay? ¿Lo va á devolver el Tesoro?) Se trata Sr. Azcárate, de rendimientos medios anuales, que unas veces exceden y otras no alcanzan.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Nada más que para llamar la atención sobre este hecho.

El principio está admitido por la Cámara, es el del artículo 2.º, y ahora ya lo veis, por todos lados se levantan propuestas de excepciones. Yo declaro que si vamos por este camino, el impuesto de utilidades será nulo.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Sólo para recoger una indicación que al rectificar ha tenido la bondad de hacer el Sr. Bergamín; en nombre de la minoría conservadora. Me importa recogerla, para fines ulteriores del Gobierno; así como también necesito conocer la opinión respecto á ese particular de las demás

minorías. El Sr. Bergamín ha dicho que la minoría conservadora aceptó la fórmula que aparece en el dictamen de la Comisión, distinto en ese punto del proyecto, ó sea lo que hace referencia al 3 y al 6 por 1.000 sobre el capital, fué partiendo del hecho de que las Sociedades anónimas y comanditarias estaban conformes, y, por consecuencia SS. SS., como era lógico y natural prestaban también su asentimiento. El Sr. Suárez Inclán manifestó que, en efecto, los señores que recurrieron á la Comisión, los que conferenciaron con su presidente, los que visitaron al Sr. Ministro de Hacienda, formaban una Comisión que ostentaba la representación absoluta y completa de las Sociedades anónimas y comanditarias por acciones; y á consecuencia de ello no tuve inconveniente en entrar en negociaciones. Ya comprenderán los Sres. Diputados que yo no podía exigirles el poder, fié en la afirmación de todos aquellos señores que estimaba y estimo como cumplidos caballeros incapaces de faltar á la verdad.

Entré en negociaciones para llegar á la fórmula que ha cristalizado en el dictamen de la Comisión, y cedí en unas 300.000 pesetas, que es lo que representa la rebaja de la media décima; y cedí asimismo en tres millones y pico de pesetas, por la rebaja del $\frac{1}{2}$ por 1.000 en el impuesto del timbre. Hasta ahora no tenemos la prueba de que aquellos señores hayan ostentado una representación ficticia; pero aceptamos como verdad demostrada la hipótesis de que así lo hubieran hecho, hipótesis que, repito, es absurda á mi juicio, y de que por tanto, falte la base que ha inspirado el dictamen y

la conformidad del partido conservador, pues esto es lo que quiero recoger. Si se demuestra y se acredita que aquellos señores no ostentaban la representación de las Sociedades anónimas y comanditarias, todo aquel pacto quedará sin efecto, lo mismo la rebaja de la media décima que la del $\frac{1}{2}$ por 1.000 en el impuesto del timbre, y volveremos al proyecto, es decir, á la cuota por industrial ¿Está claro? Por ello, pues agradecería que así como el Sr. Bergamín, en nombre de la minoría conservadora, ha expuesto su opinión la expresaran también los jefes de todas las demás minorías, la que, como he dicho, puede servir al Gobierno como elemento de juicio para sus ulteriores resoluciones.

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Yo rogaría al Sr. Azcárate que tuviera la bondad de fijarse en lo que voy á decir.

Yo no opino como el Sr. Iglesias; creo que hay congruencia entre la enmienda y el artículo. Lo que si me parece es que hay deficiencia en el último extremo de la enmienda, porque el artículo, tal y como aparece ahora redactado, se refiere también á los espectáculos públicos, y la enmienda no se extiende más que á las Sociedades de enseñanza y á los periódicos. ¿No le parece á S. S. oportuno, por si esa enmienda fuera tomada en consideración, y á fin de que luego no surjan dificultades, el añadir ahora, aunque no sea más que de palabra, para los efectos de la votación, que se entien-

de sólo para la primera parte, pero no para los espectáculos públicos?

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Si el señor Quejana se hubiera tomado la molestia de fijarse en las firmas de la enmienda, encontraría en ellas la contestación á su pregunta.

A mí me dijo la Comisión: «Presentan una enmienda en estos términos» Pregunta mía: ¿La firma sólo la mayoría?» «No señor; la firman republicanos y carlistas.» (*El Sr. Iglesias García pide la palabra.*) «¡Ah!, en ese caso, es claro que la razón que yo he tenido para rogar que se retirara el artículo ha desaparecido.»

Yo esperé á la unanimidad para la retirada del artículo; en ella la inspiré; pero como aquella unanimidad ya aparecía rota en la enmienda, no he tenido inconveniente en decir á la Comisión que la aceptara. Ahí está la explicación de mi conducta. (*Aprobación en la mayoría.*)

.....

El Sr. Ministro de HACIENDA (Cobián): Son dos extremos á los que quiere S. S. que yo conteste: primero, á qué criterio respondió la redacción del art. 6.º antes de ser retirado; segundo, por qué después de haberlo retirado, se ha admitido una enmienda que dice

al pié de la letra, según S. S., lo mismo que el artículo retirado.

Primer punto. Yo he traído ese art. 6.º, no por el deseo de favorecer á nadie, ni de excusar á nadie del pago del tributo; he traído ese artículo precisamente para lo contrario: para que nadie deje de contribuir à la Hacienda. Porque, señores Diputados, no olvidemos que no se puede legislar para Madrid sólo, sino para toda España y que hay muchísimos periódicos que no pagan, ni por industrial ni por utilidades; y yo estimaba que en la forma en que venía redactado el artículo, se podía evitar esto, obligándoles à pagar por industrial.

Segundo punto. No hay contradicción en mi conducta; yo oí las opiniones de las minorías y me levanté y (si no me es frágil la memoria) me dirigí en estos términos á la Comisión: «En vista de la unanimidad que al parecer existe entre las minorías, el Gobierno ruega à la Comisión que retire ese artículo.» Mas al día siguiente ó á los dos días, se me hizo saber que estaba presentada esa enmienda, y como yo estimé que, ó los que firmaron esa enmienda habían roto la disciplina del partido á que pertenecen, ò que dentro de esas minorías se les había dejado en completa libertad, ya no existía, por tanto, la unanimidad que sirvió de base para retirar el artículo. (*Muy bien, muy bien en la mayoría.*)

¿Donde hay, pues, contradicción entre la conducta del Ministro de Hacienda retirando el artículo y la conducta del Ministro de Hacienda rogando à la Comisión que aceptara la enmienda?

ÍNDICE

	<u>Páginas.</u>
Discurso del día 2 de Julio de 1910.....	5
Discurso del día 15 de Octubre de 1910.....	47
Discurso del día 17 de Octubre de 1910.....	73
Discurso del día 16 de Noviembre de 1910.....	91
Discurso del día 23 de Noviembre de 1910.....	105
Discurso del día 28 de Noviembre de 1910.....	133
Discurso del día 1.º de Diciembre de 1910.....	155
Principales manifestaciones del día 2 de Diciem- bre de 1910.....	165
Discurso del día 6 de Diciembre de 1910.....	177
Discurso del día 12 de Diciembre de 1910.....	195

APÉNDICE

Discurso del día 3 de Noviembre de 1910.....	207
Principales manifestaciones del día 29 de Noviem- bre de 1910.....	229
Principales manifestaciones del día 30 de Noviem- bre de 1910.....	237

E.

DIS

19

E. COBIAN



DISCURSOS

19392